

5ª REUNION — Continuación de la 3ª SESION ORDINARIA — JUNIO 5 y 6 DE 1974

Presidencia del doctor JOSE ANTONIO ALLENDE, presidente provisional del Honorable Senado, y de la señora YAMILI BARBORA DE NASIF, vicepresidente 1º del Honorable Senado

Secretarios: señor ALDO HERMES CANTONI y escribana pública IRMA SOSA DE CESARETTI

Prosecretarios: señores RAFAEL ARANCIBIA LABORDA y DELFOR W. CARESSI

SENADORES PRESENTES:

ALLENDE, José Antonio  
ANGELOZ, Eduardo César  
AVALOS, Pedro Isaac  
BARBORA de NASIF, Yamili  
BARONI, Danilo Luis  
BELENGUER, Emilio  
BLANCO, Rodolfo E.  
BRAVO, Leopoldo  
BRIZUELA, Hugo Genaro  
CACERES, Rubén Osvaldo  
CAMPORA, Pedro L.  
CANTONI, Apolo  
CARNEVALE, Luis  
CARO, J. Armando  
CERRO, Francisco Eduardo  
CORNEJO LINARES, Juan Carlos  
CULASSO MATTEL, Luis  
CHAILE, Juan Carlos  
D'AGOSTINO, Lucio Roque  
DE LA RÚA, Fernando  
DÍAZ BIALET, Alejandro  
ELÍAS, Florencio  
EVANS, Carlos H.  
FONROUGE, Alberto M.  
FROIS, Domingo Andrés  
FRUGOLI, Amadeo Ricardo  
GARCIA, Américo Alberto  
GARCIA, Justino  
GRUBISICH, Pablo Eliseo  
HERRERA, Dermidio Fernando L.  
HERRERA, José Jorge  
JAUREGUI, Rafael Zenón  
LORENZO, Jorge Luis  
LORENZO, Ramón  
LOSADA, Mario  
LUDER, Ítalo A.

LUNA, Pedro Antonio  
MANCINI, Omar A.  
MARTINEZ, Julio César  
MAYA, Héctor Domingo  
MINICHELLI de COSTANZO, Martha S.  
MOREIRA, Miguel Orlando  
MORENO, Ramón Enrique  
MURGUIA, Edgardo P. V.  
NÁPOLI, Antonio Oscar  
PAZ, Eduardo Alberto  
PENNISI, Afrio  
PERETTE, Carlos H.  
POSE, Jorge Juan  
PUGLIESE, Juan Carlos  
RODRÍGUEZ, Ginés Froilán  
ROMERO, Humberto Antonio  
SALAS CORREA, Luis I.  
SALMOIRAGHI, José César  
SAPAG, Elias  
VALLE de GONZALEZ, Leni Rosa  
VIVAS, Angel Juan Gregorio  
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES, CON AVISO:

FRANCO, Carlos A.  
LEÓN, Luis A.  
SOLARI YRICOYEN, Hipólito  
VAL, Buenaventura Justo

AUSENTES, CON LICENCIA:

BENI, Juan Carlos E.  
BRITOS, Oraldo Norvel  
BRIZUELA, Guillermo Ramón  
ESPERANZA, Joaquín Horacio  
MARTIARENA, José H.  
PERONI, Carmelo  
SAADI, Vicente Leónides

## SUMARIO

## 1.—Asuntos entrados:

- I.—Decretos de la Presidencia. (Pág. 510.)
- II.—Comunicación de ministro. (Pág. 511.)
- III.—Mensaje del Poder Ejecutivo por el cual se solicitan acuerdos. (Pág. 511.)
- IV.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre modificación de la ley orgánica de la Policía Federal. (Pág. 511.)
- V.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 512.)
- VI.—Comunicaciones oficiales. (Pág. 515.)
- VII.—Dictámenes de comisiones. (Pág. 515.)
- VIII.—Peticiones particulares. (Pág. 516.)
- IX.—Proyecto de comunicación del señor senador Cerro sobre finalización de las obras del llamado acueducto Marcos Juárez (provincia de Córdoba). (Pág. 516.)
- X.—Proyecto de ley del señor senador Nápoli sobre construcción de un nuevo edificio para el hospital de San Carlos de Bartolomé. (Pág. 516.)
- XI.—Proyecto de ley de los señores senadores Sapag y Pose sobre prórroga del plazo establecido en el artículo 1º de la ley 20.525 (suspensión de ejecución de inmuebles afectados al régimen de propiedad horizontal). (Pág. 517.)
- XII.—Proyecto de ley del señor senador Nápoli sobre otorgamiento de pases para viajar en tren a alumnos del último año de estudios de la enseñanza media. (Pág. 518.)
- XIII.—Proyecto de comunicación del señor senador Bravo y otros señores senadores por el que se solicita al Poder Ejecutivo informe sobre la reincorporación de ex miembros del Servicio Exterior de la Nación. (Pág. 518.)
- XIV.—Proyecto de resolución del señor senador Cornejo Linares sobre incorporación de los señores senadores por La Rioja a la Comisión Especial del Noroeste Argentino. (Página 519.)
- XV.—Proyecto de ley del señor senador Herrera (J.J.) sobre declaración de prócer de la patria. (Pág. 519.)
- XVI.—Proyecto de ley del señor senador Carnevale y otros señores senadores sobre atención de subsidios por el Poder Ejecutivo y modificación de la nómina de la ley 20.665. (Pág. 520.)

2.—Continuación de la consideración del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Legislación General en el proyecto de ley de contrato de trabajo. Se aprueba con modificaciones. (Pág. 523.)

- 3.—A moción del señor senador Pennisi se considera sobre tablas el proyecto de ley en revisión sobre asignación a su viuda de las dietas que le hubieren correspondido al ex diputado nacional Mario Anselmo Vilada. Se aprueba. (Pág. 566.)
- 4.—A indicación del señor senador Luder se resuelve tratar en la próxima sesión el proyecto de ley por el que se solicita la prórroga del plazo establecido en el artículo 1º de la ley 20.525 (suspensión de ejecuciones de inmuebles de propiedad horizontal). (Pág. 567.)
- 5.—A indicación del señor senador Luder se gira a comisión con recomendación de pronto despacho el proyecto de comunicación del señor senador Bravo por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre reincorporación de ex miembros del Servicio Exterior de la Nación. (Pág. 567.)
- 6.—Apéndice:

- I.—Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 568.)
- II.—Inserciones. (Pág. 602.)

—En Buenos Aires, a los cinco días del mes de junio de 1974, a la hora 18 y 25, dice el

Sr. Presidente (Allende). — Cumplido el cuarto intermedio dispuesto en la última reunión, continúa la tercera sesión ordinaria del presente período legislativo.

Por Secretaría se va a dar lectura a los asuntos entrados.

## 1

## ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Secretario (Cantoni). — (*Leyendo*):

## I

## Decretos de la Presidencia

## 1

Buenos Aires, 5 de junio de 1974.

## VISTO Y CONSIDERANDO:

La autorización conferida a esta Presidencia por la Honorable Cámara, y lo prescrito por el decreto DP-128/74,

El presidente provisional del Honorable Senado de la Nación

## DECRETA:

Artículo 1º — Designase a los señores senadores doña Martha S. Minichelli de Costanzo y don Danilo Luis Baroni para integrar la Comisión de Trabajo y Previsión Social mientras dure la ausencia de los señores senadores don Carmelo Peroni y don Oraldo Norvel Britos, respectivamente; y para integrar la Comisión

## 2

**CONTRATO DE TRABAJO**

**Sr. Presidente (Allende).** — Continúa en consideración el despacho de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Legislación General en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre Contrato de Trabajo.

**Sr. de la Rúa.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. de la Rúa.** — En la reunión pasada, que hoy continúa, hemos escuchado un amplio y meduloso análisis de este proyecto de ley, producido por el señor miembro informante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. El es —como él mismo lo recordara— un legislador de extracción gremial y debemos destacar frente a su informe que lo ha hecho con ponderación y justeza y que, sin ser abogado, ha suministrado las bases para la interpretación jurídica de la nueva ley. Esto muestra cómo la técnica jurídica se vincula a la vida.

Como se ha dicho con razón, la vida real, las prácticas sindicales de fábrica, los usos profesionales, etcétera, constituyen órdenes jurídicos que habrá que tener presente cuando se trate de conocer el derecho del trabajo, real o vivo. El dato legal, la ley, son pautas de orientación de la vida social laboral.

La fundamentación básica de la ley de contrato de trabajo ha sido dada entonces por quien conoce el problema desde adentro y, en este sentido, mucho debemos agradecerle la medida, profundidad y claridad conceptual con que ha sabido hacerlo. Esa tarea era importante porque el derecho del trabajo puede y debe ser popular, como también se afirma, pero esto no impide que se someta a una construcción técnica. Y esta labor ha sido cumplida con jerarquía por el señor miembro informante, y lo decimos así, lealmente, a partir de una básica coincidencia con el espíritu de la nueva ley cuyo despacho hemos firmado aunque sustentamos —es cierto— algunas discrepancias particulares que no justificaban, comparativamente, la formulación de un despacho en disidencia. Es que todos hemos obrado con una inspiración idéntica: el sentido de justicia, la búsqueda del progreso social, el espíritu humanista, porque aquí se trata de atender en sus problemas al hombre que trabaja, brindarle seguridad, garantizar su respeto y servir así a la felicidad del pueblo.

Pienso que la superación conceptual acerca de la naturaleza del trabajo, visto en otros tiempos como una mercancía sujeta a las leyes del mercado, coloca al hombre contemporáneo, y especialmente al Estado, frente al problema de asegurar que esa noción dignificadora del esfuerzo laboral sea concretada en todas las latitudes del país, para lo cual es destacable el progreso que representa la sanción de un pro-

yecto de ley como el que consideramos, de carácter nacional y, por lo tanto, unificador e igualitario.

Pero esta ley, tal vez más que ninguna otra, exige el compromiso de las autoridades, de las organizaciones empresarias y de trabajadores —en fin, de todos— de una acción coordinada, constante y explícita, para asegurar su cabal cumplimiento. Esta será la única manera de no caer en una abstracción propia de un estilo declamatorio que debe ser superado.

Es decir, que no debemos conformarnos con tener buenas leyes sino que debemos cuidar que ellas se cumplan efectivamente.

Más adelante me referiré en particular al problema del acatamiento o no, en la práctica, a las leyes laborales; pero anticipo esta primera idea que se vincula al compromiso común de una actitud tendiente a que la norma que trata de resguardar los derechos de los trabajadores sea efectivamente reguladora en la realidad de la vida.

Señor presidente: asistimos a un momento muy importante en la evolución del derecho del trabajo en la Argentina. Este derecho no nace exactamente con la gran expansión industrial, como suele creerse. Sus problemas vienen de antes. Pero esa expansión los planteó más nitidamente.

Las primitivas regulaciones parten de un derecho de cuño liberal y de carácter individualista. En nuestro país, la influencia del *laissez faire, laissez passer* hizo que la realidad fuese quizá más penosa que durante la colonia; era duro el trabajo fabril y existía una suerte de relación patriarcal en el campo.

Las primeras normas que revelan una preocupación por el derecho laboral son las que aparecen consignadas en la Constitución de 1853, que asegura la libertad de trabajo e industria. Pero el trabajo se regula en el ámbito estrecho del Código Civil bajo la forma de la locación de servicios que es insuficiente para contener su realidad vital.

La ley 11.729, modificatoria del Código de Comercio, es un antecedente significativo, pero que tampoco agota el problema en su evolución acelerada. El Código de Minería y algunos códigos rurales contemplan ciertos problemas del trabajo; pero las pocas reglas normativas están adheridas e insertas todavía en las estructuras de un derecho en el que prevalece el interés privado.

En rigor, debemos decir que el problema social comienza a vislumbrarse en nuestro país a principios de siglo por obra de algunos observadores esclarecidos. Joaquín V. González prepara en 1904 su proyecto de ley nacional del trabajo, y Biale Massé elabora su estupendo «Informe sobre el estado de las clases obreras en la República Argentina» del mismo año. Y aparece la figura romántica de Alfredo Palacios con sus juveniles iniciativas respecto de los accidentes del trabajo y su voz enérgica recla-

mando contra la injusticia social que se advertía en muchos ámbitos de la República, enmarcado en la digna acción que cumplieron los socialistas argentinos.

Estas medidas que se van adoptando tienen, todas ellas, el signo de la protección. La ley 8.999 de 1912 crea el Departamento Nacional del Trabajo, en el cual le cupo actuar al doctor Alejandro M. Unsain, quien, con el correr de los años, sería actor principal en las profundas reformas que vendrían después.

Este panorama plantea la existencia, sí, histórica de esas normas, pero, a la vez, el problema de su eficacia, porque, insertas en una estructura individualista, no tenían siempre el correlato necesario de su efectivo cumplimiento.

Es lo que ocurre, señor presidente, cuando a los nuevos problemas se procuran soluciones dentro de una estructura que va perdiendo vigencia. El cambio social produce modificaciones en un derecho previsto para otro tiempo y distintas circunstancias. Y ese derecho sufre así las dificultades de una adaptación siempre difícil.

Debe llegar inevitablemente, entonces, el momento en que el derecho del trabajo se desprende del viejo tronco para lograr su autonomía; abandona el marco del Código Civil; se aparta de la concepción individualista y adquiere caracteres propios por su misma naturaleza, que compromete la intervención del Estado en su regulación y aplicación.

En nuestro país, señor presidente, habían entrado en escena los trabajadores, pero a través de una organización sindical dividida, incipiente y todavía débil. Era la época del apogeo del liberalismo económico. Pero vendrá el gobierno de Hipólito Yrigoyen, un precursor del sentido social, que abre las puertas de la casa de gobierno a los sindicatos, alienta la creación de regímenes previsionales y plantea la necesidad de establecer el salario mínimo, vital y móvil, por lo menos para los empleados del sector público. En las provincias se advierte una evolución intensa. A través de la potestad de policía del trabajo las provincias sancionan normas de real significado social.

Es indudable que a partir de 1943 se advierte una clara tendencia al aseguramiento de la posición del trabajador en la sociedad y en el Estado. El derecho del trabajo representa la equivalencia y coexistencia de los grupos. Su evolución tiende a dar primacía al derecho colectivo; o, como alguien dijo, a «realizar la coparticipación de los trabajadores en la configuración de su destino» mediante las organizaciones profesionales y las convenciones colectivas. Se logran conquistas sociales que el mundo había visto ya consagradas en otros países. Eran ya conocidos el pensamiento de Blum, en 1936, las novedades del *New Deal* y las reformas alentadas por el Partido Laborista, en Inglaterra. Es indudable que estas conquistas y reivindicaciones debían llegar a nuestra tierra.

En los años sucesivos el progreso continúa, incesante, en el campo del derecho laboral. A título de ejemplo citaré entre otras la ley 14.786 de conciliación y arbitraje, o la del salario mínimo vital y móvil, sancionada durante el gobierno del doctor Arturo Illia y, sobre todo, los principios recogidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que son, sin lugar a dudas, una avanzada del progreso social. También se sancionaron numerosos estatutos que regulan actividades específicas, cada uno de los cuales contiene para los distintos sectores nuevas normas que resguardan legítimos derechos y que luego, a partir de las experiencias sectoriales, se extienden con carácter general.

Existe, entonces, una importante obra legislativa y jurisprudencial, aunque muestra lagunas, defectos y errores propios de su rápida evolución y de ese carácter de emergencia que ha tenido muchas veces, o casi siempre, mientras se decantaban los principios fundamentales del nuevo derecho. Y esto, señor presidente, ha planteado desde hace tiempo la necesidad de codificar el derecho laboral. Fueron muchos los intentos y los esfuerzos que no pudieron concretarse. Y ahora esta ley viene a ser un paso importante en ese sentido.

Es indudable que existe una coincidencia general en cuanto a que la riqueza debe distribuirse mejor y con más justicia en el país y que viejos conceptos de la empresa y de la propiedad van cediendo ante la orientación social que aparece como signo de los tiempos. El derecho del trabajo, en definitiva, es un derecho social y tal vez sea ésta la expresión que mejor lo define en su real significación.

Con estos antecedentes venimos al debate de un proyecto tan importante como éste, que si bien recoge normas vigentes y la mayor parte de la elaboración jurisprudencial más positiva, incorporando principios nuevos, es preciso decir que ignora, omite o quizá posterga algunos otros.

Esto es un paso hacia la codificación, pero pienso que no se agota el examen de todas las normas vigentes con relación al contrato de trabajo. Por esto puede decirse que pese a la facultad que le acuerda al Poder Ejecutivo de ordenar el texto del artículo 10 de la ley —no de la regulación del contrato que se aprueba—, se deja campo a la confusión, al mantenerse vigentes una cantidad indeterminada de normas en base a un criterio de carácter general. Y si bien esto se hace con un propósito loable, es indudable que podía haberse logrado directamente si el examen se hubiese hecho a fondo de modo de agotarlo, para que la sanción del nuevo texto tuviera el valor de codificación y significara un real avance sobre la incertidumbre que a veces existe respecto de cuál es la norma efectivamente vigente.

Pienso, también, que faltan normas que protejan al trabajador de nacionalidad extranjera, el que, indudablemente, se encuentra desampa-

rado cuando no ha cumplido con los trámites de radicación.

Por nuestra parte, hemos presentado un proyecto en tal sentido, porque es preciso reaccionar contra el abuso que cometen algunos empleadores, quienes prevaleciéndose de que la ley no brinda protección a estos trabajadores, la mayoría de los cuales provienen de países hermanos latinoamericanos, proceden con injusticia y les pagan salarios inferiores a los debidos.

Entiendo también que la oportunidad era propicia para incluir aquí normas que protegieran a los discapacitados, de modo de asegurarles su acceso a las fuentes de trabajo dentro de sus posibilidades, tal como lo auspiciaba en un excelente proyecto de ley el senador por San Luis, señor Britos.

Existe, además, una omisión que nos preocupa intensamente. Lo ha explicado el señor miembro informante y no voy a ahondar en el argumento, porque mi colega, el señor senador por Córdoba, analizará el tema más detenidamente. Me refiero al problema de la jornada legal de trabajo. Habíamos dado media sanción en el Senado a un proyecto de ley que presentáramos junto con los señores senadores Angeloz y Solari Yrigoyen, por el cual se fijaba en 44 horas la duración de la jornada de trabajo semanal, reduciéndola así respecto a las 48 horas vigentes. Este era un paso importante, teniendo en cuenta que los países más adelantados del mundo tienen ya la jornada de 40 y aun la de 36 horas semanales.

Si se parte del concepto de que para realizar un trabajo suele emplearse todo el tiempo de que se dispone y que la realidad social y económica del país lo permite, esta decisión demorada de reducir la jornada legal de trabajo podía haberse dado ahora, confiando en la capacidad y en el esfuerzo de los trabajadores argentinos, ya que no causaría los perjuicios que seguramente se han supuesto al darse marcha atrás en esta cuestión tan importante. Se ha argumentado que no se retrocede del todo, y el señor miembro informante ha puesto su esperanza en las regulaciones que las provincias puedan dictar al respecto. Pero es que hay un principio de igualdad que debe regir en el país y no podemos alentar el resurgimiento de las desigualdades que antes existieron, por las que unas provincias tenían una jornada de trabajo mayor que otras. Este era un paso que debía haberse dado para que la ley significara una transformación más profunda de lo que en realidad significa.

Es que se trata, indudablemente, de una recopilación de lo vigente, con la incorporación de algunas instituciones nuevas, y de la consolidación de la principal jurisprudencia; pero no hay que llamarse a engaño: el proyecto de ley que analizamos no es revolucionario, aunque constituye un paso importante en el camino del progreso social.

Tenemos, por ejemplo, en este proyecto, el problema de la estabilidad. Salvo casos especiales como el de matrimonio o maternidad, se mantiene un sistema de despido potestativo por parte del empleador, que deberá ser reexaminado en el futuro. Aun quienes aceptan este tipo de despido admiten limitaciones y prohibiciones, muchas de ellas universalmente reconocidas. Es necesario, pienso, superar el concepto individualista en la materia, basado en una noción liberal de la propiedad y del contrato.

Frente a ello hay que recoger el derecho del trabajador a la estabilidad sobre la idea no sólo de la función social de la propiedad, sino también —como lo dice el profesor Nápoli— de la empresa concebida como una gestión social, que legitima su existencia no solamente cuando crea bienes y servicios, sino, sobre todo, cuando es capaz de posibilitar los factores de bienestar.

A esta altura surge inevitable la inquietud de expresar, en el momento de aludir al problema de la estabilidad, respecto de lo cual esta ley mejora las previsiones existentes, pero sin avanzar mucho más allá de ellas, que es penoso que cuando consagramos normas sobre el régimen de la estabilidad y de la indemnización por despido, los trabajadores del sector público se vean frente a la angustia y el riesgo de que pueda darse sanción definitiva al proyecto de ley de prescindibilidad que hemos discutido hace pocos días en este recinto. Ellos también son trabajadores y tienen derecho a esa tranquilidad y seguridad que deben reconocerle las normas y que en cambio se les está negando a través de esa ley.

No voy a entrar en el análisis en particular del extenso articulado de despacho, pero sí haré rápidamente referencia no a todas pero sí a algunas observaciones que se mantienen pese al trabajo intenso realizado en las comisiones. Es allí donde nosotros hemos volcado nuestro aporte, porque pensamos que se sirve así a un estilo fecundo de la labor parlamentaria.

Hay algunos errores que han quedado y deben ser mencionados para contribuir al mejor conocimiento e interpretación de la ley.

Existe una contradicción entre los artículos 130 y 161, proveniente de que el primero fue modificado con respecto al proyecto de la C.G.T., que declaraba inembargable el salario mínimo. Se desprende así también del mensaje que en este aspecto no fue corregido. Efectivamente, el artículo 130 declara inembargable el salario mínimo, salvo por alimentos, pero el 161 autoriza su embargo de acuerdo con la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. De manera que en una ley con pretensiones de codificación quedaría una contradicción que, aunque no sea grave, debió haber sido superada.

Con respecto al artículo 263 pienso que la fórmula es inconveniente, ya que la expresión «no consienta la prosecución de la relación ni aun a título provisorio» del primer párrafo, es novedosa en nuestro derecho. La fuente del proyecto, según lo expresa la exposición de

motivos, es el artículo 2.119 del Código Civil italiano. Sin embargo, el trasplante no es feliz, ya que la norma extranjera está impositada en otro supuesto que es el de distinguir los casos de resolución del contrato por tiempo indeterminado y por tiempo determinado.

En la doctrina italiana se separan ambas situaciones. «En el contrato a tiempo determinado el incumplimiento, con tal que tenga la importancia exigida por el derecho común, justifica siempre el desistimiento *in tronco*, no siendo posible el desistimiento con preaviso; en cambio, en el contrato a tiempo indeterminado el incumplimiento justifica el desistimiento *in tronco*, excluyendo el preaviso natural en tal contrato sólo cuando no consienta la continuación incluso provisional de la relación». Leo a Santoro Passarelli en sus *Nociones del derecho del trabajo*, traducción española, Madrid, 1963, página 224.

Como se ve, se introducen distingos que no caben en nuestra legislación, donde el preaviso es lógico en contratos por tiempo determinado e indeterminado. En resumen, pensamos que era preferible mantener la redacción de una norma tan importante sin introducir matices, que luego dan ocasión a interpretaciones discrepantes con perjuicio para la aplicación de la ley. Correspondería, pues, suprimir el giro «ni aun a título provisorio».

De todas maneras, la jurisprudencia es unánime en el sentido de que cuando ha mediado preaviso, el empleador no puede alegar justa causa, ya que admitió la continuación del vínculo. Es decir, que si la idea ha sido plasmar en la ley la doctrina aludida por la jurisprudencia, la redacción debió ser original, y no tomada de un texto extranjero que supone otras hipótesis legales.

Con respecto al artículo 276 —es una situación que se repite en otras normas—, es lamentable que el proyecto no haya agotado el problema y lo derive a una ley a sancionarse en el futuro. Si una preocupación importante es la de lograr la codificación y evitar la dispersión de normas, no resulta adecuado regular la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas que se operan en el seno de la empresa, y decir que la ley —una ley futura— provea los alcances y consecuencias de la resolución que en tales procedimientos se dicte. Hubiera sido importante que el tema se agotara y la norma resultase completa.

Debo referirme a otro aspecto que pienso tiene significación. En la lista de normas derogadas se ha suprimido el decreto ley 18.598/70.

Esto figuraba en el anteproyecto de la Confederación General del Trabajo. De acuerdo con lo propuesto por la Confederación General del Trabajo, los trabajadores bancarios y de seguro readquirían la estabilidad propia que habían establecido la ley 12.637 y los decretos 20.268 y 21.304 y que perduró desde 1940 hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en

1969, consideró inconstitucional la estabilidad absoluta que consagraban esas normas. La nueva ley, en lugar de restaurar aquella legislación, mantiene el régimen establecido por el gobierno de facto que dictó el decreto ley 18.598 en 1970.

A fuer de leales, señor presidente, debemos señalar también las importantes modificaciones introducidas por la comisión. No voy a analizar todas porque son muchas, pero deseo señalar algunas para que se ponga de manifiesto cómo esa labor ha sido fecunda y útil, aunque queden algunos problemas que nos sugieren observaciones.

Se ha corregido, por ejemplo, el título que decía «límite máximo», agregándole «excepciones», como en rigor corresponde en el artículo 216 relativo a la duración del trabajo.

Se ha procurado superar problemas en el artículo 269, que reconoce derechos a la compañera del trabajador no unida en matrimonio. Este artículo es un paso de avanzada y la nueva redacción mejora la norma. La redacción originaria era confusa y suscitaba errores y posibles injusticias, sobre todo con relación a la esposa separada sin su culpa. El nuevo texto tiende a solucionar los problemas que se planteaban, introduce distinciones necesarias entre el trabajador casado y soltero y reconoce a la compañera los derechos de la viuda en los casos que allí se determinan.

Es importante también la protección para el trabajador jubilado, y en este sentido la comisión ha introducido modificaciones al texto, equiparando al trabajador jubilado con el que está en actividad.

En cuanto al artículo 299 y sus concordantes debemos hacer algunas observaciones. Este artículo 299 no contenía elementos objetivos para su aplicación, dejando la misma en manos del juez, y aunque establecía un criterio restrictivo esta pauta no resultaba suficiente ante la gravedad de la sanción prevista. En la comisión se han modificado los artículos 196 y 197, suprimiendo la limitación a la mujer en lo relativo al despido por causa de matrimonio, existente en el artículo 196. Se ha modificado la presunción del artículo 197, reemplazando «dentro del plazo de seis meses de celebrado el matrimonio» por «dentro del plazo de seis meses antes o después de celebrado el matrimonio».

Queda el problema respecto de si al comprenderse los seis meses anteriores a su celebración no resulta en la práctica una solución excesiva. Se ha hecho al respecto alguna observación que no sé si puede considerarse suspicaz, pero lo cierto es que habrá que ver cómo funciona esta norma en su aplicación para que no genere factores de inseguridad.

Eso sí: entre las modificaciones introducidas debió haberse suprimido el artículo 299 porque pensamos que efectuadas aquellas este artículo pierde su objeto y razón de ser.

No podemos dejar de señalar, señor presidente, la importancia de esta ley en lo que

se refiere a la mujer trabajadora. Nosotros tenemos una posición clara que creemos importante en relación a la mujer que trabaja. Nuestra plataforma establece que es preciso eliminar toda discriminación contra la mujer e integrarla en el proceso social, económico y político, y aun auspicia la organización de la oficina de la mujer en el Ministerio de Trabajo, destinada a incrementar su incorporación en todo el ámbito laboral.

Esta ley que se va a sancionar, por las previsiones que contiene, es un paso más en la lucha por las reivindicaciones específicas de la mujer. Esta debe dejar de ser considerada, como a veces ocurre, mano de obra barata, para reconocérsele igual jerarquía que al hombre. Deben terminar las discriminaciones salariales que subsisten en muchos campos. Debe pensarse que en la administración el cincuenta por ciento de los empleados son mujeres, pero estos porcentajes se reducen significativamente cuando se trata de llegar a los cargos de jerarquía o de dirección. Las mujeres son el 88 por ciento del personal docente —que tiene la aspiración a un régimen jubilatorio como el que consagraba el artículo 52 de su estatuto, cuyo restablecimiento viene siendo demorado—, pero son pocas las que aparecen en las funciones directrices de la enseñanza argentina. La mujer trabaja en el campo y en las fábricas en proporciones a veces tan significativas como éstas: el 95 por ciento de los trabajadores del vestido son mujeres, según algunas cifras que pueden, tal vez, no ser totalmente actualizadas pero que se aproximan mucho a la realidad: el 90 por ciento en cerámica; el 80 por ciento en tabaco y en sanidad, y más del 60 por ciento en el gremio telefónico. Esto muestra, señor presidente, la participación de la mujer en el esfuerzo creador argentino y la importancia que tiene el preocuparse de su situación, asegurarle la protección adecuada y, sobre todo, un régimen igualitario que evite que haya empresas que se aprovechen de la mujer procurando mano de obra barata, y que subsistan normas discriminatorias respecto al hombre.

La mujer vota, señor presidente, y lo hace igual que el hombre; debe entonces dignificarse y posibilitarse su trabajo poniéndola en las mismas condiciones. Si la mujer es casada, a las cuarenta y ocho horas semanales de la jornada laboral debe agregarse el esfuerzo del trabajo en el hogar. Se convierte así en un ejemplo de sacrificio que no puede ser olvidado. Deben exigirse entonces guarderías, asegurarse su capacitación y el acceso a las mayores responsabilidades.

La ley significa un avance en tanto reconoce los derechos por maternidad, la protege en caso de matrimonio, la libera de tareas penosas, contempla el estado de excedencia y prohíbe cualquier trato discriminatorio. Pienso que el mejoramiento de la situación de la mujer en la so-

ciedad argentina debe completarse con otras medidas que tal vez no encuadren en el marco o las posibilidades de esta ley. Está pendiente en la Cámara de Diputados un proyecto de los legisladores del sector radical por el que se reconoce a la mujer el ejercicio de la patria potestad en las mismas condiciones que el hombre. Creo que debemos llegar a recoger el ejemplo de muchas legislaciones avanzadas que, como la belga, establecen que el salario familiar se abone directamente a la esposa, trabajo o no trabajo. El salario familiar que corresponde al marido lo percibe directamente la mujer y con ello se evitan muchas situaciones de injusticia y abandono que a veces se producen. Creo que el destino y el sentido del salario familiar es ése justamente.

Por eso nos sumamos complacidos a la sanción de estas nuevas normas que recogen algunas ya vigentes o criterios aceptados por la jurisprudencia y, sobre todo, que agregan previsiones nuevas. Esto marca un espíritu que debe intensificarse para que desaparezcan diferenciaciones injustas y se valore y exalte el papel de la mujer en la sociedad argentina, sobre todo de la mujer trabajadora, base fundamental del hogar y reserva cierta de los valores morales del pueblo.

También es importante que se recoja en la ley el régimen del salario mínimo, vital y móvil. Es de 1921 el proyecto del presidente Yrigoyen para los empleados públicos. Decía en un mensaje al Congreso, insistiendo sobre su sanción, palabras que reflejan el espíritu general con que se proyectaba esta importante innovación. «La reforma —decía el presidente de la Nación— responde a un propósito de reparación que debe revestir el carácter de uniformidad en todo el país.» Y resumía su filosofía y su pensamiento con estas palabras: «La grandeza de la nacionalidad reclama un mínimo de bienestar colectivo».

Es el mismo proyecto actualizado y la misma idea que recoge el gobierno presidido por el doctor Illia y que se plasma en la ley de salario mínimo, vital y móvil, que curiosamente en aquel momento era resistida por muchos sectores que se dicen progresistas, los que agitaban el fantasma de una posible repercusión económica negativa, sin comprender que el asegurar el derecho de los trabajadores a un salario mínimo que satisfaga sus necesidades vitales y las de su familia y que sea móvil, de modo que siempre esté adecuado a las vicisitudes de una economía cambiante, era una cuestión fundamental que no podía postergarse ni demorarse y que, por otra parte, estaba contemplada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Tal derecho hace al problema de la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso nacional en base a un indiscutible principio de justicia que nosotros resumimos en nuestro concepto de democracia social.

Esta idea del salario mínimo, vital y móvil reconoce muchos antecedentes, entre los que pueden mencionarse las recomendaciones de la Or-



ganización Internacional del Trabajo en la Conferencia de Chapultepec, en 1928; la IX Conferencia Interamericana de Bogotá, de 1948, que incluye la idea en la Carta Interamericana de Garantías Sociales; el Código del Trabajo, de Joaquín V. González, del año 1904, el cual contiene pautas que lo preconfiguran; un proyecto de Nicolás Repetto, de 1913; los recordados proyectos del presidente Yrigoyen; la iniciativa de Del Valle, de 1919; la de Alfredo Palacios, en 1961, y aun el decreto 33.302, que la contiene en germen, aunque nunca llegó a implementárselo.

Es indudable la importancia de esta provisión, a la que el propio Palacios reconoció como una medida tendiente a transformar estructuras y que significaba, en síntesis, una obra magnífica.

Por todo ello, es innegable nuestra complacencia por el hecho de que se haya incorporado el principio del salario mínimo, vital y móvil en el texto de esta nueva ley, aunque tiene algunos defectos importantes que analizarán otros representantes de nuestro sector.

Por último, cabe destacar como positivo lo previsto en el artículo 31, que tiende a eliminar las pseudoempresas de trabajo, a las que aludió la Organización Internacional del Trabajo, que son las que se quedan con buena parte de los haberes de los asalariados que acuden a ellas. Pensamos que este artículo 31 permitirá eliminarlas.

Esta ley, señor presidente, representa, por todo lo que he mencionado, un progreso significativo. Sin pretensiones revolucionarias marca un paso más en la incesante evolución del derecho social. Es susceptible de ajustes y mejoras frente a lo que sugiera la aplicación práctica de sus disposiciones novedosas. Como bien dijo el señor senador Cerro en la reunión anterior, la evolución futura recogerá seguramente instituciones nuevas, que ya se insinúan como la co-gestión y la participación en las ganancias, que el avance de los tiempos muestra con una presencia de reclamo cada vez más vigorosa.

Comparto la preocupación del señor senador Cerro por el servicio doméstico y también que no se hayan tenido en cuenta algunas especialidades de la tarea rural, de modo que haya protección efectiva para el trabajador del campo.

Bajo cierto aspecto, esta ley ha sido pensada, tal vez, más para las fábricas que para el trabajador de la tierra. Debemos admitir que la real protección del hombre de campo sobrevendrá cuando se examine y resuelva el problema de la tenencia de la tierra, poniendo orden en la situación de colonos, medieros y aparceros, de modo que aquella cumpla su función social.

Pienso que esta ley no alcanza a resolver sus problemas y habrá que ver si llega a eliminar desigualdades que ocurren, por ejemplo, en las zafras, entre los trabajadores dependientes de un ingenio y los que trabajan para un cañero independiente.

Quedan muchos problemas en toda esta materia de tanta significación. Esta ley se refiere al hombre que trabaja, pero está el entorno social del desempleo que a todos nos preocupa y que genera angustia, y el problema —no menos grave— del sobreempleo, señor presidente, del hombre que debe cumplir horas extras o tener más de un trabajo para subvenir a sus necesidades y a las de su familia; que parte de su casa en la madrugada y vuelve en la alta noche, en una jornada semanal que supera en mucho las cuarenta y ocho horas que todavía mantiene esta ley.

Habrà que examinar, ya en otro ámbito, el problema del trabajador que tiene que desplazarse a través de largas distancias y por mucho tiempo —una, dos o tres horas— para llegar al lugar de trabajo, lo que nos está planteando, en esta sociedad en que vivimos, y que pretende ser moderna, el problema acuciante de la reforma urbana para que el hombre no sólo tenga un trabajo y una vivienda dignos, sino también una ciudad digna en la que pueda realizarse plenamente —él y su familia— con los necesarios y decorosos servicios sanitarios, centros de educación, lugares de esparcimiento y medios de transporte suficientes y adecuados.

No sería justo con mis colegas esta tarde si a partir de esta ley me extendiera en toda esta problemática anexa. Pienso que al venir hoy a este recinto, al participar todos en el debate de esta ley, con el sentido social que inspiran estas reformas, estamos contribuyendo a poner el acento en la orientación de una solidaridad básica y de un profundo espíritu humanista, que es lo que tiene que presidir las soluciones que debemos emprender conjuntamente.

Sancionaremos esta ley, señor presidente, pero —como decía al principio— lo importante es que se cumpla. Las normas jurídicas contienen un mandato y una amenaza, para el caso que ese mandato se viole, de una sanción o del uso de la fuerza o de la coacción para obligar al cumplimiento. La mayoría de las veces se acatan voluntariamente, pero en otros casos la norma es violada. Cuando el derecho desconocido es de naturaleza privada sólo puede actuarse ante el reclamo de quien se siente afectado, pero cuando el derecho es público hace falta la intervención del Estado, y específicamente en materia laboral por vía de los poderes de policía del trabajo, en base a los cuales se debe vigilar y controlar el cumplimiento de la ley.

En rigor, no existen investigaciones importantes o suficientemente esclarecedoras sobre el incumplimiento de las normas laborales, pero hay algunos datos parciales que han suscitado mi preocupación. Refiere el profesor Rodríguez Mancini que entre julio de 1968 y junio de 1969 se realizaron 27.363 visitas a lugares de trabajo y se levantaron nada menos que 5.953 actas de infracción, o sea un 22 por ciento de los casos



inspeccionados —casos que no llegaban a plantearse en sede judicial—, que constituían indudablemente una infracción cierta y concreta a la norma laboral.

La mayor parte de esas infracciones eran por violación a la jornada máxima de trabajo y casi todas las restantes por obstrucción a la inspección, por lo que, en definitiva, no se sabe —de acuerdo a la estadística— en qué consistía la falta. Otras se refieren al trabajo de mujeres y menores, omisión de pago en tiempo de los salarios o infracciones a las normas de higiene. Ocurre, señor presidente, que aunque la infracción sea evidente, el Estado generalmente sólo se mueve a impulso de una denuncia o de un reclamo sindical.

En la provincia de Buenos Aires se necesitarían cerca de trescientos inspectores para poder inspeccionar, cada dos años, todos los establecimientos existentes. Pero el número de inspectores que actúan sólo permite realizar una inspección cada seis años a los distintos lugares de trabajo. No hablemos de lo que pasa en otros sitios del interior del país, donde la situación es, desde luego, muy grave.

En todo esto influye unas veces la falta de trabajo y en otras la pasividad sindical, que tiene indudable responsabilidad en la vigilancia del cumplimiento de las normas de trabajo. El sector sindical tiene un papel importante en la tarea de contribuir a que estas leyes de hondo significado social se cumplan efectivamente.

Ahora la policía del trabajo depende, prácticamente, de la Nación. Se ha sancionado la norma respectiva por la cual los departamentos de trabajo de las provincias dependen de la autoridad nacional.

Por eso es importante —y pienso que vale la pena decirlo— que se cumpla una acción real y efectiva, a la que debe sumarse una intensa gestión por parte de los responsables de la conducción gremial. Sólo así, con una adecuada y constante fiscalización, haremos que la ley se inserte realmente en la vida.

Y viene al caso una frase muy lúcida de Carnelutti, aquel jurista italiano que sabía descubrir, más allá de la norma, al hombre cuya necesidad palpitaba detrás de ella. «Las reglas del derecho —decía— no están incluidas en los códigos como en una vitrina; están operando en la vida, esto es, gobernando la vida de los hombres, donde para conocerlos no basta conocer la fórmula ni aprender la historia. Hay que verlos operar, es decir, ver cómo se comportan los hombres respecto de esa regla».

Y bien, señor presidente. Hemos hecho nuestro aporte en el seno de la comisión, y muchas observaciones dirigidas a mejorar el proyecto fueron recogidas. Aunque otras no lo hayan sido, pienso que esto alienta la búsqueda de soluciones por medio del esfuerzo común, y quisiéramos que la coincidencia en la labor parla-

mentaria pudiera extenderse a otros ámbitos en los que se suscitan discrepancias.

Estas palabras y nuestra actitud nacen de nuestra profunda convicción en la eficacia de la democracia social; encontramos en su filosofía la plena justificación de la dignidad humana, y por ello afirmamos que la democracia no es tan solo libertad y seguridad jurídica, sino que también se realiza buscando incansablemente un horizonte de igualdad social hacia el que nos conduce nuestra vocación.

Pienso que en la marcha ineluctable y acelerada del mundo contemporáneo —respecto de lo cual alguien pudo decir que no sabemos bien hacia dónde vamos, pero vamos rápido— es importante que cada uno de nosotros sume con lealtad su esfuerzo para ir rápido, pero sabiendo adónde.

La igualdad es el valor más auténtico que ha impulsado los movimientos de revolución y de reforma que han sacudido a nuestro país y a nuestra América. Para conquistarla hay que reconocer la dignidad del trabajo humano, motor decisivo de la profunda transformación que vivimos.

El trabajo es creación, desde la labor más modesta hasta la tarea más complicada que conduce a las innovaciones de la ciencia y de la tecnología. Una sociedad que no se establezca sobre valor tan sagrado quedará a la espalda de la historia. Una democracia política que no penetre a fondo en la realidad social y asuma el dolor, las carencias y las posibilidades del hombre concreto para hacer factible su plena realización corre el riesgo de quedar a mitad de camino. Sepamos nosotros recorrerlo.

Nada más, señor presidente. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Díaz Biale.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Díaz Biale.** — Señor presidente: la vida es ante todo un quehacer, y quehacer es trabajo.

Y el trabajo implica en sí mismo esfuerzos físicos e intelectuales, penosidad, fatiga, voluntad firme para vencer las dificultades, superar los inconvenientes materiales y espirituales y tener fe en la obra que se realiza.

Sólo por el trabajo llega el hombre a su plenitud, y la comunidad de hombres, los pueblos, a su grandeza. La vida es un quehacer que cuesta trabajo; pero este esfuerzo es el que le confiere al hombre señorío sobre la vida, confiurando de este modo su personalidad, y por el fruto de ese hacer, que es el acto creador de su lucha y de su forja, adquiere señorío sobre la naturaleza.

La vida humana se dignifica con el trabajo y por el trabajo y, por medio de él, el hombre se convierte en protagonista de la historia; hace historia y en la continuidad de las generaciones se proyecta en el futuro de los tiempos.

No en vano ha dicho Perón: «... para quienes seguimos creyendo en los destinos eternos del hombre y de la humanidad... levantamos nuestra bandera de justicia social... señalándole un alto objetivo: la dignificación de los trabajadores argentinos». Y ha agregado: «Nos pertenece por igual la suerte de la patria, en la que está contenida la suerte de cada uno de nosotros, en su presente y en su porvenir».

El trabajo tiene la virtud de aunar los esfuerzos. El trabajo no disuelve los vínculos, hace a la vida social accesible, comunicable y crea la hermandad. Afirmamos y estamos afirmando la primacía de la persona humana y, en definitiva, decimos de la dignidad del trabajo del privilegio que constituye ser trabajador.

El trabajo es el fundamento de la vida social, su esencia misma, la substancia viva de esa coexistencia exigida por la propia naturaleza humana.

Por eso la concepción justicialista, superando las teorías o sistemas materialistas del individualismo en sus diversas fracasadas versiones y del colectivismo en sus diferentes apariencias, todas destructoras, exalta los valores del espíritu, asigna al hombre una dignidad superior y afirma que éste ha de lograr sus altos destinos en la comunidad organizada con justicia.

El trabajo, en cuanto es fundamento de la vida social, deja de ser considerado en nuestra concepción justicialista un objeto de la economía y pasa a ser el sujeto o el principio de la misma, que la rige y la impera. Este es el concepto de Perón cuando desde la alta cátedra de su saber afirmó: «... todos los bienes económicos fueron creados y se crean y existen para el hombre... Por eso condenamos los principios del individualismo y del colectivismo que ponen al hombre al servicio de la economía y del Estado... La economía y el Estado deben servir a la felicidad humana, sirviendo al bienestar social».

En la exposición de motivos de este proyecto de ley se consigna en forma expresa ese pensamiento del general Perón, porque dice que el trabajo no es una mercancía y que el contrato que regula esta ley tiene por objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí.

La subordinación de la economía al derecho y la del derecho a la justicia social convierten en realidad normativa esenciales principios de la doctrina justicialista. Revela la historia que, por un impulso natural, todos los que se ocupan de un mismo arte o profesión forman asociaciones o cuerpos que son connaturales a la sociedad y representan una dimensión natural de la vida social del hombre, y en modo alguno una creación arbitraria.

Por eso decimos con Legaz y Lacambra y lo afirmamos para que lo escuchen las jóvenes generaciones, que las comunidades del trabajo tienen esencia ética y responden a un imperati-

vo profundo de la vida personal, y constituyen uno de los medios que vinculan al hombre con el Estado.

El sindicato tiene, entonces, un derecho que le es propio y un poder fáctico inalienable en la dialéctica real del Estado. Ese poder se conserva en la medida en que su vida concreta responde a lo que es su esencia: la hermandad, y en la medida en que la unión de los compañeros en el trabajo no se convierte en resentimiento clasista, y en la medida en que constituye un elemento integrador de la vida social y del Estado, bajo el imperio de la justicia social.

En la exposición de motivos del proyecto de ley de contrato de trabajo hace notar el Poder Ejecutivo que el primer y central principio que lo informa está dado por la transmisión a la ley de la idea de justicia social, que tiene por objeto la actividad productiva y creadora del hombre, la subordinación de la economía al derecho, y que el trabajo, por consiguiente, no es una mercancía.

En el mensaje se asevera que las normas que se proyectan llevan al plano de la dignidad jurídica positiva concepciones de justicia social, ínsitas en las doctrinas que tienen al hombre como destinatario no aislado, sino como ser que vive comprometido dentro de la comunidad organizada. En los derechos del trabajador, que Perón proclamó en 1947, y fueron después incorporados a la Constitución de 1949, con lo cual adquirieron jerarquía constitucional, se consagró el derecho a la defensa de los intereses profesionales y el de agremiarse como una atribución esencial que la sociedad debe respetar.

En breve referencia, decimos, estas verdades dieron sus frutos, y los frutos fueron dados por los mismos trabajadores porque, recibidos los derechos del trabajador, fueron proclamados los «deberes del trabajador» en armonía y concordancia plena con los derechos definidos. En síntesis, como Perón dijo, «se restituye a la sociedad en forma de trabajo lo que ella recibe en forma de bienestar, y frente al derecho a la defensa de los intereses profesionales, la obligación de poner la fuerza gremial al servicio de los intereses de la Nación».

En un ayer muchos no creían, otros no aceptaban y algunos sólo decían que era frase hueca, demagógica, sin contenido. Pero la única verdad es la realidad demostrada hoy.

Hemos dicho que el sindicato tiene un poder fáctico inalienable en la vida real, siendo por consiguiente uno de los medios ciertos de comunicación, o mejor dicho de vinculación, del hombre con el Estado. El pueblo, señor presidente, constituye la Nación, y la Nación la concebimos como un hecho de cultura, un hecho natural en cuanto ella responde a una exigencia humana y en ella viven los valores que un pueblo encarna y a los que aspira. En esencia, la Nación es la depositaria del conjunto de los bienes sociales, y es a través de ella que ha de darse la continuidad de esos mismos valores. Y estos

«bienes sociales» son los que constituyen el vínculo inalterable de la comunidad nacional integrada por los organismos o comunidades menores que, en síntesis, se condensan en esa unidad de destino que es la que hace su historia y rige la misma.

Bien ha dicho Perón: «...queremos una comunidad que tome lo mejor del mundo del espíritu, del mundo de las ideas y del mundo de los sentidos, y que agregue a todo ello lo que nos es propio, autóctono, para desarrollar un profundo nacionalismo cultural... Tal será la única forma de preservar nuestra identidad y nuestra autoidentificación: Argentina, como cultura, tiene una sola manera de identificarse: Argentina».

La Nación guarda una íntima vinculación con el Estado, porque el Estado es la comunidad toda organizada jurídicamente, que traduce en normas la forma misma de la vida de un pueblo.

Siendo la expresión jurídica de dicha vida, va de suyo que la «comunidad de trabajo», es decir «el sindicato», ha de tener, como lo dice el Poder Ejecutivo, una autonomía normativa que concuerda con el interés de la comunidad general, por medio de la intervención del Estado. Pero esta intervención del Estado no es la del Estado gendarme, prescindente en apariencia porque deja sin protección a los débiles —como lo expresara el senador Cerro— ni la del Estado concebido como un aparato burocrático, coactivo y autoritario, sino una intervención que la expresa por medio de la justicia social.

Es decir, de aquella forma moderna de justicia, que es conmutativa, distributiva y general.

En la Asamblea Legislativa el presidente Perón ha anunciado un «modelo argentino», en el que deberá concebirse «...a nuestra Argentina, como una democracia plena de justicia social».

Pero es de hacer notar, que esta recta intervención que el Estado justicialista se atribuye como un deber que le es irrenunciable, en cuanto al Estado compete, como rector de la vida colectiva, realizar el bien común, no lo es en el sentido de un nacionalismo ultramontano, sino en cuanto los valores nacionales se realizan para un valor más elevado: la humanidad.

Con profunda sabiduría, ha dicho recientemente Perón que «...a niveles nacionales, nadie puede realizarse en un país que no se realiza. De la misma manera, a nivel continental, ningún país podrá realizarse en un continente que no se realice».

El continentalismo configura una etapa de transición necesaria, para marchar hacia la unidad planetaria.

Este proyecto de ley se nutre de los antecedentes de la doctrina nacional, de los precedentes legislativos, de las propuestas y recomendaciones de congresos nacionales e internacionales y de lo aprovechable de la legislación extranjera.

Se supera así uno de los graves males que padecía la legislación nacional, que fue ese afán de nuestras clases dirigentes de implantar leyes y procedimientos que no tenían otro fundamento que el de que eran buenos en Europa, con olvido de la tradición nacional, de nuestros usos y costumbres, sin atender a la idiosincrasia del pueblo, a las circunstancias del medio material en que desenvuelve su vida.

Sin embargo, una limpia y noble tradición nos cobija. El respeto a la persona humana, que afirma la doctrina justicialista, tiene entre nosotros un viejo abolengo. El respeto al trabajador es su lógica consecuencia.

En América, señor presidente, cuna de nuestros antepasados, regía una legislación española que desde las Cortes de Toro dictaba normas para evitar «la barata» a los obreros; las tasas de los jornales debían fijarse teniendo en cuenta el trabajo, el precio de los víveres y las condiciones de la vida. Pero es en las Leyes de Indias donde se redacta una legislación muy especial, sobre todo en la parte concerniente a las provincias del Tucumán, Río de la Plata y Paraguay, donde rigió una legislación especialmente protectora. Como afirmó Biale Massé, ella merece ser conocida, por cuanto es la que formó al hombre argentino, altivo e independiente, que los enemigos de la democracia quieren que desaparezca, porque ello no conviene a otros intereses que no concuerdan con los nacionales. Se prohibieron así en las Leyes de Indias las encomiendas; los indios no podían ser sacados de sus pueblos sino en zonas determinadas, ni aun con permiso del cacique.

Para no fatigar al Honorable Senado con citas de muchas otras leyes, bajo cuyo amparo se formó el hombre argentino, quiero hacer una última referencia a una disposición de particular trascendencia que se atribuye como una conquista del socialismo moderno, pero que entre nosotros tiene más de tres siglos. Felipe II fijó el 20 de diciembre de 1593 la jornada de ocho horas: cada día, cuatro por la mañana y cuatro por la tarde, repartidas convenientemente según los rigores del clima, para procurar la preservación de la salud.

Estos precedentes, puestos a modo de ejemplo y sin exclusión de otros, son los que prestan una acabada legitimidad al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que, partiendo del respeto a la persona humana, transmite a la ley las ideas fundamentales de la justicia social, que son su lógica consecuencia, como lo he afirmado, y son principio y fin de la doctrina justicialista.

Señor presidente: no puedo dejar de agradecer al señor senador de la Rúa el recuerdo que ha tenido para don Juan Biale Massé. No puedo, sin fáciles alardes ni torpes jactancias ajenas a mi espíritu peronista, dejar de evocar con humilde orgullo a quien fue mi abuelo. Quiero traer aquí su verbo y decir que hace más de setenta años, en una conferencia que

diera a los ferroviarios de Rosario, expresaba: «No esperéis oír de mi boca esas frases huecas que se han hecho tontas a fuerza de repetirlas y que a nada práctico llevan. Yo no voy a decir aquí aquello de ¡Guerra al burgués! ¡Fuego al capital! ¡Los derechos sagrados del proletariado! ¡Comuna y dinamita! Esas son mancanas que no sirven sino para retardar el progreso del obrero, calentarle la cabeza y remover lo que queda de salvaje en el fondo de cada hombre, transmitido por la herencia y que la civilización no ha podido arrancar todavía.

»Todo eso sirve para proporcionar zozobras, escasez y miseria a la familia, algunos palos que casi siempre reciben justos por pecadores, mayores triunfos de los que oprimen y mayores penas para los oprimidos.»

Les dice a los obreros que no les ha de exponer sobre el socialismo, porque la historia enseña que si los nombres son nuevos, las cosas, los hechos, son viejazos, viejos de miles de años, y que los resultados son según las circunstancias del tiempo y del lugar en que se han producido.

Les dirá luego que el camino del deber es el camino seguro del triunfo del derecho. Y para lograrlo les enseña que lo primero que hay que hacer es instruirse, porque instruirse es vivir, enmendar la vida, multiplicar las fuerzas, ser el rey de la naturaleza.

Les asegura que así podrán reclamar la razón y la justicia y que no escucharán a los insensatos que predicán el derecho a perturbar el orden, el atentado a la Constitución y la violación al Código Penal.

Les predica además sobre la unión que eleva el espíritu y hace nacer la conciencia de la dignidad y del poder. Enseña que la unión debe ser el dogma de los trabajadores, el arma que los hará invencibles, la fuente de su bienestar y de su progreso.

Saben los opresores que dividiendo tendrán espías que delaten, armas para matar los unos a los otros, para excitar la codicia, ahogar los deseos, explotar y degradar.

Pero el obrero, decimos nosotros, consciente de sus derechos y responsable de sus deberes, bien sabe, desde que Perón proclamara y concediera derechos y el pueblo quisiera cumplir con sus deberes, «que si los pícaros supieran las ventajas del obrar bien, serían buenos por pícaros».

Los conceptos de Biale Massé, exteriorizados en su informe sobre el estado de las clases obreras argentinas y en muchas otras obras, no fueron escuchados. Se perdieron como las corrientes de aguas puras en las arenas del desierto, pues los enemigos del pueblo lo habían hecho ya víctima de la persecución, la difamación y el odio.

En aquel entonces el trabajador y la fortuna, el pobre y el rico, formaban dos campos beligerantes regidos por una ley marcial de ruina y exterminio. Esta era la realidad. Los conceptos de Biale Massé morían en la incompreensión

de los patronos y en el fácil engaño en que los apóstoles del socialismo con sus libretos habían hecho caer a los trabajadores.

No quiero formular una crítica, entrar en debate sobre un argentino ilustre. Me refiero a Roque Sáenz Peña. Quiero sí citarlo para demostrar que en aquellos tiempos, lejanos para los jóvenes de hoy, cercanos aún para muchos contemporáneos, los derechos de los trabajadores eran sólo aceptados —como lo ha reconocido mi colega, el señor senador de la Rúa— por algunos elegidos de la inteligencia y del saber.

En ocasión del proyecto de Biale Massé sobre el servicio obrero doméstico, Sáenz Peña expresaba: «Querido amigo: en esta combustión de pasiones, de intereses y de rumbos inciertos, se me ocurre que es difícil acentuar el sentimiento del orden y reglamentar derechos de una muchedumbre que no los entiende y que se inicia recién en un noviciado de prerrogativas arrogantes». Pero para que no quede sombra, alguna duda sobre que la cita parcial ha sido hecha sólo para demostrar un estado de la conciencia político-social de su tiempo, voy a mencionar, en homenaje al mismo Sáenz Peña, uno de sus conceptos concordantes con el pensamiento de Biale Massé.

Decía que era indispensable reconocer derechos a los gremios, «en el interés de la misma sociedad, que condensa y comprende bajo un solo cuerpo, el trabajo y el capital y la relación metódica de estos dos elementos del trabajo humano».

Pero éstos eran —repito— conceptos de algunos pocos elegidos. Hasta 1943 existió una insuficiente legislación social. La hasta entonces dictada era inorgánica y parcial, no obedecía a un plan; respondía más a la necesidad de dar soluciones, a exigencias sectoriales, perentorias, accidentales, circunstanciales, más con el propósito de evitar o eludir violencias, determinadas por la tensión social, que por un verdadero propósito de implantar una real justicia social.

Por otra parte —ya lo dije— otro grave mal que padecía el país era el de la implantación de leyes y procedimientos exóticos, hijos de instituciones diferentes y opuestas a las nuestras, sin más criterio que el de que «son o parecen buenas en otras partes».

En su obra *La nueva legislación social argentina*, el doctor Jerónimo Remorino dijo: «Perón supo comprender y supo realizar. Supo hacer ambas cosas adecuadamente. Su derecho social, como toda su obra, tiene el valor insuperable de la autenticidad.

»Ocioso nos parece observar —agregaba— que ese derecho no se constituyó entre nosotros de una manera accidental y esporádica, al vaivén imprevisible de las circunstancias. Por el contrario; ese derecho fue creado por un pensamiento lúcido desde el principio de su formación. Y aun cuando la formación definitiva de esa doctrina —como lo afirmó Perón— ha requerido años de lucha y de trabajo, sus principios esen-

ciales ya estaban perfectamente establecidos en el día que inició la reconquista del país.»

El Poder Ejecutivo asume ahora, con este proyecto de ley, la responsabilidad de promover un orden jurídico para la liberación, y lo ha remitido conteniendo como principios generales y básicos la idea de la justicia social, la actividad productiva y creadora del hombre en sí, un estricto criterio de factibilidad, el predominio del principio de la buena fe y, finalmente, una relación que exterioriza y requiere «colaboración y solidaridad».

Entre los precedentes nacionales debemos citar el proyecto de ley nacional del trabajo que Roca remitiera al Congreso, preparado por una comisión dirigida por el ministro del Interior, doctor Joaquín V. González, los doctores del Valle Iberlucea, Bunge, Manuel Ugarte y Leopoldo Lugones, que trabajó sobre el informe del estado de las clases obreras argentinas de Bialek Massé. En especial, el Poder Ejecutivo ha tomado como fuente del proyecto el redactado por los doctores Nápoli, Despontin y Tissembaum, que fue la comisión designada por el señor presidente Arturo Illia en el año 1965.

Es justo hacer notar que los distinguidos juristas que el Poder Ejecutivo constitucional designó, al elevar el informe dejaron consignado que se tomaban en cuenta todos los precedentes nacionales, entre ellos el código de 1904, y la doctrina, citando fundamentalmente a los doctores Unsain, Saavedra Lamas, Ramírez Gronda y otros. En consecuencia, señor presidente, atendiendo a la especial referencia que en la exposición de motivos hace el Poder Ejecutivo al mencionado proyecto, cabe concluir que este que ahora consideramos se nutre en la tradición misma y busca las soluciones adecuadas, como se ha dicho, atendiendo al hombre argentino, a sus usos y costumbres, al medio en que trabaja, sin menosprecio de la legislación extranjera y respetando los acuerdos internacionales.

La tan mentada crisis del contrato de trabajo fundada en la quiebra del principio de la autonomía de la voluntad, como si a esta altura de los tiempos el bienestar de la sociedad pudiera quedar librado a la enconada lucha de los fuertes contra los débiles o dejar librados a los débiles a una desigual lucha contra los fuertes, llevó equivocadamente a otra concepción, en la que ni empleado ni empleador eran partes directas porque el Estado imponía la relación de trabajo en una especie de funcionarismo social que, en definitiva, implicaba la negación de la persona humana, el desconocimiento del valor ético de la comunidad de trabajo y la exaltada figura del Estado autoritario.

Este proyecto de ley, señor presidente y señores senadores —lo decimos aquí en este honorable recinto con orgullo argentino y para los argentinos—, consagra en normas la tercera posición justicialista enseñada genialmente por el

general Perón con independencia del individualismo y del colectivismo. En efecto, la definición del contrato de trabajo en la norma del artículo 23 contiene en síntesis la doctrina peronista; allí está el respeto de la persona humana en cuanto da valor a la voluntad de las partes, sus usos y costumbres, consagra el respeto a la comunidad de trabajo connatural a la sociedad, es decir, el sindicato, dando vigencia a los estatutos, convenciones colectivas y laudos, y al someter sus disposiciones al orden público queda todo el contrato de trabajo bajo el imperio de la justicia social, primero y central principio de la ley que se proyecta y que está manifestado en el contexto de toda la ley y en particular en las normas de los artículos 4º, 9º, 11, 17, 68, 71, 83 y 85, entre otros.

Señor presidente: este proyecto se conforma con una democracia social y es la promesa cumplida del general Perón de realizar la revolución en paz, substituyendo lo circunstancial, lo transitorio y lo inorgánico por las normas que integran este verdadero Código del Trabajo. Puedo repetir ahora: nos pertenece por igual la suerte de la patria. Este es el código de la dignificación de los trabajadores. (*¡Muy bien! ¡Aplausos!*)

**Sr. Angeloz.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

**Sr. Angeloz.** — Señor presidente: el propósito de reunir, de manera orgánica y en un solo cuerpo legal, las numerosas disposiciones que conciernen al contrato de trabajo es, sin duda, la característica más relevante y plausible de este proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Cabe reconocer, además, que tanto el señor presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, senador Afrio Pennisi, como los restantes señores senadores que la integran, se han empeñado en lograr el perfeccionamiento y la actualización de las normas laborales. Con su esfuerzo, han brindado un valioso aporte a la necesaria sistematización de las reglas a las cuales deberán ajustarse las relaciones del trabajo.

Al mismo designio obedeció el decreto 1.872, dictado el 9 de marzo de 1965, por el entonces presidente de la República, doctor Arturo Illia. En sus considerandos, después de invocar el artículo 67 de la Constitución, que «ha facultado al Congreso Nacional a dictar el Código del Trabajo y Seguridad Social», el presidente de la Nación expresaba que ya entonces era evidente la necesidad de prever el dictado de un código en el cual se desarrollaran y armonizaran «todas las instituciones del derecho laboral argentino».

Mediante el citado decreto fue designada una comisión compuesta por tres juristas a quienes se les encomendó la elaboración de un anteproyecto de código laboral. Los doctores Luis Despontin, Rodolfo A. Nápoli y Mariano Tissembaum fueron los redactores de ese amplio e

interesante anteproyecto elevado a la consideración del presidente de la República en mayo de 1966. La infortunada quiebra de la normalidad institucional impidió la cristalización de esa iniciativa que honra a sus autores y a su inspirador, es decir, al digno gobernante que fue destituido por la fuerza de las armas a fines de junio del mismo año.

Sin embargo, tanto ese anteproyecto del radicalismo como el proyecto de ley que consideramos, pese a que son —insisto en reconocerlo— incuestionablemente valiosos, presentan un aspecto susceptible de reforma y actualización. Me refiero a la jornada de trabajo, que constituye uno de los temas fundamentales dentro de toda legislación laboral y cuya duración no está concretamente determinada en el proyecto de ley concebido por el Poder Ejecutivo, ni en el dictamen de la Comisión de Trabajo. A mi entender, esa omisión que se advierte en el título IX, capítulo I, del proyecto originario, es importantísima e injustificada. Si bien es cierto que la comisión ha modificado el artículo respectivo, con ello no ha logrado reparar, en mi opinión, la grave omisión a que me refiero.

El artículo 213 del proyecto del Poder Ejecutivo expresa que «La extensión de la jornada de trabajo será fijada por las leyes, los estatutos profesionales y las reglamentaciones que se dicten, conforme a la modalidad o características de la actividad de que se trate». La comisión ha substituido ese texto por el siguiente: «La extensión de la jornada de trabajo será fijada por las leyes, los estatutos profesionales y las convenciones colectivas de trabajo. Las normas legales que las provincias hubieren sancionado o sancionaren atendiendo a la modalidad o características de la actividad y/o de las zonas o provincias de que se trate, en miras de adecuar la extensión de la jornada en sus respectivos ámbitos, se tendrán por incorporadas, con ese alcance, a la normativa federal sobre la materia».

Al confrontar esas dos versiones del mismo artículo, se percibe que en ambas se omite fijar la duración uniforme de la jornada laboral en toda la República, pese a que esa determinación, que falta en los dos textos, concierne a la esencia misma de la materia laboral sobre la cual se legisla. Debido a esa inexplicable y —diría— injustificable omisión de la ley sobre contrato de trabajo, quedarían subsistentes las normas que estableció, hace ya casi medio siglo, la ley 11.544, y persistiría la irritante desigualdad jurídica y económica que provoca actualmente en el país la existencia de semanas normales de trabajo de diversa extensión.

En cambio el artículo 221 del proyecto establece expresamente: «Queda prohibida la ocupación del trabajador desde las trece (13) horas del día sábado hasta las veinticuatro (24) del día domingo...». Lo natural y razonable hubiera sido que se determinara no sólo la duración del descanso sino también la extensión de la semana

de trabajo, en vista de la estrecha relación del período de labor con el de reposo y teniendo en cuenta la interdependencia de ambos. Pero no se trata exclusivamente de la notoria vinculación que existe entre estos dos aspectos fundamentales de la actividad laboral. Hay otras sólidas razones de orden jurídico y de naturaleza social y económica que aconsejan fijar expresamente la duración de la semana de trabajo en el proyecto que consideramos.

En julio de 1973 —y con el propósito de lograr que el tiempo productivo del trabajador dependiente se unificara de manera equitativa en toda la República— presenté a la consideración de esta Honorable Cámara, juntamente con los señores senadores Solari Yrigoyen y de la Rúa, un proyecto modificatorio de la ley 11.544. En él se establecía que la semana de trabajo en todo el país no podría superar las cuarenta y cuatro horas de labor. La Comisión de Trabajo y Previsión Social en pleno —y, confieso, con una gran adhesión del senador Pennisi— produjo un dictamen favorable a esa iniciativa, que obtuvo la aprobación del Honorable Senado en la sesión del 22 y 23 de noviembre del mismo año.

Fue amplia, entonces, la coincidencia que suscitó en este recinto ese proyecto, cuyas disposiciones substanciales, en virtud de las razones que expondré, deberían incorporarse a esta iniciativa para que cesara, sin tardanza, la desigualdad existente entre trabajadores y patrones de diversas zonas del país.

Además de afectar injustamente a varias provincias, esa desigualdad contraría el espíritu igualitario que campea en la Constitución Nacional y que debe regir la vida del país en todos sus órdenes.

El tiempo máximo de trabajo semanal fue fijado en cuarenta y ocho horas por el artículo primero de la ley 11.544. Esa ley nacional coexistió con leyes provinciales: por ejemplo, la ley 3.546 de la provincia de Córdoba, que limitaba la semana laboral a cuarenta y cuatro horas.

Durante la década que se inició en 1930, el mercado de trabajo se hallaba regido por la libre contratación o por ciertos contratos generales de carácter local. La naturaleza de la producción y de los mercados consumidores no enfrentaba competitivamente a los productos típicos de cada zona, región o provincia. En esa época, la implantación del denominado «sábado inglés» no produjo consecuencias negativas en las provincias que resolvieron aplicarlo.

Al finalizar la década del 40, comienza a operarse en el país una transformación industrial que trajo aparejados los consiguientes cambios sociales. La etapa de la libre contratación concluyó con la firma de los principales convenios colectivos de trabajo. Se fijaron los salarios nacionales por actividad y empezó a vislumbrarse así la existencia de un mercado competitivo.

El gobierno nacional estableció el sistema de las «quitas zonales del salario» pretendiendo con

ello brindar un aporte al desarrollo industrial del interior; se pensó, sin duda, que era preferible ganar menos a no tener salario.

Así nació y creció la industria en el interior. Un ejemplo de ello es el boom industrial de Córdoba, apoyado en la industria automotriz y favorecido por especiales condiciones fiscales y por el abundante suministro de energía.

En esos años la incidencia del «sábado inglés» podía compensarse gracias a la disminución que se operaba sobre el salario nacional, establecido por convenio colectivo, de lo cual resultaba una paridad. Consecuentemente, en esa etapa de nuestra evolución industrial tampo fue un factor negativo para el progreso de las provincias la reducción de la jornada laboral. Si bien en esas provincias se trabajaba durante menos horas que en Buenos Aires, los salarios estaban equilibrados y la gran demanda promovía una producción que lograba precios remunerativos. Además, la inflación monetaria inducía a las empresas a adoptar una actitud financiera que les permitía la absorción de los aumentos de costos, por medios tales como la acumulación de materia prima.

En la década que se inició en 1960, y muy especialmente durante sus últimos cuatro años, el problema de los costos industriales adquirió notable relevancia al producirse el enfrentamiento de la producción del interior con la de Buenos Aires, en un mercado de competencia activa.

Este fenómeno se acentuó en la industria metalúrgica y, más concretamente, en la industria subsidiaria del automóvil. Los factores determinantes fueron los siguientes:

a) El deterioro progresivo de las ventajosas condiciones que le permitieron al interior promover su desarrollo industrial;

b) Una política de estabilización monetaria en lo financiero que no detuvo la inflación en los costos;

c) Inestabilidad institucional y de método en la conducción económica del país;

d) Ausencia de una política y de planes de desarrollo que alentaran el progreso industrial armónico del país y que favorecieran la integración de las zonas;

e) Preeminencia de Buenos Aires en el logro de beneficios;

f) Concentración del mercado de consumo en la zona de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires. (La capacidad de consumo en el resto del país está entre la mitad y un tercio de la posibilidad del hombre de Buenos Aires.);

g) Eliminación de las diferencias zonales de los salarios, de lo cual resulta que las provincias —Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy— que mantienen la jornada laboral reducida pagan un salario superior al nacional, establecido por convenio colectivo.

Pero el sábado inglés es algo más que una disposición de índole laboral que constituye un justo y razonable beneficio para los trabajadores. Su implantación tiene vastas y complejas implicaciones que podrían sintetizarse en la siguiente enumeración:

1º — En las provincias donde impera el régimen del sábado inglés, los obreros trabajan, como máximo, cuarenta y cuatro horas semanales, es decir, cuatro horas menos que los obreros del resto del país, o sea unas doscientas horas anuales menos, que equivalen a un mes laboral en el año. Mientras los obreros del resto del país trabajan doce meses en el año, los incluidos en este régimen trabajan sólo once meses.

2º — La consecuencia de esa menor actividad laboral es una menor producción.

3º — La incidencia de los gastos generales sobre una producción menor determina un mayor costo unitario.

4º — Por imperio de este régimen, el obrero gana virtualmente un 9,1 por ciento más de salario, que debe agregarse al salario establecido por las leyes o convenios colectivos de trabajo.

5º — Este régimen encarece la mano de obra, que es uno de los factores principales de los costos industriales, sobre todo en las empresas pequeñas y medianas, donde no está implantada la automatización.

La legislación provincial que otorga el beneficio del sábado inglés establece que el operario deberá trabajar sólo cuatro horas, es decir, media jornada el día sábado, pese a lo cual percibirá el salario correspondiente a la jornada completa. Para abonar al obrero que trabaja sólo cuarenta y cuatro horas semanales el salario previsto para las cuarenta y ocho horas que fija la ley 11.544, se obtuvo el coeficiente de 9,1, que resulta de dividir cuarenta y cuatro por cuarenta y ocho. De tal modo tendríamos:

1º — Un obrero que trabaje en Buenos Aires ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales, ganaría 48 por 100, es decir, 4.800.

2º — Un obrero que trabaje en Córdoba cuarenta y cuatro horas semanales ganaría 44 por 109,1, vale decir, que también ganaría 4.800.

Hasta el dictado de la mal llamada ley 18.204, que unificó las normas sobre descanso semanal y jornadas de trabajo, existían dos legislaciones aparentemente iguales y con idénticas denominaciones, pero diversas en cuanto a su contenido y alcance:

1º — En siete provincias argentinas regían leyes sobre el sábado inglés, cuyas características he señalado precedentemente.

2º — En la Capital Federal y en el resto del país tenía vigencia la ley nacional 11.640, también llamada de sábado inglés, pero substancialmente distinta de las leyes provinciales. La norma nacional prohibía el trabajo durante la



tarde del sábado, pero mantenía la jornada de 48 horas semanales. De esa manera, se trabajaba de lunes a viernes con un adicional de jornada que, sumado a la media jornada del sábado, permitía completar las cuarenta y ocho horas de labor semanal.

Al dictarse en junio de 1969 la mal llamada ley 18.204, las leyes provinciales fueron substituidas por la norma nacional y quedó derogada la ley 11.640.

Con esa mal denominada ley se pretendió acallar los reclamos de los empresarios afectados por la pérdida de las diferencias zonales de salarios, que hasta entonces habían servido para compensar los mayores salarios que implicaba la vigencia del «sábado inglés». No obstante, el problema no fue superado, y la nueva «ley», entre comillas, no conformó ni a los empresarios ni a los obreros.

El error fundamental consistió en agravar la desigualdad permitiendo que existieran simultáneamente obreros con «sábado inglés» y obreros carentes de ese beneficio, incluso dentro de una misma empresa. Además se permitió que subsistiera en ciertas zonas o provincias el recargo salarial del 9,1 %, del cual otras zonas o provincias quedaron exentas.

En cuanto a la mal llamada ley 18.204, cabe decir en resumen que: primero, no derogó el sistema del sábado inglés, aunque substituyó las leyes provinciales; segundo, produjo una desigualdad al excluir ese beneficio de los nuevos contratos de trabajo; tercero, no resolvió el problema inmediato de la incidencia salarial en los costos industriales; cuarto, no satisfizo las aspiraciones obreras, y quinto, dejó subsistentes las diferencias de salarios y de jornada que existían previamente entre las provincias.

Todo ello configura una grave desigualdad ante la ley, que constituye uno de los aspectos más arduos de la relación obrero-empresario-Estado y que podría sintetizarse en estos términos: hay provincias con una jornada laboral de 44 horas y otras donde la misma jornada tiene 48 horas semanales; hay provincias que pagan el 100 % del salario, en tanto otras abonan el 109,10 % del mismo salario; hay obreros que gozan del sábado inglés, y obreros que no lo tienen; hay distintas condiciones laborales en cuanto a jornada y salarios que crean condiciones económicas diferentes para las empresas que concurren al mercado nacional, y existe, en suma, una inaceptable desigualdad de trato tanto hacia el sector obrero como con respecto al sector empresario.

La lesión al principio de igualdad, que es uno de los postulados básicos de la Constitución Nacional, no puede ser más evidente.

A mi juicio, la grave situación que he intentado describir nos impone la ineludible obligación de establecer sin dilación la paridad de trato y la igualdad jurídica y económica.

Resumiendo esta parte de mi exposición, afirmo, señor presidente, que la existencia de jor-

nadas laborales de diversa duración provoca en nuestro país las siguientes consecuencias: 1º) En las provincias con jornadas reducidas, los empresarios pagan más a los obreros, pese a que éstos trabajan menos; 2º) En la Capital Federal, en la zona del Gran Buenos Aires y en el resto del país donde no existe la jornada limitada, comparativamente las empresas pagan menos a los obreros pese a que éstos trabajan más.

Ello facilita el progreso industrial y acrecienta la producción y las ganancias de las empresas en las zonas donde persiste la anacrónica jornada de 48 horas y, a la vez, entorpece y frena el desarrollo de las provincias que, en beneficio de los trabajadores, han establecido la jornada reducida.

La injusticia que proviene de esa desigualdad no la padecen solamente las empresas afincadas en provincias con jornadas de 44 horas, pues desde el punto de vista del sector obrero las consecuencias son, así mismo, negativas y pueden resumirse así:

1º) — En las zonas con jornada semanal limitada, el obrero cobra comparativamente más y trabaja menos, con lo cual no contribuye al aumento de la producción; 2º) — Donde la reducción de la jornada no existe, el obrero trabaja más y cobra menos. Por lo tanto, no participa en la medida justa de la mayor producción que promueve con su esfuerzo.

Es inicuo, señor presidente, que la generosa reducción de la jornada laboral se haya convertido en una rémora para el progreso de las provincias que la han establecido, revelando con ello una mayor sensibilidad social, por la cual están pagando actualmente un precio tan elevado como injusto.

Las consideraciones que he formulado no agotan ciertamente el tema de la jornada máxima de trabajo, puesto que sólo me he referido a la apremiante necesidad de reducirla uniformemente en toda la República.

Estimo que la naturaleza de este proyecto de ley exige un examen más amplio de ese tema, en razón de que la jornada es un elemento fundamental del contrato de trabajo.

A este respecto, es oportuno recordar que la jornada laboral y su reducción a límites razonables, con su régimen de adecuados descansos diarios, semanales y anuales, integra el concepto de dignificación del trabajo, considerado éste como un hecho o fenómeno social, pues debe admitirse que el trabajador no actúa sólo como individuo, sino también como miembro de un numeroso sector social, del cual dependen en gran medida la producción, el desenvolvimiento económico y el bienestar social general.

En esta materia la voluntad de las partes debe ceder ante la voluntad normativa de la ley, a la que le toca establecer con equidad la jornada máxima de trabajo, cuya duración

fue una de las primeras y primordiales cuestiones que afrontaron las legislaciones nacionales y las reglamentaciones internacionales sobre trabajo.

Al legislar sobre esta materia, se tiende a asegurar no sólo la salud de los trabajadores, sino también adecuadas condiciones de vida y de trabajo y al mismo tiempo capacidad productiva.

La reducción de la jornada de trabajo responde a razones de orden ético, porque se propone la humanización de las condiciones laborales; tiene un sentido social, en cuanto aspira a la conservación de la salud y vitalidad de los trabajadores, y reconoce motivaciones económicas, pues tiende a estimular la productividad de los individuos.

Al preservar al hombre del agotamiento y el desgaste que provocan las jornadas laborales excesivas, se lo protege como ser humano y se le otorga un tiempo propio, un tiempo del cual puede disponer libremente no sólo, desde luego, para el descanso sino para lograr su pleno desarrollo individual.

Desde principios del siglo XIX y para combatir los abusos que se cometían al comienzo de la etapa de industrialización, en algunos países de Europa asomó el propósito de establecer descansos para los trabajadores y por lo tanto limitaciones a su actividad laboral.

En Inglaterra, hacia el año 1833, se limitó el trabajo de los niños, y luego, tanto en ese como en otros países, se dictaron en el mismo sentido leyes de alcance más amplio, aplicables a los adultos, que redujeron la jornada, primero a doce, luego a once y finalmente a diez horas por día.

La jornada de diez horas se hallaba bastante generalizada en Europa cuando comenzó la primera guerra mundial. Tanto en el plano nacional como en el internacional, los trabajadores pugnaban por lograr la jornada de ocho horas. En el preámbulo de la constitución de la Organización Internacional del Trabajo, que data de 1919, figura, entre las medidas urgentes para mejorar las condiciones de los trabajadores, la reglamentación de la duración del trabajo.

En el mismo año, se aprobó el convenio sobre horas de trabajo en una conferencia general de la O.I.T., celebrada en Washington, que es el primero de una larga serie de instrumentos internacionales sobre la misma materia.

El convenio número 30 estableció, en 1930, la jornada de ocho horas para el trabajo en comercios y oficinas. Se dictaron normas internacionales semejantes para casi todas las actividades, excepto la agricultura.

La mayor racionalización y la creciente mecanización de los sistemas productivos indujeron a ciertos industriales, en América del Norte y en Europa, a reducir la semana laboral a cuarenta y cinco, y en algunos casos a cuarenta horas.

En 1935, el convenio 47 estableció el principio de la semana laboral de cuarenta horas, aplicado en forma tal que no produjera una disminución del nivel de vida de los trabajadores.

Después del período de reconstrucción de la posguerra, la limitación de la jornada de trabajo volvió a ocupar el primer lugar entre las aspiraciones de los trabajadores en los países industrializados. En 1962, se aprobó la recomendación 116, cuya primera parte expresa, en el punto 4º: «La duración normal del trabajo debería reducirse progresivamente... sin disminución alguna del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo».

En esa recomendación se propone una disminución progresiva con el fin de alcanzar la meta ya establecida en 1935, es decir, la semana de cuarenta horas.

Otros textos internacionales exhiben la misma tendencia a la limitación del tiempo laboral. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1966, establecen que toda persona tiene derecho a una limitación razonable de la duración de su labor (artículos 24 y 7, respectivamente).

Además, la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales de Bogotá, que data de 1948, preconiza la jornada de ocho horas y la semana de cuarenta.

Por su parte, la Carta Social Europea, del año 1961, prevé en su artículo 2º, una reducción progresiva de la duración del trabajo.

Pese a la evidente desactualización que aún hoy presenta la legislación argentina en esta materia, no han sido pocos los intentos que se realizaron en el orden nacional, para instituir una jornada acorde con la reducción que otros países han impuesto a la duración de la semana de trabajo. A ese respecto, es sumamente ilustrativo el debate en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, al considerarse el proyecto que dio origen a la ley 11.544, que limitó a ocho horas diarias y a cuarenta y ocho semanales la jornada laboral. En esa sesión, que se realizó el 18 de septiembre de 1928, dijo el diputado Carlos J. Rodríguez: «La jornada legal es un problema de palpitante actualidad que vuelve nuevamente a la deliberación de la Cámara. En el año 1921 tuve que informar el despacho de este proyecto en mi carácter de presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo. La Cámara lo sancionó y pasó al Senado, donde quedó definitivamente estancado».

Estas palabras de aquel distinguido legislador radical por la provincia de Córdoba, doctor Carlos J. Rodríguez, revelan con claridad que tanto los gobernantes como los legisladores que procedían de la Unión Cívica Radical pugna-

ban, desde hacía tiempo, por lograr la sanción de una ley que estableciera definitivamente la jornada legal de trabajo.

Y añadía el mismo legislador cordobés en ese debate: «...las naciones, después de la Gran Guerra, llegaron a establecer como una de las condiciones de la armonía y de la estabilidad de la paz social mundial, en el Tratado de Paz de Versalles, en el artículo 437, la adopción de la jornada de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales como ideal inmediato a alcanzar en los países donde aún no hubiera sido obtenido». «Nosotros —continuaba el doctor Rodríguez— estamos en retraso, porque debimos sancionar este proyecto en el año 1921, para siquiera haber tenido el orgullo de ser de los primeros que correspondían a la legítima reclamación de los trabajadores del mundo...»

«En nuestro país —expresa luego el mismo legislador—, varias provincias se han adelantado a este problema y han sancionado la jornada legal de trabajo con las limitaciones consiguientes, porque nuestro Parlamento, el primero que debía responder al anhelo nacional, había quedado en silencio.»

Desde ese debate han transcurrido unos cuarenta y cinco años, y a menos que en el orden nacional se consagre la semana de cuarenta y cuatro horas, incorporándola a este proyecto, todavía persistirá el retraso de la Nación con respecto a las provincias que hace ya largos años implantaron la jornada laboral reducida.

A su vez, el diputado Augusto Bunge, que participó en el mismo debate, dijo estas palabras, que merecen ser repetidas ahora, refiriéndose a la perduración en nuestro país de la anacrónica semana de cuarenta y ocho horas: «Estamos ya en retardo relativamente a todo el mundo civilizado, y esta consideración debemos hacérsela no por razones de vanidad sino por razones de hecho. Quien esté en retardo en materia de legislación social está en retardo en materia de civilización, porque el principal instrumento que promueve la civilización en la época moderna es la legislación social».

Por su parte y en el curso de la misma sesión, el diputado Adolfo Dickmann opinó lo siguiente: «...daríamos una ley mucho más en consonancia con la actualidad de la legislación sobre la materia si adoptáramos la semana de 44 horas y no la de las 48...». En efecto, señor presidente, ya entonces —hace 45 años— la semana laboral de 48 horas había sido atinadamente reducida en las naciones de legislación social más avanzada. No obstante, ésa es la jornada laboral cuya subsistencia se admite tácitamente, casi cinco décadas más tarde, tanto en el proyecto del Poder Ejecutivo como en el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Entre las más notables iniciativas sobre reducción de la jornada que precedieron a la sanción de la ley 11.544, merecen citarse: el proyecto de Código de Trabajo presentado en 1904 por

el senador Joaquín V. González, en cuya opinión el tiempo laboral debía limitarse, ya en esa época, a ocho horas diarias; el proyecto de Código Laboral redactado por el doctor Ramón Gómez, ministro del Interior del presidente Hipólito Yrigoyen y luego miembro de esta Honorable Cámara; los proyectos presentados por los legisladores nacionales Del Valle Iberlucea y Repetto, y la iniciativa de que fue autor Enrique Dickmann, quien virtualmente ya reducía, hace sesenta años, la jornada de trabajo a sólo 44 horas.

El entonces diputado nacional Dickmann presentó esa iniciativa en el año 1914 y luego la reprodujo cada dos años —en 1916, en 1918 y en 1920— para evitar que su proyecto caducara por la aplicación de la denominada «ley Olmedo».

En una breve generalización he sintetizado previamente los alcances de las legislaciones provinciales que han consagrado la jornada laboral reducida. Con el propósito de precisar esa referencia, citaré lo substancial de la ley 3.546 de la provincia de Córdoba, sancionada en el año 1932.

Su artículo 1º dispuso: «En las manufacturas, fábricas, usinas, talleres y construcciones, en las empresas de carga y descarga, en las casas comerciales, en las minas y canteras, en las oficinas, bancos y compañías de seguros, así como en las dependencias de esos establecimientos, de cualquier naturaleza que ellas sean, públicas o privadas, laicas o religiosas, aun cuando tengan carácter de enseñanza profesional o de beneficencia y en todas partes donde la medida pueda ser realizada sin perjuicio grave para el público, el trabajo cesará el sábado a mediodía, o sea a las doce horas».

El artículo 2º de la misma ley cordobesa estableció que «las personas comprendidas en los beneficios de esta ley no sufrirán rebajas en los sueldos o salarios como consecuencia de la aplicación de la misma, teniendo derecho a cobrar como día íntegro de trabajo la media tarea del sábado y, en su caso, la del día anterior al del descanso semanal».

De acuerdo con el artículo 3º, «para fijar el jornal del sábado o del día víspera del correspondiente al del descanso semanal, se promediarán los jornales de los últimos cinco días completos más el que corresponda al medio día que debe abonarse íntegramente». «El promedio resultante —agrega el artículo— será el salario del medio día de trabajo.»

En la provincia de Mendoza la ley 1.002, que data del año 1932, también implantó el «sábado inglés», prohibiendo la actividad laboral el día sábado después del mediodía. Su artículo 4º determinó que «los sueldos y salarios de las personas comprendidas en la siguiente ley no sufrirán disminución alguna como consecuencia de la aplicación de la misma y de la número 922, del salario mínimo».

En la provincia de Tucumán, el artículo 1º de la ley 1.518, sancionada el 26 de diciembre de

1932, dispuso: «En todo el territorio de la provincia queda prohibido el trabajo material por cuenta ajena y el que se efectúe con publicidad por cuenta propia en las fábricas, talleres, casas de comercio y lugares de dominio común, desde las trece horas del día sábado de cada semana hasta las veinticuatro horas del día domingo. A los efectos del cobro de los sueldos, salarios y jornales, deberán computarse los servicios prestados por los empleados u obreros hasta las trece horas del día sábado como jornada íntegra de trabajo».

En la provincia de San Luis, el 23 de octubre de 1934 la Legislatura sancionó la ley 1.385, cuyo artículo 1º establece que «en todos los sitios de trabajo, de producción, cambio o servicio, donde la medida pueda aplicarse sin perjuicio grave para el público, la tarea cesará el sábado a mediodía, o sea a las doce». Según el artículo siguiente, «el salario correspondiente a esa media jornada será igual al de una jornada íntegra de trabajo».

Para no prolongar en demasía esta exposición, sólo añadiré, señor presidente, la mención de la ley 1.721 de la provincia de Jujuy, sancionada el 30 de diciembre de 1946. Su artículo 1º limita la actividad a las trece horas del día sábado, en tanto que su artículo 3º determinaba que los trabajadores incluidos en la ley y que perciban «sueldo, salario o remuneración de cualquier género, tendrán derecho a cobrar como día íntegro la media tarea».

Todas esas normas provinciales están señalando el rumbo ineludible que la rezagada legislación nacional debe seguir en esta materia. Tengo la convicción, señor presidente, de que todos los obreros del país, todos los dirigentes gremiales que aspiran realmente al bienestar de los trabajadores y, sin duda, la propia Confederación General del Trabajo se inclinarían resueltamente por la definitiva implantación de la jornada laboral reducida en toda la República. Por ello afirmo que este proyecto, al no establecer la limitación uniforme de la semana de labor en todo nuestro territorio, contraría las justas aspiraciones y es adverso a los intereses legítimos de la totalidad de los trabajadores argentinos.

Es preciso considerar, así mismo, las diversas legislaciones nacionales que fijan los límites de la jornada laboral.

En Canadá, la ley del 18 de marzo de 1965 determina que «la duración de la jornada de trabajo... no deberá exceder de ocho horas diarias ni de cuarenta horas semanales». Agrega que «todo trabajador a quien se le ordene o se le permita trabajar más allá de la jornada normal de trabajo, habrá de ser remunerado, en concepto de horas extraordinarias, con arreglo a una tarifa no inferior a la correspondiente al importe de su salario normal, aumentado en un 50 por ciento».

En Checoslovaquia, la notificación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del 15 de

mayo de 1958 redujo la semana laboral, de acuerdo con la índole de cada trabajo, a cuarenta horas, cuarenta y una horas y un cuarto y cuarenta y dos horas y media.

En Yugoslavia, por decreto del 4 de abril de 1965, se promulgó la ley que estableció las bases para la implantación de la semana laboral de cuarenta y dos horas.

En Finlandia, la ley 713, del 30 de diciembre de 1965, limitó la duración normal del trabajo a ocho horas diarias y cuarenta horas semanales; de acuerdo con esa ley finlandesa, «la jornada normal de trabajo podrá prolongarse temporalmente cuando ello se convenga con antelación, por no más de una hora, siempre que la duración semanal media normal, durante un período que no exceda de tres semanas, sea de cuarenta horas».

En los Estados Unidos de América, la ley del 23 de septiembre de 1966, modificatoria de una ley del año 1936 sobre normas equitativas de trabajo, dispuso que a los trabajadores «ocupados en el comercio o en la producción de artículos de comercio» el empleador no podrá exigirles que trabajen «durante más de cuarenta horas semanales, salvo si percibieren una compensación por las horas de trabajo que excedan del número indicado, pagadas a una tarifa igual o superior al 150 por ciento» de su salario normal.

En la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, el artículo 42 del Código de Trabajo, aprobado por la ley dictada el 9 de diciembre de 1971, dice textualmente: «La duración normal del trabajo en la empresa, establecimiento u organización no podrá exceder de cuarenta y una horas por semana. A medida que se creen las condiciones económicas y de otra índole indispensables —prosigue el mismo artículo— se instituirá una semana laboral de menor duración». De acuerdo con el artículo 46 del mismo código soviético, «los trabajadores tendrán derecho a una semana laboral de cinco días, con dos días de descanso».

En Suecia, la ley 103, del 10 de abril de 1970, dispone en su artículo 4º que «la duración normal del trabajo no excederá de cuarenta horas semanales, excluidas las pausas».

En Honduras, el Código de Trabajo promulgado por decreto 189, del año 1959, estableció en su artículo 322 que «la jornada ordinaria de trabajo diurna no podrá exceder de 8 horas diarias y 44 a la semana, equivalentes a 48 horas de salario». «La jornada ordinaria de trabajo nocturno —continúa esa ley— no podrá exceder de 6 horas diarias y 36 a la semana.»

En la República Dominicana, según la ley 95 del año 1963, que modificó el artículo 137 del Código de Trabajo, la jornada activa no podrá sobrepasar las 8 horas por día y las 44 por semana. Añade esa ley dominicana que «el trabajo semanal terminará a las doce horas meridiano del día sábado».

En Austria, la ley federal del 11 de diciembre de 1969 establece la duración del trabajo semanal en 43 horas y prevé la reducción primero a 42 horas y luego a 40.

Según los datos extraídos de la obra de Archibald Evans, *Trabajo y tiempo libre*, publicada en 1969 por la Oficina Internacional del Trabajo, en la República Federal de Alemania las principales industrias van reduciendo la jornada de trabajo que, en general, es de 44 horas, a 41 o a 40 horas. En Dinamarca y Noruega la semana laboral más corriente tiene 42 horas. En Gran Bretaña la duración del trabajo semanal establecida mediante convenio colectivo oscila entre las 40 y las 44 horas. En Bélgica la jornada semanal se extiende entre los mismos límites: 40 y 44 horas. En el Ecuador, el mismo período laboral tiene una duración de 44 horas. En el continente asiático, Birmania y Singapur establecen para la industria la semana laboral de 44 horas, y Ceilán aplica una semana de 45 horas para el comercio. En Africa, señor presidente, los trabajadores de Guinea, Nigeria y Uganda cumplen alrededor de 45 horas semanales de trabajo.

Los países cuyas jornadas legales de labor acabo de mencionar pertenecen a América, a Europa e incluso a Asia y Africa. Algunas son naciones capitalistas otras socialistas, y en tanto que muchos de esos países están altamente industrializados, algunos sólo poseen industrias incipientes.

Pese a su diversidad étnica, demográfica, geográfica, sociopolítica, cultural, económica e industrial, en todos los países mencionados el tiempo normal y legal de trabajo es inferior, y a menudo sumamente inferior a la anticuada semana laboral de 48 horas que sigue teniendo vigencia entre nosotros, excepto en algunas provincias.

Provoca desazón y justificado desconcierto, señor presidente, que en gran parte de la República se mantengan las 48 horas de labor semanales, puesto que esa jornada de trabajo, además de ser absolutamente anacrónica comparada con las que fijan innumerables leyes nacionales y reglamentos internacionales sobre la materia, crea inadmisibles desigualdades en nuestro país y constituye un factor de injusticia, de discordia y de disociación en la vida argentina.

Es inocultable e imperiosa la necesidad de establecer concretamente en este proyecto de ley que la jornada semanal de trabajo en todo el territorio nacional no podrá exceder de 44 horas, agregando expresamente que ello no implicará una disminución salarial para los trabajadores cuya jornada se extiende actualmente más allá de ese límite. Si el proyecto del Poder Ejecutivo legisla: primero, sobre la duración de la jornada nocturna, en su artículo 217; en segundo lugar, sobre la duración de la jornada de trabajo para tareas declaradas insolubles, en el mismo artículo; en tercer término, sobre

el pago de las horas suplementarias de labor, en el artículo 218; y, por último, sobre el descanso semanal de los trabajadores, en el artículo 221, etcétera, no es natural, no es lógico ni es jurídicamente aceptable que omita nada menos que la determinación de la jornada semanal de trabajo, que constituye, como ya lo he sostenido, un elemento básico y esencial en este tipo de legislación.

Además, señor presidente, esta Honorable Cámara ya ha aprobado la reducción de la jornada semanal en todo el país a 44 horas. Si hace apenas seis meses los señores senadores, que son mayoría en la Comisión de Trabajo y Previsión Social y, así mismo, los señores senadores que integran la bancada más numerosa en este recinto estuvieron plenamente de acuerdo sobre la necesidad de imponer ese límite a la semana de trabajo, resultaría inexplicable que hoy se opusieran a la inclusión de la misma norma que entonces aprobaron.

A mi entender, señor presidente, si en esta sesión negaran su voto favorable a la incorporación de esa norma —y no lo digo con un sentido peyorativo—, cabría preguntarse si han variado —en materia laboral y social— las convicciones de los señores senadores del bloque mayoritario o si, a su juicio, la opinión del Poder Ejecutivo nacional, expresada en este proyecto, debe prevalecer sobre su propio criterio y sobre sus propios actos legislativos, en razón de la denominada «verticalidad» que se preconiza desde la conducción del justicialismo o de la «verticalidad» del Ministerio de Economía.

Confieso, señor presidente, que escaparía a a mi comprensión el hecho de que los mismos senadores que ayer consideraron necesaria la reducción de la jornada, se abstuvieran hoy de incorporarla al proyecto de contrato de trabajo, en el cual debe figurar necesariamente la duración uniforme de la semana laboral en todo el país.

En consecuencia, y a través de la Presidencia de este honorable cuerpo —y también personalmente—, exhorto a los señores senadores integrantes del bloque de la mayoría a que ratifiquen su asentimiento a esa razonable e imprescindible norma laboral que obtuvo su apoyo unánime en la sesión del 22 y 23 de noviembre de 1973.

Si el tema al cual me refiero hubiera sido objeto de consideración en alguna de las etapas del diálogo conciliador y constructivo que han entablado —para bien del país— el general Juan Domingo Perón y el doctor Ricardo Balbín, es decir, los representantes e intérpretes de las dos fuerzas populares que convocan y reúnen actualmente a la gran mayoría de los ciudadanos argentinos, de ese valioso diálogo hubiera surgido —sin duda— la conveniencia de instituir, inmediatamente y en todo el ámbito de la República, la jornada laboral reducida.

A mi juicio, la negativa a incorporar esa norma a este proyecto no es coherente con la orien-

tación ni con los postulados del movimiento justicialista, el cual —no vacilo en reconocerlo— ha logrado la concreción de no pocas aspiraciones legítimas del sector obrero.

En cambio, señor presidente, la subsistencia de la jornada de 48 horas condice incuestionablemente con los intereses de grandes empresas, entre las cuales estarían involucradas las que tienen relación con el «multiempresario» que ejerce actualmente el Ministerio de Economía de la Nación.

Afirmo, por último, que la fijación expresa y precisa de la jornada laboral en la ley de contrato de trabajo impondría la debida paridad jurídico-económica entre Buenos Aires y el interior y establecería la inexcusable vigencia del principio de igualdad entre todas las provincias, los empresarios y los obreros argentinos. (*Muy bien!*)

**Sr. Bravo.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

**Sr. Bravo.** — Señor presidente, señores senadores: el proyecto en consideración constituye un ordenamiento de normas orgánica y sistemáticamente efectuado. Revela, así mismo, un proceso de captación e interpretación en consonancia con la realidad social y antecedentes jurisprudenciales que al traducirse en normas pasan a integrar este cuerpo legal.

Si bien pueden señalarse algunos aspectos negativos, éstos resultan minúsculos ante todo lo positivo que merece ser destacado.

La buena fe, la colaboración y la solidaridad como pilares sobre los que debe asentarse la relación laboral son principios éticos y morales sostenidos con énfasis y en forma expresa en gran parte de su articulado. Es de esperar que si ellos rigen la conducta de las partes a lo cual deben prestar su mejor concurso los organismos de aplicación, este proyecto presentará un sentido nuevo y distinto que lo diferenciará de lo que en materia laboral había hasta la fecha.

Es positiva la norma contenida en el artículo 4º al definir el concepto de trabajo. Se lo jerarquiza en cuanto deja de mencionárselo como mercancía y se dignifica a quien lo presta.

Al expresar que el trabajo es toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración, se coloca a la relación que media entre las partes en su justo punto.

También en el título I merece destacarse el contenido del artículo 22 al estatuir la gratuidad de los procedimientos judiciales o administrativos para el trabajador.

Si bien no es novedad, ya que nuestras leyes prevén el caso del litigante carente de recursos al que por ese hecho no se lo priva de hacer valer sus derechos en los estrados judiciales, bastando acreditar sumariamente tal circunstancia, es plausible que de modo expreso y concluyente se lo diga en la ley para que el trabajador tenga la certeza de que podrá demandar

amparo judicial a sus pretensiones dando por sentado que carece de medios.

Es igualmente encomiable el tercer apartado del artículo 22 al imponer las costas al profesional actuante cuando de los antecedentes del proceso resultase pluspetición inexcusable. Es frecuente constatar en el fuero laboral la existencia de demandas por sumas infladas con el evidente fin de forzar a una transacción a la parte contraria o de lograr en definitiva más de lo que legítimamente corresponde. Son aventuras judiciales que violan normas éticas y carecen de sanciones. Profesionales cuya conducta no es del caso calificar abarrotan de pleitos a nuestros tribunales exhibiendo una temeridad que ningún juez podía castigar.

Ahora, con la norma incorporada se introduce un elemento altamente moralizador que constituye una novedad y que, a no dudarlo, producirá verdaderos beneficios.

Como contrapartida, puede anotarse un factor negativo introducido como segundo apartado del mencionado artículo 22, estableciendo la absoluta inembargabilidad de los bienes o ingresos por salarios correspondientes al trabajador por concepto de costas, salvo el caso probado de mejoramiento de fortuna.

Si el resto de este artículo evidencia un contenido de justicia, equidad y ética, no ocurre lo mismo con el segundo apartado. El pago de las costas es una sanción que se impone al litigante que carece de razón o de derecho. Excepcionalmente se lo puede exonerar. Admitir, lisa y llanamente, que al trabajador condenado en costas no puede serle embargada una cuota de su salario, y menos aún sus bienes, no significa otra cosa que afirmar que el trabajador jamás puede ser condenado al pago de las costas.

Sostengo que el trabajador merece la mayor protección frente al empleador porque es el más débil en la relación laboral. Pero también afirmo que esa protección no debe desnaturalizarse con el otorgamiento de privilegios que desvirtúan la igualdad ante la ley.

Se castiga al profesional con el pago de las costas cuando hay pluspetición inexcusable; pero si no hay pluspetición y el trabajador, asesorado mal o de mala fe, obtuvo sentencia desfavorable y condena en costas, ¿quién paga éstas? La respuesta es simple: nadie.

Mientras por una parte se pone una seria valla a las acciones maliciosas o que entrañan una verdadera falta de escrúpulos, por otra se facilita o alienta el mismo procedimiento. Teniendo el suficiente cuidado de no exagerar el monto de la reclamación se mantiene la posibilidad de proseguir accionando sin riesgo, aunque sea inexistente toda razón valedera para litigar.

En el título II, artículo 32 se responsabiliza solidariamente a quien contrate para la realización de una obra con un subcontratista por todas las obligaciones contraídas por éste con los trabajadores. Igualmente, se hace ex-

tensiva esa solidaridad en la responsabilidad por las obligaciones a quien teniendo habilitado a su nombre un establecimiento o explotación ceda tal establecimiento o explotación a un tercero y éste contrate personal.

Es una disposición justa, de gran sentido social y de protección al trabajador. Pero ocurre que en la práctica se corre el serio peligro de que por imperio de esta norma se vea perjudicado el sector al que se le quiso dar mayor protección.

Las grandes empresas, producto de la inversión de enormes capitales, son las que se valen de subcontratistas para la realización de las obras, y son también las que tienen mayor demanda de mano de obra. Pienso que al solidarizarlas en todas las responsabilidades puede ahuyentarse al capital, que indudablemente se volcará hacia inversiones más lucrativas, menos riesgosas y sin complicaciones de índole laboral. Ello, en definitiva, redundará en una disminución de demanda de mano de obra y, por lo tanto, en perjuicio para el trabajador.

Pienso que una de las industrias que podría sufrir las consecuencias de esta ley —para citar la que en este momento reviste especial importancia— es la de la construcción. Ella es la que absorbe mano de obra de todo tipo, especializada o no. Ella también es la que requiere enormes inversiones de capital. Si a las dificultades existentes, que nadie desconoce, para su normal desenvolvimiento, añadimos este factor de la solidaridad, temo que esta industria, como otras empresas, vean disminuir las inversiones con la consecuencia que es fácil suponer: menos trabajo y más desocupación.

Siempre dentro del título II, lo referido a la carga de la prueba (artículos 59 y 60), debe contemplarse en dos aspectos. El primero, contenido en el artículo 59, tiene sólido fundamento. Si el empleador no exhibe los comprobantes determinados en la norma o no reúne los requisitos legales, la prueba negativa estará a su cargo. Si el trabajador o sus causahabientes prestan declaración jurada sobre lo que debía estar consignado en esos libros, registros, etcétera, se impone al empleador una justa sanción a su negligencia o mala fe. Pero, en lo atinente al artículo 60, «cuando se controvierte el monto o cobro de remuneraciones», considero que es injusto cargar al empleador con la prueba contraria a la reclamación del trabajador. De este modo se desvirtúa el principio jurídico de que la carga de la prueba incumbe al que afirma, no al que niega.

Volviendo a lo ya dicho, se lesionan los principios éticos y morales enunciados desde que se está auspiciando la pluspetición o la demanda improcedente al disponer que tratándose del monto de las remuneraciones es el empleador quien debe demostrar que el monto requerido no es el verdadero. Esto, agregado a la eximición del pago de las costas al trabajador más el

ingrediente de algún profesional inescrupuloso, desquiciará una ley que, repito, es buena.

El capítulo VII de este título II, que versa sobre derechos y deberes de las partes, merece el más cálido elogio, especialmente el artículo 67, que da relevancia a la colaboración y solidaridad; el artículo 68, que obliga a las partes a obrar de buena fe; el artículo 82, que obliga al empleador a satisfacer las remuneraciones en los plazos y condiciones previstas en la ley, y el artículo 94, que impone el deber de fidelidad o lealtad del trabajador.

No puedo pasar por alto la disposición del artículo 112, que establece el concepto moderno de sueldo o salario, ni la del artículo 125, que define el salario mínimo y vital, ni la del artículo 129, que establece la movilidad del salario, así como tampoco la del artículo 130, que estatuye la inembargabilidad en la proporción que establezca la reglamentación, salvo por deudas alimentarias.

No quiero dejar de mencionar los artículos 137 a 163, que fijan los medios para que el trabajador no se vea defraudado, evitando que se le pague en bonos o cualquier otro medio que no sea dinero efectivo y en plazo determinado, así como tampoco las disposiciones que velan por el cumplimiento de la jornada laboral y el trabajo de la mujer ni las referidas a la protección a la maternidad.

El proyecto original remitido por el Poder Ejecutivo ha sufrido en la comisión pertinente algunas modificaciones que lo mejoraron sensiblemente, lo que pongo de relieve como homenaje al trabajo efectuado. Así, al artículo 23 se le agregó un apartado dando carácter de orden público a ciertas disposiciones. Al artículo 25 también se le hace un agregado para encuadrar dentro del contrato de trabajo a figuras presuntivamente no laborales en las circunstancias que se mencionan. Al artículo 56 se le incorporó un inciso de gran importancia: «La individualización en el registro que debe llevar el empleador de las personas que generen derecho a la percepción de asignaciones familiares». Al artículo 150 se le añadió un apartado por el que se faculta al empleador principal solidario, para retener de lo que deban percibir los contratistas o intermediarios, los importes que éstos adeudaren a los organismos de seguridad social, con motivo de la relación laboral con los trabajadores contratados.

Es así que se otorga al trabajo y al trabajador, mediante estos agregados y algunas otras modificaciones que sería largo enumerar, una mejor y mayor protección, lo que se acentúa en las siguientes disposiciones: artículo 167: cierre de establecimientos por vacaciones por mayor tiempo al de licencia que correspondiere al trabajador. Artículo 170: indemnización en caso de extinción del contrato. Artículo 193: garantía de estabilidad para la mujer durante el período de gestación. Artículo 206: trabajo de menores de 14 años



cuando media autorización del ministerio pupilar. Artículo 213: incorporación de las normas sobre jornada de trabajo dispuestas por las provincias.

Con emoción apoyo todo cuanto he destacado como positivo. Veo plasmados en estas normas los principios rectores de nuestro partido, el Bloquista, que dio a la provincia de San Juan en el año 1927 una Constitución verdaderamente revolucionaria al reconocer en su artículo 31 para todos los habitantes de la provincia el derecho a un mínimo de seguridad económica y a la jornada legal de trabajo que por ley se estableció en ocho horas; salario mínimo con relación al costo de la vida, o sea el goce de un salario mínimo, vital y móvil de acuerdo con el léxico moderno; seguro contra la enfermedad, vejez e invalidez; amparo a la maternidad, la viudez y la niñez, y reglamentación de los sindicatos y encauzamiento normal de las relaciones entre el capital y el trabajo, mediante normas legales que atribuyan a la autoridad las facultades necesarias para hacer efectivas las garantías consagradas en ese artículo.

Las observaciones formuladas no obstan para que considere revolucionario y digno de ser aprobado este proyecto de ley al que en general doy mi voto afirmativo, reservándome para proponer algunas modificaciones al ser tratado en particular.

**Sr. Grubisich.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

**Sr. Grubisich.** — Señor presidente: considero que es positivo el proyecto que estamos tratando, tanto en su espíritu favorable al trabajador como en su intento de agrupar en un solo cuerpo legal a las dispersas disposiciones que rigen diversos aspectos del trabajo, así como también la incorporación de algunas figuras nuevas que hacen a la relación entre trabajadores y empleadores.

Si bien es cierto que tenemos diferencias en particular, alentamos la iniciativa por ser coincidente con nuestras aspiraciones partidarias, sensibles a la promoción y actualización de las mejoras en el campo social, porque estamos firmemente convencidos de que toda mejora en el área social lleva implícito un claro sentido patriótico, ya que la grandeza de una nación se concibe en plenitud cuando tiene real vigencia la justicia social y su pueblo es feliz.

Humanizar las reglas en que se mueve la actividad laboral debe ser una preocupación constante de toda comunidad inteligente.

El trabajo es substancial en la vida del hombre y la más auténtica e innegable fuente de riqueza de los pueblos. Un pueblo laborioso siempre tendrá asegurado su mañana, cualesquiera sean las contingencias que le toque soportar, porque el don del trabajo constituye la semilla que asegura todas las expresiones y modela la infinita potencialidad colectiva.

Garantizar, pues, que el fruto del trabajo común se realizará bajo la protección de una justa

ley, no sólo beneficia a los sectores que en forma directa son comprendidos por ella, sino que por lo vasto de sus implicancias es toda la comunidad quien en definitiva se verá favorecida.

Sin entrar a distinguir dentro del plano filosófico sobre la significación del trabajo del hombre, la visión retrospectiva desde un ángulo netamente político nos obliga a relacionar el trabajo con el castigo, la explotación y la presencia dominante de dos clases protagónicas: la de los amos y la de los esclavos, que con todas sus consecuencias dramáticas han signado la historia de la humanidad, en torno a este rasgo tan propio de la vida del hombre.

Es que la disputa por la apropiación de los frutos que el trabajo produce no reparó en formas ni en medios, y esa realidad, más lo injusto de su reparto, provocaron el enfrentamiento y la lucha de clases. Porque así como el hombre intuía o imaginaba que por la creación alcanzaría su total realización, aprendía también la dura verdad de los hechos: que la riqueza forjada por su labor no le pertenecía en proporción tal como para que sus necesidades fueran cubiertas.

Tampoco, y lo ha señalado con acierto el señor senador de la Rúa, el progreso, con la producción masiva de bienes originada en la mecanización industrial, trajo una respuesta cierta a las crecientes ansias populares de tener niveles decorosos de vida. Pero lo que sí es cierto es que cambiaron los términos del sometimiento, y esclavos y amos del pasado, más que pobres y ricos, se convirtieron en proletarios y capitalistas.

Esta alternativa, con la concentración tanto de capitales como de obreros, modifica la relación de fuerzas, y fueron las agremiaciones, la unión de los trabajadores, el factor fundamental que les dio la proyección social indispensable para conquistar la reivindicación que merecían.

La movilidad obrera, con sus luchas, impregnó el campo de las ideas políticas, incluyendo las decisiones de los partidos, a tal punto que todos los movimientos de raíz popular incorporaron a sus programas los aspectos laborales como parte esencial de su actividad.

Estas manifestaciones en los conceptos políticos contemporáneos se consolidan con toda claridad en el mundo a partir de la última guerra mundial. Y así vemos que la mayoría de las naciones, aun con desigual grado de desarrollo y distinto signo ideológico, incorporan a su legislación normas de contenido laboral y social, llegando a modificar sus constituciones con la finalidad de incluir los llamados derechos sociales.

Es entonces el Estado contemporáneo un nuevo y decisivo protagonista del quehacer laboral y social, que cumpliendo su papel regulador del interés común viene a terciar con sus vastas posibilidades tanto en las condiciones en que se realiza el trabajo como en la distribución de la riqueza generada, superando así la vieja concepción de la economía como la ciencia de concentrar riqueza por ella misma, para dar

paso al sentido humanista, que hace participar a toda la comunidad que realiza el esfuerzo de forjar los bienes en la decisión, para instrumentar la manera más razonable de crearlos y determinar la mejor justicia de su reparto. Pero, además de garantizar esa equidad, es competencia del Estado contemporáneo asegurar que cada habitante tenga su trabajo, procurando la creación de suficientes empleos para las nuevas generaciones y también para aquellas regiones que, por carencias naturales o estructurales, no pueden brindar las condiciones mínimas de un trabajo digno y bien remunerado.

Y es precisamente éste uno de los aspectos donde el proyecto nos parece irritativo, porque al establecer condiciones básicas a partir de las cuales se asentarán los mayores beneficios a pactar por medio de los convenios colectivos de trabajo, abandona a su suerte a los sectores laborales más frágiles, y una serie de beneficios que la ley remite a la negociación entre las partes hará que los gremios fuertes alcancen conquistas que estarán vedadas para los más pequeños o menos cohesionados, por la misma característica de la tarea que realizan.

Esta situación margina principios de igualdad y solidaridad social que deben mantenerse para todos los trabajadores, cualquiera que sea su quehacer o el lugar geográfico que habiten.

Por otra parte, no es novedad la diferencia que soportan en desventaja los trabajadores del área de menos desarrollo, como el litoral y el puerto, a tal punto que, con realismo, se habla de la existencia de dos países: uno sometido y dependiente, productor fundamentalmente de materias primas, y otro proyectado al desarrollo por la intermediación o transformación de aquéllas. Y es precisamente el sector laboral el que recibe el mayor peso de la dependencia, pues a su costa se registran los más altos índices de enfermedad, analfabetismo o mortalidad infantil, por ejemplo.

Resulta tan profunda la desigualdad que muchos de los beneficios sociales ya consagrados no llegan a tener vigencia, por cuanto la actividad económica es tan precaria que su aplicación se vuelve parcial o nula, y en los lugares donde el problema se agudiza, como en muchos departamentos de mi provincia, esta ley no llegará con su beneficio, porque allí no existe el trabajo.

De toda el área nacional, el 70 por ciento se encuentra sometido a una suerte de saqueo humano, porque la zona de absorción no sólo se apropia de la riqueza material, sino que tras ella se lleva a los hijos de la tierra, para nutrirse de mano de obra barata, los que se ven forzados a buscar su sustento lejos del solar nativo.

Con relación a este pavoroso problema del interior argentino, es importante destacar un breve comentario, incluido en una publicación oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos, de los datos arrojados en la última encuesta ge-

neral de población, familia y vivienda, que dice lo siguiente: «Aunque el censo no registra datos específicos acerca de las determinantes de los movimientos migratorios, puede afirmarse que los hechos surgidos de los datos analizados son consecuencia de los profundos desequilibrios en el ritmo de crecimiento de las economías regionales, que crean las condiciones que favorecen el éxodo de importantes sectores de la población hacia zonas que, en función de su mayor desarrollo, pueden ofrecer oportunidades ocupacionales, salarios más elevados y la posibilidad de acceso a ciertos servicios sociales tales como educación, vivienda y salud.

»Este movimiento tiene efectos múltiples, tanto en las regiones de origen como de destino. Las áreas de emigración no sólo se ven afectadas por la pérdida de población en valores absolutos, sino que sufren el desequilibrio que produce en su economía el aumento proporcional de la población inactiva respecto de la que produce bienes y servicios».

—Ocupa la Presidencia la señora senadora Yamili Bárbora de Nasif, vicepresidente 1ª del Honorable Senado.

**Sr. Grubisich.**— Siendo el propio gobierno quien con sus organismos técnicos ha detectado la magnitud de este azote nacional, y resultando valor entendido, a esta altura, que es de su competencia regular el interés social, los hombres del interior olvidado reclamamos la formulación de una política especial, tendiente al arraigo de la población y a la ruptura de la dependencia económico-social a que estamos sometidos. Y si bien es cierto que un año en el ejercicio del poder es poco tiempo para realizar un balance en profundidad, no se advierte que la política seguida por el Poder Ejecutivo ni las leyes dictadas por este Congreso sirvan, hasta el presente al menos, para la creación de nuevos empleos en el interior.

Por el contrario, puedo señalar que en el caso específico de La Pampa el gobierno nacional es responsable de haber desalentado con su política agropecuaria al único sector de la actividad privada con un volumen ponderable de producción como para mantener distintas fuentes de trabajo, ligadas directa o indirectamente al quehacer rural.

Pero volviendo específicamente a la cuestión, quiero señalar también otro aspecto coincidente con lo manifestado por los señores senadores Cerro y de la Rúa en relación con el personal del servicio doméstico, para señalar que existe otra marginación a mi juicio injustificada y que se realiza con los obreros y empleados del Estado, quienes sólo lograrán los mayores beneficios de esta ley mediante la concertación con el mismo Estado. Esta contradicción, más la de propiciar normas generales para toda actividad laboral con un espíritu favorable al trabajador, pero excluyendo a los servidores del Estado, al-

tera la conducta social porque debilita la consolidación de una conciencia nacional respetuosa de las conquistas sociales por el convencimiento, más que por el rigor de la ley.

Otro aspecto en que el proyecto se ha quedado corto es el de la protección con respecto al despido arbitrario del trabajador. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional ha previsto una protección ante esa eventualidad, y en tanto la ley no reglamente su ejercicio no pasará de ser letra muerta o una declaración más. Se ha perdido la oportunidad o no se ha tenido la audacia de establecer el sistema de estabilidad, que es el más importante entre los derechos individuales del trabajador. El trabajo es el único medio digno para la subsistencia del ser humano, y su resultado es la base del engrandecimiento nacional. Esta trascendencia justifica la sanción de normas restrictivas que afectarían al empleador, para impedirle el ejercicio del derecho de rescisión, a menudo determinado por razones que estimo subjetivas, liberando al trabajador del temor por la conservación de su empleo, que menoscaba su condición de hombre libre.

La limitación de las causas de despido y la sanción al empleador tienen que ser la base donde se garantice la estabilidad. No es suficiente el término «justa causa» contenido en el proyecto, ya que es ambiguo y amplio. Además, siempre le queda al empleador su derecho a despedir sin causa, pagando la indemnización. Pero en una democracia social como la que espera la inmensa mayoría del pueblo argentino, al trabajador no le basta con que se le asegure una suma de dinero para el caso de despido. Es necesario asegurarle la conservación de su trabajo como garantía de seguridad individual y del cumplimiento de los fines sociales que debe respetar todo empleador.

Pero también aceptando el espíritu que lleva el proyecto, al reconocer el despido como acto normal y no como excepción, sólo se amplía a tres meses el tiempo de preaviso cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor de diez años en la empresa. No se computa la antigüedad real, que nace en el momento en que comienza a trabajar, o bien desde que realiza sus primeros aportes jubilatorios. Esto completaría, a mi juicio, normas tan importantes como las contenidas en el proyecto sobre la falta de presunción para la renuncia de los derechos que le asigna la ley, o la carencia de valor para las tan comunes firmas en blanco, o el establecimiento de la validez para la renuncia al trabajo mediante telegrama colacionado gratuito, o bien ante las autoridades competentes.

Tampoco el pago del sueldo anual complementario se realiza de manera que haga posible el goce de vacaciones para el trabajador y su familia, lo que no puede considerarse como un lujo al que sólo tengan acceso las clases pudientes. En este aspecto debe reimplantarse el pago en una sola cuota, toda vez que el fracciona-

miento que acepta el proyecto lo desvincula de la finalidad que motivó la implantación del sueldo anual complementario.

En lo referente al trabajo femenino, nos parece positiva la prohibición del trabajo penoso, insalubre o peligroso. Debe así mismo ampliarse a todos los trabajadores sin distinción de sexo, ya que en la forma como está redactado, solamente ampara a mujeres y menores, siendo éste un aspecto que se debe enfocar desde el punto de vista humano, evitando en todos los casos que la salud e integridad física de quien trabaja se encuentre amenazada como consecuencia de las condiciones laborales.

La situación de excedencia también nos preocupa, ya que en relación con la maternidad los plazos de seis a doce meses con el beneficio posterior de la renuncia al trabajo constituyen una novedad que la experiencia ha de comprobar. Nuestra objeción consiste en pensar que pueda llegar a dificultar las posibilidades de conseguir trabajo tanto para la mujer casada como para las nuevas generaciones, a menos que la ampliación de otros beneficios, como la organización de guarderías, aminoren los efectos que los términos del artículo pueden tener sobre la producción, si es que resulta más ventajoso para la mujer contar con la atención especializada de su hijo o ser tentada a renunciar a su trabajo para cumplir integralmente su función de madre.

Señora presidente: en el tratamiento en particular haremos algunas observaciones, confirmando el criterio con que apoyamos en general este proyecto, en la seguridad de que el trabajo dignificado será el camino donde el hombre encuentre su libertad y no la cadena que lo amarre al atraso y la miseria, reiterando que es responsabilidad ineludible del Estado moderno garantizar que cada habitante tenga su trabajo en la cobertura social que contemple las diversas contingencias de la vida.

**Sr. Frugoli.** — Pido la palabra.

**Sra. Presidente** (Bárbora de Nasif). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

**Sr. Frugoli.** — A esta altura del debate será sumamente breve, telegráfico, diría.

Quiero expresar con absoluta claridad mi total identificación con los principios fundamentales que inspiran el proyecto de ley en discusión, como así mismo mi coincidencia con los objetivos y el alcance laboral que se persigue con su sanción.

Hago hincapié —particularmente— en el concepto humanista del trabajo que recoge el proyecto de ley, en virtud del cual ya no es considerado una mercancía sino una actividad productiva y creadora del hombre.

No entraré en un análisis pormenorizado del proyecto porque pienso que ello no nos conduciría a ningún resultado práctico, ya que este proyecto de ley ha receptado la jurisprudencia predominante en los tribunales del fuero laboral, la doctrina dominante en esta materia con res-

pecto a determinados puntos y muchas normas legales en vigencia.

Por otra parte, hay en el proyecto muchos temas que constituyen materia opinable, respecto de los cuales existen varias posiciones igualmente válidas. De manera que detenerme en un análisis de ese tipo —reitero— no tendría resultados positivos.

Por otra parte, debo señalar que con el propósito de hacer un modesto aporte al perfeccionamiento de este instrumento jurídico he concurrido a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde he encontrado la mayor amplitud, receptividad, diligencia y buena voluntad por parte del señor presidente de la comisión, el senador Pennisi, a quien he hecho conocer algunas inquietudes sobre distintos temas del proyecto. Por esta razón, y a los efectos de salvar una suerte de responsabilidad íntima, haré oportunamente una breve mención de aquéllos.

Considero que la sanción de este proyecto de ley marca indudablemente un hito muy importante en la historia del derecho laboral argentino, que se inicia —allá por el año 1905— con la sanción de una ley que reglamenta el trabajo dominical y que a lo largo de todo ese período de tiempo, que va desde esa fecha hasta nuestros días, ha ido enriqueciéndose con el aporte de nuevas normas legales que son el fruto del esfuerzo de todos los partidos políticos que han tenido representación en el Congreso de la Nación. De allí que la satisfacción por la sanción de esta ley deba alcanzarnos a todos los argentinos que tenemos una auténtica preocupación por que problemas de esta naturaleza tengan una adecuada normatividad.

No puedo dejar de hacer una referencia, aunque sea redundante, pues ya se la ha hecho, a aquel proyecto de código de Joaquín V. González, que constaba de casi quinientos artículos y que no fue tratado por el Congreso en razón de que en el año en que se lo presentó se renovaron las autoridades legislativas y el Poder Ejecutivo nacional. Al leer este código y el mensaje que lo acompañó, como así mismo una brillante nota de Biale Massé —también mencionado, pero que no puedo dejar de citarlo— he experimentado una impresión muy fuerte ante la clarividencia de estas inteligencias privilegiadas que se adelantaban evidentemente a su época y demostraban un profundo sentido social y un conocimiento cabal de los problemas laborales de aquel entonces.

Tampoco puedo dejar de hacer una mención a la Constitución de mi provincia del año 1916, porque es la primera Constitución en el mundo que incorpora normas de carácter laboral. He observado con sorpresa que en algunas reformas históricas de la legislación laboral en el mundo se hace aparecer a la Constitución mexicana de 1917 como a la primera que recepta normas de este tipo. Yo reivindico para mi provincia el altísimo honor de haber sido la primera que san-

cionó una Constitución que contiene normas sobre el derecho del trabajo.

En la exposición de motivos y en el mensaje con que se acompaña el proyecto de ley de contrato de trabajo se hace una referencia a que esta ley constituye un capítulo de la codificación del derecho laboral. Se habla también de que se aspira con ello a conferir organicidad a todo el sistema de regulación del contrato de trabajo. Esto es altamente ponderable y por cierto que el objetivo se logra, pero creo que lamentablemente no en la medida en que se pudo hacer. Advierto que muchas leyes laborales han sido parcialmente derogadas, razón por la cual va a subsistir el mosaico de leyes laborales y seguramente el problema de averiguar qué es lo vigente y qué es lo derogado. Es cierto que se ha agregado un artículo, el número 10, por el que «se faculta al Poder Ejecutivo para ordenar las leyes mencionadas en el artículo 7º de la presente ley». Comprendo la razón de esta norma porque es tarea difícil y engorrosa llevar a cabo el ordenamiento de textos legales, pero creo que ésta es facultad del Poder Legislativo. En última instancia el Poder Ejecutivo dirá qué norma rige y cuál está derogada y esto —repite— es facultad del Poder Legislativo.

Por ello pienso que esta sistematización pudo ser más perfecta de lo que se ha logrado.

En lo que se refiere a las inquietudes que yo hice conocer al señor presidente de la comisión, que él acogió con tanta amplitud de criterio, por lo que le expreso ahora que está presente mi reconocimiento, simplemente las voy a mencionar porque sería reiterar y perder un poco el tiempo y gastar papel volver a argumentar en torno de esto con extensión.

En algunos de los temas he advertido algunas falencias; por ejemplo, en el artículo 4º, donde se define el concepto de trabajo. Entiendo que a los efectos de armonizarlo con el 23 es conveniente agregar en el primer párrafo la característica de «bajo relación de dependencia». Y digo esto porque el artículo 23 al definir el contrato de trabajo establece que: «Habrà contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta». Si la idea de mantener el artículo 4º tal como está es incluir dentro del concepto algunas relaciones que podrían escaparse —puesto que el concepto de dirección es más amplio—, creo que eso quedaría salvado con el artículo 25 que establece una amplia presunción con respecto a la existencia del contrato de trabajo.

En lo que se refiere a la capacidad, hemos entendido que en el artículo 34, donde dice «...menores de dieciocho (18), que con conocimiento de sus padres...», en lugar de «conocimiento» nos parece más propio que fuera «consentimiento», ya que la expresión «cono-

cimiento» es muy amplia por lo que resulta difícil definir su alcance. Entendemos que en materia laboral se dan numerosas situaciones de hecho que imponen, en algunos casos, cierta latitud en las normas, pero no tanta.

El artículo 35 faculta a los menores desde los catorce años para estar en juicio laboral. Hemos entendido que esta autorización es peligrosa porque aparte de tratarse, quizá, de menores que no han tenido la posibilidad de capacitarse, puede darse el caso de que sean objeto de abusos por parte de profesionales inescrupulosos, quienes se valgan de la inexperiencia, de la indefensión del menor, para explotarlos.

De allí que se nos había ocurrido que la solución podría haber sido crear algún mecanismo de protección del menor.

En lo que se refiere al artículo 65, hemos indicado que la segunda parte quizá sea un tanto amplia, por lo que convendría haber especificado más en qué casos el documento cuya firma ha sido judicialmente reconocida puede ser desechado por el juez. No ahondaré en el análisis a fondo de este tema.

Respecto del artículo 72, nos parece que hay una enorme dificultad para graduar las medidas. En lo que respecta al 156, creemos que las medidas que se toman —se refieren al caso de los recibos—, cuando no reúnan alguno de los requisitos consignados o cuyas menciones no guarden debida correlación con la documentación laboral, previsional, comercial y tributaria resultan un poco exageradas. En efecto, para tales supuestos se establece que los recibos carecerán de eficacia probatoria para acreditar el pago total o parcial, pero sucede que hay una gran cantidad de empresarios o empleadores que no tienen una organización administrativa que les permita llegar a la perfección en esta materia. Pienso que quizá, si se desea ordenar a los empresarios en este aspecto, lo que me parece muy bien, hubiera sido más apropiado establecer otro tipo de sanciones.

En el artículo 269 se expresa que: «En caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo 37 del decreto ley 18.037/69 tendrán derecho, mediante la sola acreditación del vínculo, en el orden y prelación allí establecido, a percibir una indemnización igual a la prevista en el artículo 268 de esta ley. A los efectos indicados queda equiparada a la viuda, para cuando el trabajador fallecido fuere soltero, la mujer que hubiese vivido públicamente con el mismo, en aparente matrimonio, durante un mínimo de cinco (5) años anteriores al fallecimiento». Respecto de este tema, hemos sugerido la posibilidad de disminuir el término de los cinco años para algunos casos especiales, como podría ser cuando la mujer tiene hijos o se encuentra embarazada en el momento en que muere el trabajador. Nos parece que el plazo de cinco años, si bien podría estar justificado por el hecho de estimular la normalización de la relación

extraconyugal, puede ser duro con respecto a determinadas situaciones que deben ser contempladas desde un punto de vista estrictamente humano, situaciones que se dan con gran frecuencia sobre todo en muchas zonas del interior del país.

La otra hipótesis de que se ocupa el artículo 269 es la siguiente: «Tratándose de un trabajador casado y presentándose la situación antes contemplada, igual derecho tendrá la mujer del trabajador cuando la esposa hubiere estado separada de hecho sin voluntad de unirse». Con respecto a esta segunda parte, formulamos dos observaciones, las que también hicimos conocer al señor senador Pennisi. La primera se refiere a que están excluidos los casos en los que mediere divorcio, el cual, en nuestra legislación, es distinto a la separación de hecho. Si bien el divorcio no produce como efecto la disolución del vínculo, está aceptado en doctrina que se le aplique tal denominación. Tales casos no están contemplados, razón por la cual podría darse la situación injusta de que una mujer divorciada por culpa del marido, quedase excluida del beneficio de la indemnización. Pensamos que esto convendría mejorarlo.

También hemos hecho objeción a la expresión «separada de hecho sin voluntad de unirse». Yo pregunto qué quiere decir «voluntad de unirse». Pongamos por caso una mujer que tiene varios hijos que lleva una vida decorosa y digna, ama y respeta a su marido y un día, sorpresivamente, advierte que se ha quedado sola con sus hijos, con su decoro y su dignidad, porque el marido ha encontrado que le despierta sentimientos más hondos otra mujer y entonces decide abandonarla. En este caso, la mujer pierde el derecho a la indemnización porque no tiene voluntad de unirse. ¿Cómo la expresa una mujer modesta? ¿Cómo hace? ¿Corre a la casa del marido todos los días y le golpea la puerta diciéndole: «¡Tengo voluntad de unirme!».

Pienso que esto no puede ser. Se me ocurre que hay que corregirlo, substituyendo este principio por el de culpabilidad. Yo tengo una profunda impresión dolorosa porque he visto en mi provincia situaciones de este tipo y en esta materia me declaro un fervoroso defensor de la mujer —en todos los órdenes, pero particularmente en éste—, porque suelen ser las víctimas de muchos hombres que a cierta altura de la vida descubren que tienen vocación donjuanesca.

De manera que le he planteado al senador Pennisi esta inquietud para tratar de mejorar el artículo y contemplar esas situaciones que son, indudablemente, de estricta justicia.

También he tenido la inquietud con respecto a los trabajadores de temporada, contemplados en los artículos 105, 106 y 107, en forma más o menos precisa, y en algunas cláusulas aisladas, como en el artículo 177.

Los trabajadores de temporada significan en el país una cifra muy importante, y conste que

no me refiero a los trabajadores de temporada que cumplen labores rurales, sino a aquellos que prestan servicios en fábricas, plantas industriales, bodegas, etcétera.

En algunas provincias, en razón de que los productos agrícolas se industrializan en fábricas y bodegas, como en mi provincia, el número de trabajadores de temporada fabriles es muy importante en períodos de cosecha y de elaboración. Tal es lo que ocurre en las provincias de Mendoza, San Juan, Río Negro, Tucumán, Salta, en donde suman muchos miles y contribuyen —repto— al proceso de industrialización de los productos agrícolas.

Creo que, recogiendo experiencias y situaciones planteadas en juicio y que han sido resueltas por la jurisprudencia de los tribunales del trabajo, convendría agregar algunas normas al proyecto en consideración.

Es cierto que el proyecto, en el artículo 106, establece que se equiparan los derechos del trabajador de temporada a los que la ley asigna a los trabajadores permanentes de prestación continua a partir de su contratación en la primera temporada, pero consideramos más conveniente, para preservar los derechos de estos trabajadores, que con toda claridad se agregue un artículo en el que se incluyan aclaraciones que voy a hacer conocer al Honorable Senado.

Me refiero a los siguientes puntos:

1º — El derecho del obrero de temporada a percibir los jornales por enfermedad inculpable durante el período comprendido entre la fecha de reincorporación y de la suspensión por fin de temporada. Sostener que este derecho se adquiere desde el momento mismo en que le corresponde su reincorporación y no puede hacerlo por encontrarse enfermo, y se suspende por la notificación de suspensión por conclusión de temporada.

2º — El derecho del obrero de temporada a percibir todas las asignaciones familiares desde el momento en que se le reincorpora por reinitación de temporada y hasta la suspensión notificada al obrero. Destacar que las suspensiones parciales durante el período de temporada no lo privarán al obrero de percibir esas asignaciones.

3º — Las suspensiones o reincorporaciones por finalización o iniciación de temporada se deberán efectuar respetando el orden de antigüedad en cada especialidad y categoría profesional.

4º — La notificación de la reincorporación por iniciación de temporada deberá efectuarla el empleador al obrero en forma personal o por carta certificada, con aviso de entrega en el último domicilio denunciado por el obrero, que deberá ser domicilio donde haya reparto de correspondencia.

5º — La suspensión por fin de temporada se notificará en forma personal en el lugar de trabajo.

Las suspensiones de trabajo cuando ya se ha reiniciado la temporada y que obedezcan a casos

especiales —como falta de materia prima, energía, fuerza mayor, etcétera— serán notificadas al personal de temporada por aviso en pizarra y al delegado gremial, y se deberá indicar con precisión el número de días de esa suspensión.

Dejo expresada, además, mi inquietud con respecto de los montos indemnizatorios en relación con los pequeños y medianos empresarios. No sé si el aspecto económico de este tema ha sido debidamente analizado.

Esto es lo que quería expresar con respecto a algunos temas, muy pocos por cierto, del contrato de trabajo, y que ya hice conocer al señor presidente de la comisión.

Finalmente, voy a dejar en el seno de esta Honorable Cámara de Senadores una inquietud que hubiera deseado ver concretada en el texto del proyecto de ley que estamos considerando. Me refiero, específicamente, a la creación de un seguro de desempleo que sirva para combatir ese tremendo flagelo que es la desocupación y que tiene funestas consecuencias en los campos político, social, económico y cultural.

La desocupación significa para quien la sufre, y para todos aquellos que dependen de quien la sufre, la amenaza, cuando no la presencia real del hambre y la incapacidad para afrontar los dolorosos imprevistos con que la vida castiga a los seres humanos.

Este problema, con su secuela —que acabo de señalar—, debe ser encarado resueltamente para darle una solución definitiva.

Por cierto que el seguro de desempleo no es una idea novedosa. En muchos países adelantados se lo aplica con gran eficacia, con muy buenos y positivos resultados.

No sólo por las razones fundamentales que he apuntado conviene la creación de un seguro de este tipo, sino porque ello nos permitiría, además, conocer cabalmente el problema de la desocupación en los dos aspectos que suele asumir: uno, de carácter cuantitativo, que se refiere a la cantidad de desocupados, de personas sin trabajo, y otro, de orden cualitativo, que se refiere a una determinada franja en la edad del individuo en la que la desocupación se hace presente.

Hasta ahora, los cálculos hechos con respecto a desocupación son todos estimativos, no tienen una base real y sólida. Este, pues, es otro problema que se resolvería mediante la creación del seguro de desempleo.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el problema de la desocupación afecta principalmente a zonas del interior del país, y todos nosotros, que tenemos un profundo sentido federal, debemos considerar muy seriamente esta situación.

Ocurre que muchos trabajadores, agobiados por una vida infrahumana, sin posibilidades de salir adelante, sumergidos en la desesperación —y no estoy exagerando—, resuelven dirigirse hacia los grandes centros urbanos en busca de

solución para los problemas elementales y tratando de alcanzar una vida digna y decorosa para ellos y sus familias. Pero sucede que terminan hacinados en esos lugares de vergüenza que, eufemísticamente, denominamos «villas de emergencia».

De allí que resulte necesario insistir en este tema y advertir que esta idea del seguro de desempleo debe ser complementada con medidas de carácter económico y financiero que posibiliten la creación de polos de desarrollo en el interior del país, construcción de viviendas, escuelas, hospitales, industrias, que hagan que la población advierta que tiene futuro allí en el lugar donde ha nacido; e incluso, pienso yo, habría que pretender que quienes un día se marcharon retornen al punto de origen. Esto, creo, sería dar pasos concretos y definitivos hacia la solución de este tremendo problema que significa desnutrición, hambre, promiscuidad, ignorancia, analfabetismo.

Señora presidente: en ese sentido, quisiera solicitar la inserción en el Diario de Sesiones de dos artículos que tratan el tema del seguro de desempleo: uno, publicado en el diario «La Nación» y firmado por el ingeniero Fernández Rivas y el otro, en el diario «Mayoría», y firmado por Raúl Pedro Scalabrini. Creo que pueden servir como antecedente para cuando llegue el momento de acometer esta tarea.

—Asentimiento (1).

**Sr. Frugoli.** — Hago fervorosos votos por que esta ley que vamos a sancionar sea prenda de unión entre empresarios y trabajadores. La consigna de este momento histórico es la conciliación nacional y —en ese sentido— nada expresa más cabalmente mi pensamiento con respecto a lo que deseo que ocurra con esta ley, que aquella magnífica frase de Benito Juárez: «El respeto del derecho ajeno es la paz».

**Sr. Culasso Mattei.** — Pido la palabra.

**Sra. Presidente** (Bárbora de Nasif). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

**Sr. Culasso Mattei.** — Señora presidente: entraré a este debate brevemente, pero con sumo interés y preocupación, por referirse a un asunto de vital importancia para el cuerpo social argentino.

Larga, y a mi juicio valiosa, es la participación que ha cabido a la democracia progresista en el tema, en los casi sesenta años de vida de la agrupación.

Me honraré en recordar, como lo han hecho otros señores senadores, a Joaquín V. González, que con su clara visión del futuro proyectó un Código de Trabajo en los albores del siglo, cuando las corrientes sociales, principalmente en Europa, intentaban dar cabida a este bien llamado entonces «nuevo derecho».

Otro valioso testimonio son las normas incluidas en la Constitución santafesina votada en 1921.

No son menos importantes las conquistas laborales instrumentadas durante el gobierno demócrata progresista de la provincia de Santa Fe, entre los años 1932 y 1935, especialmente aquellas destinadas a proteger a la mujer y al menor de edad.

Cobran también actualidad los principios incorporados a la plataforma sostenida por Lisandro de la Torre en ocasión de las elecciones nacionales de 1931, cuando encabezó la fórmula demócrata socialista.

Esos postulados fueron puestos de relieve al incorporarse el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Finalmente, recuerdo que en este mismo recinto y desde esta banca del Parlamento, el doctor De la Torre hizo la más enérgica defensa de los trabajadores, especialmente de los que se desempeñaban en zonas alejadas de los centros urbanos.

Para no fatigar a esta Honorable Cámara diré que la voz de mi partido está hoy aquí dispuesta a sostener esas mismas postulaciones y que comparte totalmente el espíritu que anima al proyecto en debate.

El análisis de la iniciativa nos permitirá comprobar, quizá, que hay fallas. Por ello, cobra validez y sentido el proyecto del cual soy autor, presentado el 24 de enero de este año, para que se designe una comisión redactora del anteproyecto de Código del Trabajo y de la Seguridad Social. Digo allí que no sólo se cumplirá un mandato constitucional, sino que este «nuevo derecho», como con tanta lucidez se lo ha calificado, merece la jerarquía de la codificación que ordene, designe, clasifique y haga de fácil y resuelta aplicación su articulado.

En ese mismo sentido es de esperar que este debate llegue hasta las universidades, los sindicatos, los entes empresarios, etcétera, y en el primer caso se dé a esta disciplina la relevancia docente que merece, más allá de la suerte de algunos planes de estudio, sirviendo en el caso de las asociaciones profesionales como herramienta de una más armónica, constructiva y humana relación productiva. Subrayo el concepto de «herramienta», pues el instrumento legal que consideramos de no ser conocido en su profundidad puede ser utilizado corriendo el riesgo de perderse el equilibrio social por quienes no pregonan, ni menos practican, una conducta en tal sentido.

Para los mercaderes del caos y la violencia, esta ley puede servir en alto grado. A mi entender algún articulado obscuro puede dar lugar a ello, y usado de mala fe por los que actúan al margen de los sindicatos, pero con no menos eficacia para cumplir sus designios, podría traer días de intranquilidad, que lejos debe estar

(1) Ver Apéndice.



de la intención del Poder Ejecutivo y de la mayoría de este honorable cuerpo.

Los demócratas progresistas compartimos esas preocupaciones, y por ello estamos convencidos de que el gobierno no ha de errar el camino y definirá con claridad el marco de sus objetivos.

Todo lo expuesto, señora presidente, me lleva al nudo de la cuestión. Mi sector aspira a que la legislación refleje un moderno concepto de las relaciones sociales; que no ignore ni sosaye las injusticias, sino que, por el contrario, consolide normas de armonía y respeto, dando a cada cual lo suyo. Los demócratas progresistas estamos convencidos de que muchos procesos productivos de bienes o servicios pueden realizarse mediante organizaciones cooperativas. No creo necesario destacar la acción cooperativa en nuestro país, que prácticamente cubre todos los campos de la actividad económica social: en el agro, la industria, el comercio, los servicios, etcétera, este tipo de entidades agrupa a todos los sectores interesados en aras de un beneficio común.

Por este mismo camino, mi sector propone una concepción de la empresa donde los factores esenciales, es decir el capital y el trabajo, transiten en forma coincidente. Para ello debemos en nuestra plataforma política que debe instrumentarse en la ley una efectiva participación de los obreros y empleados en la administración y utilidades de las empresas. De ese modo, como ya ha ocurrido en varios países, sufrirá un cambio fundamental el actual estado de cosas, cuando todos se sientan protagonistas del proceso productivo. Sin perjuicio de esa trascendente aspiración, que por otra parte tiene jerarquía constitucional, pues el recordado artículo 14 bis de la Constitución lo contempla claramente, proponemos también la creación de cajas de desocupación y bolsas de trabajo.

La primera postulación significará evitar quebrantos en la actividad económica que, como todos sabemos, no sólo perjudican al sector capitalista, sino también en forma directa o indirecta a los demás sectores nacionales, incluida, por supuesto, la clase trabajadora. Las bolsas de trabajo permitirán instrumentar una solidaria actitud que atenúe o corrija el déficit ocupacional producido por las coyunturas, los cambios tecnológicos, etcétera.

Hace bien el proyecto en discusión cuando regula la protección contra el despido arbitrario, pues ordena la legislación dispersa sobre la materia, que en su momento significó una verdadera conquista; se cumple así con el imperativo constitucional que termino de citar.

Por otra parte, el artículo 14 bis consagra con nitidez la estabilidad del empleado público. Sin pretender reabrir el debate suscitado en esta Cámara en ocasión de tratarse la ley de prescindibilidad, debe quedar en el ánimo de los señores senadores la necesidad de que tal norma de la Carta Magna reciba adecuado tratamiento

por parte del Estado. Los miles y miles de funcionarios públicos que hoy aguardan con zozobra el destino final de la ley votada entonces son merecedores de igual trato que el recibido por los beneficiarios de la ley que hoy tratamos.

Merece también consideración un aspecto del proyecto referido al concepto de «empresa-empresario» cuando el artículo 5º lo define como «...la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos».

Mi sector entiende que tales normas encuadrarán en la típica organización productiva o comercial, pero en los hechos, actualmente caen en tal calidad, por ejemplo, las entidades de bien público. Si éstas, por definición, cumplen fines comunitarios, incluso respecto a los trabajadores, creo conveniente que se las considere con un criterio menos riguroso que el aplicado a las empresas mencionadas recién. He podido observar a cooperadoras, cuerpos de bomberos voluntarios, etcétera, que con gran esfuerzo cumplen sus obligaciones legales como empleadores, depositan aportes jubilatorios, abonan todas las cargas sociales y, en fin, se ajustan al imperativo social, que antes y ahora pueden verse amenazadas por un quebranto significativo ante un posible despido y consiguiente indemnización.

Aspiro que, al tratar el proyecto en particular, se acepten algunas enmiendas en este sentido.

Otra inquietud que formulo a título de pregunta es si el inciso a) del artículo 2º del despacho incluye a los empleados dependientes de las empresas del Estado, como por ejemplo ENTel o Ferrocarriles, o sólo a los que revistan en la administración central.

En resumen, señora presidente, es mucho lo que cabría hablar sobre este tema, en general, pero reservo para mi intervención en el debate en particular aquellas observaciones que juzgo atinadas a fin de que esta ley cumpla cabalmente su objetivo.

Una vez más, este Honorable Senado da una prueba de su inquietud y sensibilidad apuntando al progreso y mejoramiento de las relaciones económicos-sociales, y sin perjuicio de algunas fallas que he señalado pongo de relieve la adhesión de mi sector en el sentido que indico.

Adelanto así mi voto favorable al proyecto en discusión.

**Sr. Cáceres.** — Pido la palabra.

**Sra. Presidente** (Bárbora de Nasif). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

**Sr. Cáceres.** — Voy a participar en este debate, señora presidente, exclusivamente para hacer referencia a una nota recibida hoy y remitida por el Centro Empleados de Comercio de la provincia de Formosa, y exponer brevemente una opinión referida al principio «pro operario» que señala la nota.

Lo hago, señora presidente, porque entiendo que dentro de la función que cabe al legislador

de auscultar, estudiar, requerir opiniones, se encuentra también la de recibirlas y si se las considera de importancia, como en este caso, rescatarlas de ese anonimato para darlas a conocer a los señores senadores.

Pienso que debe ser así, con mayor razón en esta circunstancia, tratándose de la nota de un sindicato y de la opinión de un dirigente, por cuanto es indudable la significación que en la vida del país tienen los sindicatos y el valor de decisión de sus dirigentes.

Les reconozco el derecho y el deber de introducirse en el campo político, para colaborar en el esquema constitucional y hacer también con ello traducible ese objetivo de estar en la preocupación del desarrollo del país.

Y en particular tengo el derecho de decirlo, porque viví durante tres o cuatro meses, señora presidente, trabajando en el sistema integral de salud, participando en mesas redondas con los representantes de la Confederación General del Trabajo y sé de su preocupación y valoro sus opiniones y espíritu patriótico.

Por esa razón recojo esta inquietud del secretario general de dicho centro, señor Tapia Leoni, y me permito leer brevemente su opinión referida al artículo 9º del proyecto en consideración. Dice así, refiriéndose a este artículo: «Si efectuamos una mirada retrospectiva y nos remontamos al origen y evolución de la legislación del trabajo, veremos que su nacimiento y desarrollo tuvo por finalidad esencial la protección jurídica de la parte económicamente más débil en las relaciones obrero-patronales, cual es el trabajador.

»Toda la legislación laboral tiende a eso: a que la particular situación de inferioridad económica de los trabajadores no cree una inferioridad jurídica.

»El derecho del trabajo ha sido instituido en pro del trabajador; por ello es pro operario y por ello también es un error, a nuestro modesto juicio —dice la nota—, disponer que sólo en caso de duda ha de estarse en favor de aquél, por cuanto hay que estarlo haya duda o no.» y señala: «Es decir, en todos los supuestos porque, repetimos, es la esencia del derecho del trabajo ser el instrumento protector de los trabajadores en todos los casos, según así nos lo enseña su origen y evolución histórica.

»En sentido concordante se expresa Couture cuando afirma que el derecho del trabajo lucha contra una adversidad; que el procedimiento lógico de corregir las desigualdades es creando otras desigualdades.

»Si bien estas manifestaciones del maestro uruguayo están referidas más bien al derecho procesal del trabajo, son igualmente aplicables al derecho de fondo atento la identidad de principios y fines que informan ambos derechos.

»El proceso laboral cierra el circuito tutelar del trabajador, que comienza con la ley de fondo, al crear el fuero y el procedimiento que lo am-

pare de la injusticia de los demás y obtenga una más rápida y eficaz satisfacción a sus pretensiones.»

Termina diciendo: «Como lo explica muy bien Genoud: el *in dubio pro operario* es un retaceo sutil, pero retaceo al fin, de los principios generales que informan la materia».

Finalmente, la nota expresa que se debe consagrar «plenamente el principio pro operario» en esta nueva ley que constituirá la normativa integral de una relación que, desde el punto de vista ético y del bien común, no se reduce a un mero intercambio de prestaciones sino a una problemática que tiene como centro al hombre que trabaja y a su contorno familiar.

Yo agregó que valoro esta opinión; pienso en su importancia, en los principios de justicia social, y digo que es necesario que se tenga como antecedente para su reglamentación y muy especialmente, para la aplicación de la ley.

**Sr. Perette.** — Pido la palabra.

**Sra. Presidente** (Bárbora de Nasif). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Perette.** — Señora presidente, señores senadores: hemos suscrito juntamente con el senador de la Rúa el despacho de la mayoría en esta importante iniciativa sobre contrato de trabajo.

Esta decisión unánime del cuerpo afirma, en mi modesta opinión, un sentido general de la Cámara en cuanto tiende a defender los derechos obreros y asegurar para el país una legislación laboral en permanente avance ideológico.

Entendemos, señora presidente, que en la medida en que progrese el derecho obrero se asegurará, juntamente con la defensa de la clase media argentina, un mejor futuro para nuestra sociedad y para la fraternidad de los distintos sectores que trabajan en nuestra comunidad.

La que consideramos es una «ley de organicidad laboral». En mi concepto, ése es el alcance y el contenido de la legislación proyectada. Es un compendio de la legislación dispersa, incorporando indudablemente mejoras y beneficios que han de facilitar en toda forma una mayor justicia social y aquel sentido de fraternidad humana de que hablaba precedentemente.

Creemos que en esta materia nadie puede ni debe temer al «cambio social» ni a la transformación incesante, pues deben mejorarse las conquistas obreras. Este proyecto no es, lógicamente, una «revolución laboral», sino una recopilación de los esfuerzos de más de setenta años de los distintos sectores políticos y sociales argentinos que trabajaron en la gestación de la legislación del trabajo del país.

Es evidente que en esta como en toda ley debemos procurar la armonía entre el capital y el trabajo. Pero también nos hacemos cargo de la advertencia de Hipólito Yrigoyen, cuando señalaba que era fundamental colocar «al capital y al trabajo en un plano de real equivalencia».

El señor senador Cáceres acaba de citar la opinión de Couture. Este destacado y eminente jurista uruguayo señaló también con toda precisión las notorias desigualdades en que se encuentran el capital y el trabajo en el desarrollo social.

Por eso esta ley viene a cumplir una misión, pero no termina una tarea: nos concita a realizar la gran misión transformadora y las grandes reformas de estructuras que necesita el país en esta materia, como en otros ámbitos de la vida argentina.

Debo señalar que me correspondió presentar en esta Cámara una iniciativa que tuvo unánime aprobación, y por la cual se dispuso «constituir una comisión especial que proyectara los siguientes estatutos: 1º) Código del Trabajo; 2º) participación de los trabajadores en la propiedad y en las ganancias; 3º) cogestión y control en la producción y colaboración en la empresa; 4º) protección contra el despido arbitrario y estabilidad en el empleo; 5º) preservación de las fuentes de trabajo; 6º) derecho de huelga, y 7º) seguro social obligatorio».

Esta decisión fue aprobada —como digo— por unanimidad en este honorable cuerpo y debo agregar que la iniciativa había contado con las firmas de todos los integrantes del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical. Invoco estos antecedentes para señalar que una verdadera transformación estructural estará dada cuando se cumplan esos siete objetivos a que he hecho referencia, y otras inquietudes sociales que son trascendentes.

Advierto que esto no es un Código del Trabajo, no es una revolución. Es, sí, una recopilación. Y no se puede transformar el sentido y el contenido de la propia iniciativa del Poder Ejecutivo, que ubica y sitúa lealmente esta iniciativa en el alcance que tiene.

Debo señalar que nuestro voto en general no implica renunciar a las disidencias parciales y a la creación de institutos que consideramos fundamentales para lograr la transformación a que hacía referencia.

Tampoco puede creerse que vivimos en el país en un estado social inmejorable porque todos sabemos cuáles son los inconvenientes de tipo económico y social que subsisten actualmente. Hay trescientos cincuenta mil docentes en el país que están planteando su situación. Nadie pretende que un gobierno que ha heredado una tremenda crisis, una bancarrota total y una inflación galopante pueda resolver de la noche a la mañana los problemas argentinos. Pero advertimos la necesidad de contemplar la solución urgente de estos problemas sociales que hacen al vivir de la República y a la paz espiritual del país.

Señalamos la vigencia de una ley de prescindibilidad que es la negación de la estabilidad del empleado público y ataca a todo el derecho laboral argentino.

El derecho del trabajo constituye una de las nuevas ramas jurídicas de nuestra época. En principio, el trabajo se rigió por las normas de la autonomía de la voluntad entre patronos y obreros y dentro de las letras del código; pero junto a esa autonomía de voluntad estaba la desigualdad económica de los contratantes.

Por eso el *laissez faire, laissez passer* de los economistas del siglo XVIII había triunfado en beneficio de un determinado sector del capital. Pero ese desequilibrio económico y social determinó la reacción de la masa obrera y, además, reclamó la sensibilidad de gobernantes, estadistas, estudiosos y políticos.

Precisamente una de las cuestiones básicas que hoy deben destacarse es que los que buscan el camino de la violencia olvidan que están abiertos los canales de la controversia democrática y de un Parlamento sensible, capaz de lograr las mejores soluciones que necesita nuestra sociedad.

El ejercicio del voto representó también para los trabajadores una nueva y poderosa arma para conquistar derechos y obtener mejoras en las condiciones de trabajo, ya que la democracia crea su ámbito más fecundo y más duradero.

También debe advertirse que esta inquietud, además de los sectores laborales, llegó a las más altas dignidades eclesiásticas. El papa León XIII, en la encíclica *Rerum Novarum*, dio la convicción de la necesidad de elaborar reglas jurídicas que, apartándose de los principios consagrados en el Código Civil, regulasen el trabajo sin anular el principio de la autonomía de la voluntad, que jurídica y socialmente es indispensable para mantener la libertad humana y limitasen, sin embargo, los abusos en que se incurría al contratar el trabajo. Las leyes del trabajo fueron imponiéndose como una consecuencia de la lucha por el derecho, que ha sido definida por Ihering como «la lucha contra la injusticia», tal vez en una de las mejores definiciones en esta materia.

El desarrollo legislativo y doctrinario ha sido permanente y constante y el derecho obrero ha tenido en cuenta dos aspectos: los trabajadores en primer término y el trabajo considerado en sí mismo.

**Sr. Herrera (J. J.).** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Perette.** — Sí, señor senador.

**Sr. Herrera (J. J.).** — Perdóneme, señor senador, no haberlo interrumpido en su oportunidad, pero quedó flotando en el ambiente la mención que también han hecho varios señores senadores con respecto a los docentes argentinos y a la postergación que éstos vendrían sufriendo por parte del gobierno actual. A este respecto quiero hacer una pequeña aclaración, porque no es el gobierno el culpable de esa postergación. Como miembro de la Comisión de Educación debo aclarar que hemos mantenido reunio-

nes con los representantes de la docencia argentina, a los cuales hemos invitado para integrar una comisión con senadores para lograr una solución, pues el gobierno, representado por el señor ministro de Educación, y los señores senadores de este cuerpo, tienen muy buena voluntad para encontrarla. Los representantes de los docentes en ningún momento hicieron acto de presencia en este edificio del Senado. Por ello, al agradecer al señor senador la interrupción que me ha concedido, dejo constancia de la posición del gobierno y de quienes participan en la búsqueda de la solución de los problemas de la docencia.

**Sr. Perette.** — Agradezco al señor senador Herrera su interrupción, su información y su preocupación por las cuestiones docentes, que conozco debidamente a través de su trayectoria en esta Cámara. Yo no he formulado un cargo al Poder Ejecutivo, muy por el contrario, he dicho que existen problemas sociales de magnitud y he señalado dos ejemplos: el caso de los docentes, que ha determinado un paro de 350.000 maestros y profesores argentinos, y el de la ley de prescindibilidad, que afecta la estabilidad constitucional de los empleados públicos.

Además, me hice cargo precisamente de los grandes inconvenientes y de la tremenda herencia negativa que este gobierno ha recibido en materia económica y social, porque hemos estado en función de gobierno y sabemos lo que significa heredar un pleito o una crisis de tan tremenda incidencia.

Por ello, señor senador Herrera, celebro esta preocupación y le anticipo que en el día de hoy el señor senador Mario Losada se ha entrevistado con una comisión de CTERA, que es una importante organización de los docentes argentinos, para considerar estos problemas. Sostengo que es útil que se constituya una comisión que articule las medidas posibles y realizables en esta materia tan trascendente para el país.

He dicho que esta ley del contrato de trabajo no implicaba ignorar todo el proceso social y económico que existía en el país como consecuencia de una serie de hechos que ya he mencionado. Señalo al respecto que, además de las luchas políticas, gremiales, económicas, sociales y culturales, han existido vidas enteras dedicadas a esta lucha por la legislación laboral.

Me refiero muy especialmente al doctor Alfredo L. Palacios, autor de la obra *El nuevo derecho* y del inolvidable trabajo *La fatiga*, además de su estudio sobre *Justicia social*, lo que demuestra que la legislación laboral argentina no tiene nombre propio y no ha nacido con un hombre.

La legislación social argentina es la obra de más de setenta años de lucha permanente. Desde 1905, en que se sancionó la primera ley obrera, los diversos gobiernos sucedidos, dice Alejandro Unsain, han contribuido en diversa medida y con diferente ritmo al notable desarrollo de

aquella legislación. Se refiere en primer término a la ley 4.349 sobre jubilación y pensión de empleados civiles de la Nación, y hay una enumeración completa que hemos tomado del trabajo de Unsain y del doctor Juan D. Pozzo en su obra *Derecho del trabajo*.

Como no quiero hacer esta enumeración solicito se inserte a esta altura de mi exposición en el Diario de Sesiones el detalle de toda la legislación laboral argentina que demuestra —y con esto le quiero contestar amablemente al distinguido colega doctor Díaz Bialek— que la justicia social no nació con Perón, sino que es obra de todos los sectores argentinos.

—Asentimiento.

#### *Legislación argentina sobre el trabajo*

Desde 1905, año en que se sancionó la primera ley obrera, los diversos gobiernos sucedidos (dice Alejandro M. Unsain, *Ordenamiento de las leyes obreras argentinas*, Buenos Aires, 1947, página 15), han contribuido en medida diversa y con diferente ritmo al notable desarrollo de aquella legislación.

—Ley 4.349, sobre jubilación y pensiones de empleados civiles de la Nación (20 de septiembre de 1904).

—Ley 4.661, sobre descanso dominical en la Capital Federal (31 de agosto de 1905), completada por la 9.104 del 12 de agosto de 1913, que la extiende a los territorios nacionales.

—Ley 8.999 sobre creación del Departamento Nacional del Trabajo (30 de septiembre de 1912).

—Ley 9.105, sobre descanso obligatorio los días 25 de mayo y 9 de julio.

—Ley 9.148, sobre agencias públicas gratuitas de colocaciones (25 de agosto de 1914).

—Ley 9.511, sobre inembargabilidad de sueldos.

—Ley 9.661, sobre agencias particulares de colocaciones.

—Ley 9.688, sobre accidentes de trabajo (29 de septiembre de 1915).

—Ley 10.650, sobre jubilaciones de empleados ferroviarios (24 de abril de 1919).

—Ley 11.110, sobre jubilaciones y pensiones de empleados de empresas particulares (11 de febrero de 1921).

—Ley 11.125 y 11.126, que ratificaron tratados con España e Italia sobre reciprocidad en el pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo.

—Ley 11.127, sobre represión del fosforismo (8 de junio de 1921).

—Ley 11.728, sobre forma y pago de los salarios (30 de octubre de 1923).

—Ley 11.317, sobre trabajo de mujeres y menores (30 de septiembre de 1924).

—Ley 11.337 (1º de septiembre de 1926), ampliatoria de la ley 11.278.

—Ley 11.338 (1º de septiembre de 1926), sobre trabajo nocturno en las panaderías.

—Ley 11.544, sobre jornada de trabajo (29 de agosto de 1929).

—Ley 11.575, sobre jubilaciones y pensiones de empleados de empresas bancarias (5 de diciembre de 1929).

—Ley 11.591, sobre pasajes gratuitos a desocupados (29 de julio de 1932).

—Ley 11.640, sobre descanso en la tarde del sábado (29 de septiembre de 1932).

- Ley 11.722, que ratifica el Tratado de Versalles (25 de septiembre de 1933).
- Ley 11.729, modificando los artículos 154 a 160 del Código de Comercio (26 de septiembre de 1933).
- Ley 11.837, sobre cierre de establecimientos comerciales.
- Ley 11.896, sobre Junta Nacional para Combatir a la Desocupación (21 de agosto de 1934).
- Ley 11.933, sobre seguro obligatorio de maternidad (29 de septiembre de 1934).
- Ley 12.111, sobre protección a la maternidad de empleadas y obreras dependientes del Estado.
- Ley 12.205, sobre obligación de proporcionar asientos con respaldos (23 de septiembre de 1935).
- Ley 12.232, que ratifica convenciones internacionales sobre la materia.
- Ley 12.383, sobre despido por causas de matrimonio (9 de agosto de 1933).
- Ley 12.637, sobre estatuto de empleados bancarios (4 de septiembre de 1942).
- Ley 12.651, sobre régimen de los viajantes de comercio.
- Ley 12.713, sobre trabajo a domicilio (3 de octubre de 1941).
- Ley 12.789, sobre conchabadores de obreros (29 de septiembre de 1942).

Advertencia: esta reseña comprende las leyes principales sobre cada una de las materias legisladas. La referencia a fechas de sanción fue tomada de la obra de Juan D. Pozzo, *Derecho del Trabajo*, tomo I, página 235 y siguientes, Buenos Aires, 1948.

**Sr. Perette.** — El doctor Leónidas Anastasi también fue un gran luchador por los derechos obreros. Por allí se encuentra Hipólito Yrigoyen; quien dijera a los ferroviarios que «la hora de los privilegios había terminado», y proyectó este Código de Trabajo, uno de los más completos, que tuvo entrada en el Congreso de la Nación el 8 de junio de 1921 y que honra al eminente republicano y a la Unión Cívica Radical.

Tampoco voy a incurrir en la injusticia de negar las preocupaciones y la obra que Perón o el justicialismo han realizado en materia obrera. Sin embargo, no podemos partir el calendario histórico de la República como si en el año 1945 hubiera nacido el derecho laboral y antes de esa fecha todos los que lo antecedieron hubiesen sido insensibles a las conquistas obreras.

Al respecto quiero recordar que la Constitución de 1853 fue tan sabia que ha permitido todas las reformas en materia laboral, inclusive esta que se va a dictar, sin que haya dado lugar a un solo obstáculo.

Esteban Echeverría, uno de los pensadores más lúcidos y brillantes del país, señalaba con términos definitivos los problemas sociales del trabajo. Juan Bautista Alberdi, el insigne inspirador de nuestros constituyentes, había escrito en sus Bases: «El trabajo es la vida, es el goce, es la felicidad del hombre, no es su castigo. Si es verdad que el hombre nace para vivir del sudor de su frente, no es menos cierto que el sudor se hizo para la salud del hombre. El trabajo debe ser libre y estar exento de toda tiaba colonial o restrictiva o monopolista. Seguro en sus funciones, establecimiento y resultados, ennobleci-

dos y glorificados, como el primer título de recomendación al aprecio y consideración del país, de hacer real la virtud democrática y republicana, arma de la libertad del hombre, causa de su riqueza, es decir, de su poder, de su autoridad y de su independencia personal».

**Sr. Díaz Biale.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Perette.** — Sí, señor senador.

**Sr. Díaz Biale.** — Le agradezco nuevamente al señor senador Perette; siempre hace una mención elogiosa, aunque innecesaria, para mi persona, pero quiero expresar que no dije que Perón fuese el creador de la justicia social, porque el propio Perón señaló que la justicia social ha recorrido varios años de lucha y de trabajo. Sus principios esenciales —dijo Perón— ya estaban establecidos el día que iniciábamos la reconquista del país. Pero es indiscutible, y el propio señor senador Perette lo ha reconocido, que Perón es el gran abanderado y ejecutor de una obra que hoy ya nadie niega y que es la dignificación de los trabajadores argentinos a través de una legislación que hasta 1945 el país no había conocido en una forma orgánica, sistemática y con un propósito concreto de establecer la justicia social. Muchas gracias.

**Sr. Perette.** — Señor senador: le he concedido la interrupción con todo gusto y agradezco sus palabras, porque resultan bastante esclarecedoras sobre el punto en cuestión. Pero pude entrever en sus conceptos una especie de «monopolio» del sector justicialista en materia laboral. En este sentido, con todo el respeto que me merece su sector, al igual que todos los demás, considero que esta legislación laboral argentina y este contrato de trabajo constituyen el fruto de 70 años de lucha.

Fíjese, señor senador, que Alberdi pudo decir, en su trabajo sobre la organización de la Confederación Argentina, que «la riqueza es un medio y no un fin, que nuestra Constitución, por el espíritu de sus disposiciones, propende no tanto a que la riqueza pública sea grande como a que sea bien distribuida y bien nivelada y repartida».

Joaquín V. González lo ha señalado en su proyecto de código o ley nacional del trabajo, lo mismo que Alejandro M. Unsain y Segundo Linares Quintana, pero quiero leer unas palabras que entiendo que tienen un gran valor para este debate:

«El proletario trabaja día y noche para enriquecer al propietario ocioso. Cambia el sudor de su rostro por el sustento para él y su familia. La retribución de su trabajo no es equitativa; apenas le basta para alimentarse. No puede aglomerar fondo alguno de ahorro para educar a sus hijos, curarse de las enfermedades, proveer a las necesidades imprevistas. El poseedor de los instrumentos de producción lo explota.

«Cuántos, en momentos de crisis industrial o comercial o por la invención de la máquina, no hallando empleo a sus brazos se ven impelidos a la mendicidad y muchas veces al crimen, o inscriben desesperados en su bandera de emancipación esta terrible divisa: «Vivir trabajando o morir combatiendo».

«Vosotros, ricos dominadores que organizáis la sociedad a vuestro modo y disponéis de todo el poder de ella para oprimir a vuestros hermanos, vosotros, que creyéndos privilegiados le violáis su derecho a la participación de esos gozos, cometéis un grave atentado.

«Esta condición del proletariado revela de un modo palpable un vicio en la organización de las sociedades actuales. Revela sobre la falta de un principio supremo que sirva de regulador a la distribución y retribución del trabajo o en la participación recíproca de los gozos de la propiedad y de la patria.

«La potestad social no es moral si no protege a los débiles, a los pobres y a los menesterosos, es decir, si no emplea los medios que la sociedad ha puesto en su mano para realizar la igualdad.

«La democracia, por eso, es el gobierno de todos fundado en la igualdad de clases».

No crea el señor senador Díaz Bialek que estas palabras las pronunció Juan Domingo Perón. Las dijo Esteban Echeverría en su trabajo sobre el dogma de la Asociación de Mayo.

He señalado estos argumentos para dejar fijado que este es un país lleno de inquietudes que ha vivido de frustraciones —pero se lo reconozco al señor senador Díaz Bialek—, lleno de hechos de los cuales todos tenemos una cuota de responsabilidad, como la tenemos en el deber para salvar el destino de la Nación.

En ese sentido, señor presidente, debió recordar el proyecto de código de trabajo del 6 de mayo de 1904, que elevó el entonces presidente Roca y del que fue autor Joaquín V. González. Es una obra trascendente e importante, que no he de analizar porque entiendo que está en el conocimiento pleno de todos los participantes de este debate, pero también es evidente que junto con la transformación industrial se ha producido un cambio en el derecho. Es decir, ha surgido lo que se ha llamado el constitucionalismo social.

México, en 1917, inició este proceso de un modo integral, caracterizado por el constitucionalismo social. El iniciar mexicano, que fue anterior a la Constitución de Weimar en Alemania, se extendió a muchas zonas de América latina.

Podríamos citar —según Mario A. Deveali— las normas de Chile de 1925 y sus principios instituidos en la Constitución; del Perú en la Constitución de 1933; del Uruguay en la de 1932; del Brasil en la de 1934; de El Salvador en la de 1939; de Nicaragua en la de 1939; de Panamá en la de 1940; de Cuba en la de 1940; de Guatemala en la de 1945; de Ecuador en la de 1947 y de Venezuela en la de 1947.

Debo reconocer, con toda lealtad —que, modestia aparte, creo que caracteriza mis actos— que la Constitución de 1949 consagró principios esenciales en esta materia. Un capítulo de «Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y de la cultura» y otro, de «Función social de la propiedad, el capital y la actividad económica».

Como también deben reconocer nuestros adversarios lo que significa el artículo 14 bis de la Constitución sancionada en 1957 y que fue obra fundamental de la Unión Cívica Radical.

Es decir que este proceso tiene además hondas conexiones intelectuales e internacionales, como surge de la Carta del Trabajo de Berna, aprobada en 1919; la parte XIII del tratado de paz de Versailles, que crea la Organización Internacional del Trabajo; la Carta de las Naciones Unidas de 1945; la Declaración de los Principios Sociales en Chapultepec, México, de 1945; la Carta de la OEA de 1948; la Carta Americana de Garantías Sociales; la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, de 1948; la Declaración Universal de Derechos del Hombre, Naciones Unidas, de diciembre de 1948, y la Carta Social Europea, sancionada en Turín en 1961.

Quiero advertir, también, que cuando aquí se ha mencionado a los hombres de distintas ideas, deseo vindicar igualmente la obra que han cumplido los hombres del socialismo argentino en materia laboral. He mencionado a Alfredo L. Pallacios, pero podría citar a Pérez Leirós, a Giménez, a Juan B. Justo, a del Valle Iberlucea, a Adolfo Dickmann, a Nicolás Repetto, a Salvador Ruggieri, a Francisco Cúneo, así como también toda una enumeración cuya inserción solicito, y que incluye también las iniciativas de Juan Antonio Solari, Carlos Moreno y Augusto Bunge, para evitar una enunciación integral sobre esta materia.

—Asentimiento (1).

**Sr. Perette.** — Nosotros, señora presidente, entendemos que es necesario un código de trabajo, y que la codificación jamás invalidará el progreso del derecho laboral. Se han dictado, en un conjunto de asambleas, una serie de normas en esta materia.

También reconocemos —y en esto coincidimos con el informe del señor senador Pennisi— la necesidad de corregir la dispersión legislativa. Es necesario evitar todo tipo de confusiónismo jurídico y tratar de unir todo lo que tiene un similar espíritu de orientación; lograr la unidad de fines y la concordancia en el proceso constructivo del derecho laboral. Esas son palabras de un eminente maestro, Mariano Tissenbaum, en su trabajo titulado *A cuarenta años del primer ensayo de codificación en el país*.

Con respecto al informe del señor senador Pennisi, quiero destacar su importancia, ponderación y ecuanimidad.

(1) Ver Apéndice.

Es necesario responder a las exigencias de claridad en las leyes del trabajo. El derecho del trabajo y el de la seguridad social están íntimamente vinculados, y las normas deben consagrarse respetando esa vinculación.

En esta materia deseo recordar las palabras de un eminente argentino, Crisólogo Larralde, quien dijo que «no habrá mejoras en el nivel de vida, ni ocupación plena, ni desarrollo, ni estabilidad, ni posibilidad de que el artículo 14 de la Constitución derive en bienes para la clase trabajadora si la Argentina no pertenece definitivamente a los argentinos».

Hago esta referencia porque entiendo que implica un compromiso. Todos estamos obligados a lograr la recuperación de los resortes claves de la economía argentina y a hacer una patria modelada y dirigida con el esfuerzo nacional, con pleno poder de decisión, con un frente interno unido para salvar no a un gobierno ni a un hombre, sino un destino de civilidad, democracia, justicia y soberanía.

Del análisis del articulado del proyecto surge la existencia de una serie de disposiciones que podríamos cuestionar, pero me hago cargo de un deber parlamentario de lealtad. No he podido hacer llegar al miembro informante de la comisión el texto de las reformas que había pensado propiciar, pues el trabajo lo he concluido en el día de la fecha. Por ello, no he de proponer esas reformas de tipo particular, para evitar a los señores legisladores una sorpresa en el trámite parlamentario al que nos hemos adecuado todos los sectores que integramos esta Honorable Cámara.

Quiero destacar, señora presidente y señores legisladores, que este proyecto que consideramos es una obra de recopilación, que tiene también su parte de creatividad, pero que no implica ni el Código de Trabajo ni la revolución que debe realizarse en esta materia. Y el propio mensaje del proyecto así lo señala.

Se hace necesario legislar sobre el contrato de trabajo porque la época que vivimos —tanto en el país como en el mundo entero— se caracteriza por el fenómeno de la innovación tecnológica en todos los campos del quehacer humano, y por el crecimiento prácticamente sin freno del capital hacia altas formas de concentración, especialmente exteriorizadas por las compañías multinacionales.

Nosotros asumimos la decisión de proteger al trabajo y al trabajador, quien presta su energía, capacidad y tiempo a cambio de un salario.

Un destacado autor ha señalado que son cuatro las metas esenciales en materia laboral:

Primero, la seguridad, el trabajo por un salario razonable y sin temor a ser despedido.

Segundo, la esperanza de progresar. Tercero, la «consideración» en las relaciones del trabajo, y cuarto, la dignidad del que trabaja.

Estas cuatro metas tienen plena vigencia y son de rigurosa actualidad para todos los trabajadores.

Entendemos que el derecho del trabajo hoy es, como se califica en sus mejores expresiones, un «derecho de protección» de los trabajadores, y de ahí es explicable el conjunto de normas que tiende a equilibrar jurídicamente el capital y el trabajo. Es un derecho protector de los trabajadores, ha dicho Mario de la Cueva en su estudio sobre el derecho mexicano del trabajo.

Es evidente que los temas que aquí se han considerado evitarán que entremos a analizar el articulado en detalle, más con la aclaración que he formulado.

Debe preverse en esta legislación, en primer término, el salario *in itinere* para aquellos casos de establecimientos que se trasladen sin resolver el problema de la vivienda y del transporte.

Segundo, la participación en las innovaciones tecnológicas; tercero, el salario «vacacional», y cuarto, el seguro de desempleo.

Advierto que en esta materia el sector de la Unión Cívica Radical ha presentado, por intermedio del señor senador doctor de la Rúa, un proyecto completo sobre este tópico fundamental a que se ha referido el señor senador Frugoli.

También a esos cuatro puntos debe agregarse: quinto, la forma de cogestión y participación es un punto básico, porque allí están los aspectos de una revolución. Nosotros lo tenemos en nuestra plataforma, y estoy seguro de que todos los sectores están imbuidos de una disposición sobre esta materia.

También bregamos, como sexto punto, por la eliminación de topes máximos en los despidos, así como por otros aspectos que ya hemos señalado.

Nosotros, señora presidente, queremos advertir esencial y fundamentalmente que más que la indemnización nos interesa la estabilidad absoluta del trabajador en el empleo, suprimiendo el despido injustificado o arbitrario, sobre todo en empresas financieramente rentables.

Así mismo, nos importa el derecho al trabajo con el seguro del desempleo frente al grave problema de la desocupación, que siempre es oscilante y que no se suprime por decreto.

También nos preocupa la participación en los beneficios de la empresa mediante la emisión de bonos de participación según lo establecido en el artículo 230 de la ley 19.550 sobre sociedades anónimas, y, finalmente, la cogestión en las empresas mediante la creación de los consejos de empresa.

A todo esto hay que agregar, fundamentalmente, el Código del Trabajo y Seguridad Social que prevé el artículo 67 de la Constitución Nacional y el proyecto de código del ex presidente Yrigoyen.

Cabe destacar también que en este proyecto de ley se consagra el salario vital, mínimo y móvil, pero se substituyen varias disposiciones de la ley 16.459, reemplazando el concepto del sa-



lario para la familia tipo del trabajador —que incluye las asignaciones familiares, otorgando a éstas una adecuada movilidad— por el salario para el trabajador, individualmente considerado.

Pero, además, este proyecto de contrato de trabajo prácticamente viene a derogar el artículo 99 de la ley 16.459, que establece el Consejo Nacional del Salario Vital, Mínimo y Móvil y que determina periódicamente el reajuste del salario.

Nos preocupa la forma en que se encara la huelga y el contrato individual de trabajo.

Yo no he de analizar con mayor amplitud todo este articulado, que, vuelvo a decir, tiene el apoyo del sector de la Unión Cívica Radical, pero también me reservo el derecho de propiciar las reformas esenciales y la introducción de los nuevos institutos que hacen a un derecho laboral progresista y moderno.

Queremos un hombre libre, un trabajador en bienestar, una clase media custodiada y una justicia en plenitud. Un eminente pensador latinoamericano dijo que «cada uno recibe lo que siembra». Aspiramos a que este proyecto de ley tenga el valor de comenzar esta tarea de siembra y que sirva como un mensaje para los creyentes, pero también para los descreídos, para los que buscan el mal camino de la violencia y olvidan que nada se construirá fuera de los moldes del derecho, de la paz y de la fraternidad argentinos. Nosotros defendemos los derechos sociales, obreros y económicos bajo el escudo protector de los derechos humanos.

Aspiramos a que el pueblo «ascienda a la cúspide de la pirámide social».

No le tememos a ninguna transformación ni a ningún progreso. Lo esperamos, lo queremos y lo alentaremos.

Celebro que todos contemplen este deber que es el «de vencer a la injusticia gozadora», con el imperio de un sistema de equitativa distribución de la riqueza que sea efectiva, fraternal e igualitaria.

Recuerdo, a quienes tienen y a quienes no tienen, los conceptos y la advertencia de Kennedy: «Cuando la marea está alta, todos los mares y todas las naves están en riesgo».

Que cada uno contribuya al bienestar general y al progreso de la comunidad argentina con un profundo sentido de reparación moral y social entre todos sus hijos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

**Sr. Pennisi.** — Pido la palabra.

**Sra. Presidente** (Bárbora de Nasif). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

**Sr. Pennisi.** — Compañera presidente, compañeros senadores: después de haber escuchado las brillantes exposiciones formuladas por los compañeros legisladores, a través de las que han fijado, en definitiva, conceptos de apoyo en general al proyecto de contrato de trabajo enviado por el Poder Ejecutivo, pensé que tal vez no hubiera hecho falta intervenir nuevamente en el debate, luego del amplio y detallado informe

que realicé en la sesión del viernes último, al fijar la posición de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Pero dadas las circunstancias, entiendo que corresponde hacer algunas aclaraciones con respecto a manifestaciones que se han vertido en el recinto. Ello no significa entrar en una polémica, sino que, muy por el contrario, demuestra, como lo expresé en la sesión a que hice referencia anteriormente, que en el Senado de la Nación sus integrantes —aunque pertenezcan a cualquier grupo político— están consubstanciados con los principios de justicia social que, para nosotros los trabajadores, son una realidad a partir del 17 de octubre de 1945.

Comprendo una serie de inquietudes que se han planteado y que realmente es necesario establecer dentro de las reformas que a los códigos o normas laborales va tener que introducir el Congreso de la Nación en su oportunidad.

También en esta circunstancia deseo expresar nuevamente ante este Honorable Senado algo que llevo muy hondo y que fue lo primero que le escuché decir al general Perón cuando, de vuelta a nuestro país, se encuentra con 18 años de descalabro —especialmente el período en que estuvo al frente del gobierno la dictadura militar—, en que no había ninguna duda de que en lo social, económico y político, la situación era harto difícil para nuestra República y de que la clase trabajadora se encontraba realmente sumergida a raíz del continuo desequilibrio que se producía entre precios y salarios. En esa oportunidad el general Perón dijo, usando una frase pericleana: «Sin prisa pero sin pausa; todo a su medida y armoniosamente».

También los peronistas creemos que no somos ni apresurados ni retardatarios, pero que sin prisa y sin pausa vamos a ir alcanzando los objetivos indispensables para que en nuestro país nuevamente vuelva a reinar la paz y la tranquilidad, como es el deseo de todo el pueblo argentino, en un estado de abundancia y donde no existan tantos ricos ni tantos pobres, sino un reparto equitativo de la riqueza, que es el producto de todos y no el patrimonio de alguien.

Claro está que si entrara a analizar nuevamente aspectos muy particulares que se manifestaron en este recinto tendría que decir que algún articulado de este proyecto de contrato de trabajo es también parte de un anteproyecto de código de trabajo que confeccionara una comisión redactora designada por el Poder Ejecutivo nacional el 9 de marzo de 1965 y que estaba integrada por los doctores Dispontin, Nápoli y Tissebaum.

Destaco esta circunstancia porque deseo hacer referencia a algo que considero importante. Se ha hablado de que este Senado de la Nación había aprobado un proyecto de ley de los compañeros de la bancada radical, estableciendo una jornada de 44 horas de trabajo, oportunidad en que compartíamos y seguimos compartiendo

ese criterio los legisladores de esta bancada. Al respecto, quiero señalar también que en este Código de Trabajo que se redactó en aquella oportunidad se establecía una jornada de 48 horas, porque se consideraba que al establecer un cuerpo orgánico tan amplio, la jornada de trabajo era una de las partes de este Código pero no lo esencial del mismo.

También en esta circunstancia tenemos que destacar que este proyecto de contrato de trabajo contiene 302 artículos, y la jornada de trabajo está contemplada en algunos de ellos.

Si los senadores, en su momento, fijamos la posición de que estábamos de acuerdo con las 44 horas de trabajo, hoy volvemos a reafirmar esa postura. Por eso hemos introducido una fórmula en el artículo 213 de este proyecto de régimen de contrato de trabajo —y me permito desviar un tanto la atención de los compañeros senadores, compañera presidente, porque creo importante recordarlo— por la cual volvemos a dar a las provincias el papel que éstas deben jugar en un momento que consideramos muy oportuno, porque se deben tener en cuenta situaciones muy especiales que cada una de ellas puede estar viviendo, sin que eso signifique crear desigualdades.

Al respecto, dice el artículo 213: «La extensión de la jornada de trabajo será fijada por las leyes, estatutos profesionales y las convenciones colectivas de trabajo. Las normas legales que las provincias hubieren sancionado o sancionaren atendiendo a la modalidad o características de la actividad y/o de las zonas o provincias de que se trate, en miras de adecuar la extensión de la jornada en sus respectivos ámbitos, se tendrán por incorporadas, con ese alcance, a la normativa federal sobre la materia».

En ese aspecto, las respectivas provincias podrán dictar las normas que consideren convenientes. El contrato no dice nada sobre extensión de la jornada, y ello lo deja librado a lo que puedan determinar los distintos Estados provinciales.

Quería destacar, en cuanto a una de las preocupaciones del senador Angeloz sobre el descanso que le corresponde al compañero trabajador cuando señalaba el hecho de que las normas de algunas provincias establecían el régimen de las cuarenta y cuatro horas y las de otras el de cuarenta y ocho, que el contrato de trabajo también determina en su artículo 221 lo siguiente: «Queda prohibida la ocupación del trabajador desde las trece (13) horas del día sábado hasta las veinticuatro (24) horas del día domingo siguiente, salvo los casos de excepción...».

Quiere decir que este artículo contempla lo que es realmente esencial para nosotros, o sea el descanso del compañero trabajador. Y, en ese sentido, se está respetando el sábado inglés.

Vuelvo a repetir que nosotros no hemos variado en nuestra posición, pero creemos que es muy importante destacar que este contrato de trabajo no solamente contiene —como lo había

dicho en un principio— normas que hacen exclusivamente a la jornada de trabajo, sino también a los fundamentales aspectos del régimen laboral. Trataré de explicar algunos de estos últimos en el curso de mi exposición, como complemento de lo expresado anteriormente en la información general, que fue bastante amplia.

En el artículo 49 se consagra, como norma positiva de nuestro derecho, una concepción humanista del trabajo: «...la actividad productiva y creadora del hombre en sí...».

El artículo 76 se refiere a controles personales; el 81, a encuestas y pesquisas —prohibición—, libertad de expresión, etcétera. De modo que en ese aspecto se termina con una de las normas que imponían algunos empresarios en ciertas oportunidades, que denigraban al trabajador, por ejemplo, revisándolo a la salida de su lugar de trabajo delante del resto de los compañeros, creando diferencias en el trato para con unos y otros, y situaciones bastante anormales en ese aspecto.

El contrato de trabajo procura terminar con ese sistema y otorgar el debido respeto que se merece realmente el trabajador.

En el artículo 99 se establece un principio del que ya se ha hablado en este recinto y al que hizo mención el señor senador Cáceres: es el de que en caso de duda debe resolverse en favor del trabajador. Precisamente ésa es la tesis que sostiene el proyecto de ley.

En el artículo 63, sobre «Despido-presunción», se consagra el principio de que probada la existencia de la relación de trabajo y su cesación, se presume el despido, salvo prueba en contrario.

El artículo 57 dispone una cantidad de normas en cuanto a omisión de formalidades y a su carencia de validez probatoria, etcétera.

El artículo 58 se refiere a «Aplicación a los registros, planillas u otros elementos de contralor»; y el 59 a «Omisión de su exhibición—inversión de la carga de la prueba-declaración jurada». O sea, que en ese aspecto, existiendo en el Senado una gran cantidad de compañeros abogados, se han dado cuenta de la importancia de este contrato de trabajo para la eventualidad de realizarse juicios laborales, por lo que va a significar para ellos en cuánto a la simplificación del trámite y el amparo al trabajador.

También debemos tener en cuenta que se trata de establecer normas para evitar en el futuro una maniobra que practicaban las empresas en lo referente a firmas de recibos en blanco, su invalidez, modos de oposición, etcétera.

Se establece así mismo el principio de la razonabilidad en cuanto al uso de las facultades disciplinarias por parte del empleador. Un compañero senador me preguntaba qué debía entenderse al respecto, y nosotros tratamos de explicarle en el seno de la comisión, dentro de las dificultades que encierra un término abstracto, que muchas veces el empleador aplica

diez días de suspensión al empleado que llega cinco minutos tarde, y que con este artículo se buscaba proporcionalizar la sanción a la gravedad de la falta realmente cometida. O sea, que por cinco minutos de impuntualidad nunca se podrán aplicar diez o quince días de suspensión.

Por el artículo 83 se establece el deber de seguridad, algo muy importante y que la Comisión de Trabajo y Previsión Social modificó por considerar que mientras unos viven el problema en su práctica profesional, nosotros lo hemos vivido en la tarea diaria. Muchísimas veces nos hemos encontrado con que un ambiente o lugar de trabajo es considerado insalubre por la autoridad competente, por lo que se obliga a una empresa a introducir modificaciones que tornen salubre ese ámbito. Para ello se le dan 10, 15 ó 30 días de plazo, pero ocurre que la legislación actual solamente contempla la aplicación de una multa mínima para el caso de incumplimiento, y lo único que se consigue una vez vencido el plazo es que la empresa afronte esa sanción, debiendo el trabajador continuar su trabajo en las mismas condiciones de insalubridad.

El artículo 83 prevé que al darse las circunstancias que menciona, el trabajador no tendrá obligación de trabajar, aunque no por ello perderá el derecho de percibir su salario. Eso servirá para presionar a la parte empresaria a fin de que haga lo que nosotros perseguimos por sobre todas las cosas: no se trata de curar al enfermo, sino de prevenir la enfermedad del trabajador provocada por condiciones precarias de salubridad.

También se establece una serie de normas relativas al derecho de los trabajadores como es la de que uno de sus representantes controle y verifique los libros de la empresa, cuando sus sueldos respondan en parte a comisiones o porcentajes. Creo que en mi informe fui amplio en este aspecto, principalmente en lo concerniente a algunos tipos de tareas.

—Ocupa la Presidencia el doctor José Antonio Allende, presidente provisional del Honorable Senado.

**Sr. Pennisi.** — Hace pocos días algunos compañeros senadores criticaban la circunstancia de que algunos diarios dedicaran espacio reducido a la muerte de Hipólito Yrigoyen y, en días recientes, solamente 23 líneas a la desaparición de Arturo Jauretche. Es la misma prensa que critica ahora la facultad de revisar los libros. Pero nosotros afirmamos que cuando se trate de empresas honradas, no pueden tener ningún problema ni sentir resquemores de ninguna naturaleza por el hecho de que los trabajadores procedan a revisar sus libros por medio de sus representantes. En su defecto vamos a creer que son ciertos los rumores que circulan, en el sentido de que en algunas empresas se lleva doble juego de libros, y que por eso no quieren que se los verifiquen.

En cuanto al régimen de vacaciones, se amplía el período a catorce días cuando el trabajador tuviera hasta cinco años de antigüedad, a veintidós días cuando tuviera de cinco a diez años de antigüedad, a veintiocho días cuando tuviera de diez a veinte años de antigüedad y a treinta y cinco días cuando tuviera más de veinte años de antigüedad.

Este proyecto de ley contiene, además, un aspecto muy importante que debemos destacar. A pesar de que la ley ya establecía que las vacaciones debían pagarse antes de que se tomaran, en la práctica muchas veces se abonaban cuando el trabajador regresaba de las mismas.

Yo me pregunto: ¿cómo puede gozar de las vacaciones un trabajador que no ha recibido el dinero en el momento oportuno? En cambio, con las modificaciones introducidas, si el empresario no procede de acuerdo con la ley, con este contrato de trabajo deberá abonar el equivalente a dos veces y media de los jornales correspondiente a la licencia. Esta misma sanción se aplicará a las empresas que tienen por norma, aduciendo razones de producción, no acordar la licencia en el período correspondiente. Actualmente, sucede que muchos trabajadores, al quedar roto el vínculo laboral con las empresas por diversas razones, no pueden reclamar luego pagos por licencias adeudadas de acuerdo a la jurisprudencia vigente sobre el particular.

Muchos se preguntarán cómo puede ser que en 1974 se produzcan estos hechos, que haya empresas que no pagan licencias. Pero es necesario destacar una vez más que muchas veces el trabajador por temor de perder su fuente de trabajo no reclama en el momento oportuno el pago de lo que legalmente le corresponde. Ahora, la ley establece que la licencia adeudada deberá abonarse con una sanción de dos veces y media su valor.

Hay otro hecho que deseo destacar en esta exposición un tanto deshilvanada; es el siguiente: sucede, muchas veces, que una empresa cierra su establecimiento por treinta días, por ejemplo, con trabajadores de distintas antigüedades. De esta manera trabajadores a quienes les correspondían diez días de licencia debían soportar veinte días de suspensión injustificada porque al empresario se le ocurrió cerrar el establecimiento para tomar sus propias vacaciones. Este proyecto de ley de contrato de trabajo obliga a la parte empresaria a pagarle al trabajador por todo el tiempo que cierre el establecimiento y, de esa manera, termina con una verdadera injusticia.

Ya destaqué en el informe en general, que fue muy amplio, que la mujer no puede ser despedida por su estado de embarazo.

En este sentido debo señalar nuevamente que se incluyó esta disposición a sugerencia del teniente general Juan Domingo Perón, quien luego de escuchar un programa en el que nos referíamos al tema expresó su inquietud en relación

con la necesidad de asegurar la estabilidad de la mujer durante ese período. También en este caso la ley no se limita a señalar la parte teórica y establece normas para el caso de que la disposición sea violada y se produzca el despido.

A la mujer que está en estas condiciones se le debe, además de duplicar la indemnización que comúnmente le hubiera correspondido, abonar dos años de sueldo como indemnización por la situación que se plantea. Quiero destacar algo muy importante relacionado con el contrato de trabajo. El proyecto del Poder Ejecutivo traía algunas modificaciones positivas acerca de la enfermedad inculpable, estableciendo que al trabajador con antigüedad inferior a cinco años le corresponde percibir por enfermedad inculpable tres meses de remuneración y seis meses cuando la antigüedad es mayor. Pero vuelvo a repetir que los trabajadores hemos vivido la experiencia en carne propia y los profesionales también la conocen, porque en muchas oportunidades ellos mismos se han encontrado preocupados ante la situación de compañeros trabajadores que han debido iniciar juicio porque su enfermedad se prolonga más allá de los plazos vigentes y al tener cargas de familia el problema se torna más difícil aún.

Por ello, la comisión ha introducido modificaciones en el proyecto estableciendo que el trabajador que tenga cargas de familia gozará de seis meses de licencia pagos por enfermedad inculpable cuando su antigüedad sea menor de cinco años y doce meses de jornales pagos cuando ella sea superior a cinco años.

En este tema de la enfermedad inculpable y de los accidentes deseo destacar algo que no se debe pasar por alto. Ocurre muchas veces que, vencidos los plazos que establece la ley, el trabajador queda disminuido físicamente para sus tareas habituales y por ello debería realizar otro tipo de trabajo. En estos casos, como la ley no preveía absolutamente nada, aunque estuvieran en condiciones de hacerlo, las empresas se negaban a asignarle nuevas funciones porque, en definitiva, vencido el plazo de un año de ausencia por enfermedad inculpable o accidente, no correspondía abonar ningún tipo de indemnización. En este sentido se han introducido normas muy importantes en el proyecto. En lo sucesivo las empresas que se nieguen a retomar al personal y estén en condiciones de proporcionarle trabajo acorde con su estado físico en virtud del artículo 198 deben pagar un año de salarios, aparte de la indemnización que le hubiere correspondido como si se tratara de un despido injustificado.

Estas consideraciones generales que estoy formulando no se relacionan solamente con la jornada de trabajo sino con el conjunto de los 302 artículos que comprende este proyecto de ley. Es tan grande la importancia y trascendencia de este proyecto, que ha merecido el apoyo en ge-

neral no sólo de los senadores que integramos el Frente Justicialista de Liberación sino también de los compañeros Perette y de la Rúa, firmantes del despacho e integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical, porque ellos también interpretaron que se habían introducido en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo reformas muy positivas para la clase trabajadora.

En cierto modo estoy hablando más como trabajador que como legislador y ello es porque me ha tocado vivir muchas de estas circunstancias especiales, como la que se plantea en el caso del control médico. ¡Cuántas veces nos hemos encontrado con situaciones muy difíciles a raíz de que el médico que asiste al trabajador y que pertenece a la organización sindical o a una mutual considera que el obrero está realmente enfermo, y que por tal causa no está en condiciones de concurrir al trabajo, y el médico del empresario —que me perdonen los señores profesionales— que muchas veces está defendiendo los intereses de las empresas —y no digamos ya de empresas nacionales sino multinacionales— obligan al trabajador a presentarse, aunque físicamente no esté en condiciones de trabajar!

En este sentido ha sido muy previsora el proyecto de contrato de trabajo al invertir la situación actual. Si el médico patronal discrepa con lo que opina el del trabajador, deberá ser la empresa la que solicite la junta médica. Así no se dará lo que actualmente ocurre, que los trabajadores tengan que deambular de oficina en oficina para conseguir una junta médica, la que muchas veces está integrada por médicos que desempeñan una doble función: por un lado, profesionales en una oficina de gobierno, y por otro, médicos de distintas empresas.

Por este proyecto de contrato de trabajo se impone que sea la empresa la obligada a requerir dicha junta médica para que dictamine sobre la enfermedad del trabajador.

También trata esta ley acerca del alcance del reintegro del trabajador a sus tareas después de huelgas aprobadas por el sindicato. Parece desusado que un contrato de trabajo legisle sobre una huelga aprobada por el sindicato. Pero ocurre que nosotros velamos para que realmente sea la organización obrera la que controle y maneje este tipo de medidas que, con justicia, muchas veces realizan los trabajadores para tratar de impedir que sus conquistas sean avasalladas.

Nosotros no queremos decir que las huelgas sean dispuestas por las organizaciones obreras, sino que nos referimos a su aprobación, y lo hacemos porque muchas veces sabemos que los trabajadores, antes de la aprobación de la medida por parte del sindicato, se ven obligados a efectuar una huelga o paro en situaciones de emergencia, la que luego, cuando interviene el sindicato se demuestra que era legítima y me-

rece la aprobación de las autoridades de esa organización sindical.

Y así también establecemos que se debe terminar con el trato discriminatorio después de producida una medida de fuerza. Terminada ésta, el empleador se creía con el derecho de determinar quién podía reanudar las tareas y quién no, produciendo de este modo típicos casos de división entre los propios compañeros trabajadores, cosa por la que tenemos la obligación de velar para que no se produzca.

En nuestro país no deben existir hijos y entenados.

Si una huelga se produce por una causa justa, y así lo entendió la organización sindical, todos quienes intervinieron en la misma tienen derecho a reanudar la labor, y la patronal no tiene por qué hacer trato discriminatorio al respecto, en cuanto a quiénes se debe reincorporar.

También hay un párrafo sobre cuyo contenido coincido en alguna medida con las manifestaciones del doctor Perette, en el sentido de que en lugar de estar con la indemnización estamos con la estabilidad. Pero no hay dudas de que estamos hablando de un contrato de trabajo sobre situaciones típicas que vive nuestro país y nos ajustamos en estas circunstancias a esas situaciones que estamos viviendo. Por ello se ha tratado de establecer un tope indemnizatorio que por su monto haga que los empleadores no despidan indiscriminadamente a los compañeros trabajadores. A tal fin, el monto mínimo será el equivalente a tres veces el salario mínimo vital, y se tomará como base el promedio del último año y no el de los últimos tres, como ocurre hasta el presente.

También establecimos una modificación al proyecto original del Poder Ejecutivo en cuanto hace al trabajador jubilado, aspecto que ha sido destacado por los compañeros legisladores que han hecho uso de la palabra. Desde ningún punto de vista pueden existir desigualdades entre dos trabajadores, por el hecho de que uno sea jubilado y el otro no. Pero hasta el presente, las empresas preferían contratar a personal jubilado porque sabían que respecto del mismo se daban mejores condiciones para explotarlo. Por eso proponemos que se establezca que el jubilado que, por circunstancias especiales de la vida y de los momentos que estamos atravesando, deba volver a la actividad, tendrá que recibir los mismos beneficios que los demás trabajadores.

También se ha incorporado, a sugerencia del compañero doctor Cerro, algo que él como profesional y nosotros como trabajadores hemos considerado muy importante. Me refiero a la actualización por depreciación monetaria, aspecto en el que han coincidido también los demás sectores. Reiteradamente nos encontrábamos ante despidos injustificados, que las empresas llevaban ante la justicia porque sabían que el pronunciamiento de ésta podría demorar tres o

cuatro años y pagaban entonces con moneda de un poder adquisitivo mucho menor. Este aspecto de la excesiva demora de los juicios deberemos tenerlo muy en cuenta para cuando tratemos el tema —que creo que ya ha tenido entrada en esta Cámara—, referido a procedimientos de la justicia laboral, para evitar los problemas que una exagerada demora ocasiona a los compañeros trabajadores que afrontan una situación muy difícil. Por eso hemos considerado conveniente incluir una disposición sobre actualización de los importes por depreciación monetaria, para que cuando termine un juicio el trabajador reciba, además de la suma originariamente reclamada, el monto resultante de aplicar sobre la misma los índices de desvalorización establecidos por los organismos competentes.

El doctor Frugoli había manifestado alguna inquietud con relación al trabajador temporario y consideraba que debían establecerse una serie de normas que a su criterio no estaban contempladas dentro de los artículos pertinentes. Sobre el particular, me voy a permitir leer el artículo 106 del dictamen, el que refiriéndose al trabajador temporario expresa en su segundo párrafo que el mismo «...adquiere los derechos que esta ley asigna a los trabajadores permanentes de prestación continua, a partir de su contratación en la primera temporada, si ello respondiera a necesidades también permanentes de la empresa o explotación ejercida, con la modalidad prevista en este capítulo». O sea que la Comisión de Trabajo y Previsión Social considera, con respecto a las inquietudes manifestadas por el doctor Frugoli en cuanto hace a enfermedad, pago de salario familiar, etcétera, que están contempladas en esta segunda parte del artículo 106 y espera que así se tengan en cuenta cuando se deban interpretar los alcances de este artículo.

El doctor Frugoli también observó el artículo 269. Se trata de un caso que muchas veces ha originado polémicas, por cuanto en nuestro país se lo considera un poco tabú. Se trata de pensar que la esposa no legítima tenga los mismos derechos que la que se considera legal.

Cuando conversaba sobre este tema con el doctor Frugoli le manifesté que me daba la impresión de que la Comisión de Trabajo se había convertido en uno de esos programas de televisión que recibe cartas, porque efectivamente hemos recibido una serie de ellas, y en una de esas cartas un compañero —aparentemente perteneciente a las fuerzas armadas— pregunta por qué no se aplica ese espíritu tan avanzado de la ley de contrato de trabajo para los empleados públicos, para las fuerzas armadas, la Policía, etcétera. Le hemos contestado que éste es el principio, el puntapié inicial que damos sobre la materia.

Algún día tendremos que debatir, en este recinto, la ley del divorcio, y una serie de situaciones y hechos que parecen tabú en nuestro país, pero que son realidades que se viven a diario. En alguna oportunidad los argentinos —como lo hi-

cieron los italianos— tendremos que fijar nuestra posición al respecto.

**Sr. Perette.** — ¡Usted no va a dejar tranquilo a nadie! (Risas.)

**Sr. Pennisi.** — Le aclaro, compañero senador...

**Sr. Perette.** — Si sigue en materia laboral, está bien, pero si trata esos temas... (Risas.)

**Sr. Pennisi.** — Ocurre que hay algunos temas que van ligados indirectamente a los asuntos que abarca la ley de contrato de trabajo.

Voy a referirme específicamente al tema del soltero que convive con una mujer con la que no está casado. La comisión acordó que cinco años era mucho tiempo y estaba dispuesta a reducirlo a dos años —particularmente si hubiera un hijo de por medio— para que la mujer que hubiese convivido con el trabajador perciba la indemnización por fallecimiento de éste.

Algunos legisladores expresaron su preocupación en cuanto a la esposa legítima, muy digna, que vela por su hogar y sus hijos, temiendo que con esta norma podíamos cometer un equívoco y amparar a quien no corresponde, y así, en vez de beneficiar, podríamos producir un daño. Habiéndolo comprendido hemos modificado un poco nuestro criterio con el siguiente agregado: «Tratándose de un trabajador casado y presentándose la situación antes contemplada, igual derecho tendrá la mujer del trabajador cuando la esposa por su culpa o culpa de ambos estuviere divorciada», que era uno de los temas en cuestión, «o separada de hecho al momento de la muerte del causante». Con este agregado tratamos de darle una expresión más exacta al sentir del Poder Ejecutivo en esta materia.

El proyecto de contrato de trabajo, indudablemente a través de sus trescientos dos artículos, contiene importantes disposiciones para el futuro del movimiento obrero argentino.

Quiero aprovechar la circunstancia de que se encuentra ahora presente el compañero senador Angeloz para decirle que quienes sostenemos el criterio de la jornada de trabajo de cuarenta y cuatro horas semanales, lo seguiremos sosteniendo. Pero también deseo manifestarle que el proyecto que aprobaremos no fija un tope a esa jornada ya que, por el contrario, otorga la posibilidad de establecerlo en el artículo 213. En ese sentido, tenemos la seguridad de que esa disposición será sabiamente aplicada por todas las provincias.

Compañero presidente y compañeros senadores: creo innecesario abundar en otro tipo de consideraciones; reitero lo expresado en el informe que elevé a este honorable cuerpo y solicito la aprobación del proyecto de ley que consideramos, con las modificaciones introducidas por la comisión.

Nada más.

**Sr. Angeloz.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

**Sr. Angeloz.** — Deseo formular una breve aclaración porque he sido aludido por el señor senador Pennisi.

Efectivamente, el señor senador preopinante manifestó que la Comisión de Trabajo y Previsión Social ha respetado el «sábado inglés», y yo quiero hacer una confesión en este recinto. Tengo la absoluta seguridad de que si el miembro informante hubiera sido el dirigente gremial Pennisi, las cuarenta y cuatro horas de labor semanales ya se habrían establecido en todo el país.

Evidentemente, como presidente de la comisión, integrado en un movimiento político y respetando una «verticalidad» propia de su partido, debe ajustarse a cierto tipo de norma. Pero no puedo dejar de mencionar que el «sábado inglés» que implica la aprobación del proyecto, es el porteño, no el de las provincias.

Recojo la inquietud del señor senador Pennisi y no tengo duda alguna de que las provincias, tal vez con más sensibilidad que la Nación para resolver este problema, van a establecer el «sábado inglés». Nosotros aún estamos a tiempo de hacerlo. De otro modo, en este Honorable Senado de la Nación no habremos sabido dar a los trabajadores del país lo que ellos reclaman, haciéndose eco de una conquista de carácter mundial: las cuarenta y cuatro horas semanales de labor.

No obstante lo expresado, debo señalar que este contrato de trabajo viene a satisfacer aspiraciones importantes de los trabajadores argentinos, a las que hemos adherido a pesar de las observaciones que formulamos al proyecto.

**Sr. Culasso Mattei.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

**Sr. Culasso Mattei.** — No quise interrumpir al señor senador Pennisi mientras hacía uso de la palabra, pero con respecto al capítulo IX del proyecto deseo hacerle llegar una inquietud, en virtud de su carácter de presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Aclaro que comparto totalmente el articulado, pero creo que sería necesario agregar un artículo que protegiera al trabajador de sí mismo. Y voy a aclarar lo que quiero significar.

Ejerczo mi profesión en una población que tiene de siete a ocho mil habitantes, mil quinientos de los cuales, aproximadamente, son obreros metalúrgicos, es decir que pertenecen al mismo gremio que el señor senador Pennisi. Allí, la jornada de cuarenta y cuatro horas de labor semanal no se cumple en absoluto pues se trabajan doce, catorce y dieciséis horas diarias con las graves consecuencias que, como médico que soy de los obreros metalúrgicos, he podido comprobar. Existen casos de operarios que a los 45 años de edad son viejos por problemas de columna, de pulmón, bacilosis y silicosis. Repito que todo ello ocurre como consecuencia de doce, catorce

y dieciséis horas diarias de trabajo que se cumplen en esa población.

Yo no sé si ese artículo que se refiere a las horas suplementarias —comparto el pago del 50 y del 100 por ciento, por supuesto— debería ser limitado en alguna forma para la protección de los mismos obreros, quienes, con el afán de ganar un poco más, son capaces de trabajar la cantidad de horas que he mencionado.

Digo todo esto con claridad y completa certeza. Usted sabe, señor senador Pennisi, lo que significa ser moldeador, fundidor de hierro o de acero y estar trabajando doce, catorce y dieciséis horas diarias.

En treinta años que estoy en la población, veinte los he dedicado a atender obreros metalúrgicos y, repito, he visto las graves consecuencias producidas por ese no cumplimiento de las disposiciones de la jornada de trabajo, a pesar de lo especificado en el contrato de trabajo.

**Sr. Cerro.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

**Sr. Cerro.** — Señor presidente: tampoco he querido interrumpir al señor senador Pennisi en su exposición; pero simplemente formularé dos observaciones. En primer lugar, deseo referirme a la duda con respecto al término «razonabilidad».

Se habría hecho la objeción de que es un término abstracto, poco inteligible; pero el ejemplo puesto por el señor senador Pennisi es muy claro y gráfico. Tan sólo, a efectos de la interpretación y para reafirmar la posición del señor miembro informante, quiero aclarar que el concepto de razonabilidad se opone al de arbitrariedad, o sea, que en derecho, lo razonable es lo contrario de lo arbitrario y, como han dicho muchos autores, es lo justo, lo equitativo, lo adecuado, lo axiológicamente válido según las circunstancias del caso. Implica un juicio de prudencia, entendida ésta como la virtud del obrar concreto. Es el juicio hecho con sentido común, por un hombre común en una circunstancia concreta. Su dificultad estriba en que no se lo puede definir en general porque se refiere a un juicio práctico en cada caso concreto. El ejemplo puesto por el señor senador Pennisi es muy clarificador en el sentido de que ante una falta leve una sanción desmesurada no sería razonable sino arbitraria.

En segundo lugar, quiero aclarar que si bien se ha acogido en el dictamen de comisión lo que respecta a la desvalorización monetaria de las demandas de crédito por relaciones individuales de trabajo a propuesta del senador que habla, se ha suprimido la referencia de que se aplique a los juicios pendientes, por lo que pido a la comisión que en su momento se mantenga esa disposición para que en todos los juicios que aún no han tenido sentencia definitiva, de oficio los jueces fijen la desvalorización monetaria.

**Sr. Perette.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Perette.** — Señor presidente: es para señalar que el sector de la Unión Cívica Radical, así como ha firmado el despacho, va a votarlo en general favorablemente, sin perjuicio de las observaciones que ha formulado y de las substituciones que ha propuesto, lo que evitará reiterarlas en la consideración en particular.

Quiero solamente referirme a unas palabras del señor senador Pennisi, cuando se ha referido a «los 18 años de zozobras y de inquietudes...». Yo no quiero reabrir aquí un debate de tipo político...

**Sr. Pennisi.** — Quiero aclarar, señor presidente, que al mencionar esos 18 años me he querido referir al período de la dictadura militar.

**Sr. Perette.** — Muy bien, señor senador. Celebro su aclaración. No obstante, señor presidente, quiero destacar que cuando se hace esta referencia a los «18 años» nosotros hemos participado del quehacer de la vida argentina y, por lo tanto, asumimos la responsabilidad por los aciertos y errores que hemos cometido. Creemos haber contribuido al progreso y a la liberación de la República. De modo que, con el debido respeto que me merecen los adversarios políticos, vindico la obra que hemos cumplido desde el gobierno y la oposición. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

**Sr. Presidente (Allende).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el dictamen de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa por unanimidad.

**Sr. Presidente (Allende).** — En consideración en particular. La presidencia advierte y pone a la consideración del cuerpo que, de acuerdo con el texto del artículo 1º que dice: «Apruébase el régimen del contrato de trabajo (L. C. T.), cuyas disposiciones se considerarán incorporadas a la presente y se observarán como ley de la Nación», correspondería, en principio, que las observaciones en particular se formulen antes de poner a votación este artículo, pues al aprobarse el mismo queda sancionado el régimen del contrato de trabajo en su conjunto.

**Sr. Caro.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Caro.** — Estimo que la observación de la Presidencia es perfectamente pertinente, y que el método que propone es el acertado, pues de acuerdo con lo que establece el artículo 1º del proyecto de ley, en caso de ser aprobado el mismo, significa la aceptación en general y en particular del régimen de contrato de trabajo.

**Sr. Angeloz.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

**Sr. Angeloz.** — Señor presidente: quiero aclarar que, en mi carácter de senador por la pro-



vincia de Córdoba, votaré absolutamente en contra del artículo 213 tal cual está redactado.

**Sr. Presidente (Allende).** — La Presidencia se permite reiterar que las observaciones que los señores senadores tengan que realizar en particular deben ser efectuadas antes de votar el artículo 1º del proyecto de ley, pues una vez que se apruebe el mismo queda sancionado el régimen de contrato de trabajo.

**Sr. Perette.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Perette.** — Coincido con la interpretación que ha formulado el señor presidente. Ratifico las palabras del señor senador Angeloz, así como también todas las objeciones de carácter particular que formulamos, como, por ejemplo, las instituciones que se han omitido, a pesar nuestro. Por lo tanto, no vamos a reiterarlas en el debate en particular, por lo que me parece que el sistema propuesto por la Presidencia es el adecuado.

**Sr. Presidente (Allende).** — La Presidencia ha dado su punto de vista, porque del debate realizado se infiere que habría en principio aquiescencia para modificar los artículos 62 y 269.

**Sr. Pennisi.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

**Sr. Pennisi.** — Señor presidente: el artículo 61 del proyecto original del Poder Ejecutivo establecía: «La intimación hecha por una de las partes...» y se modificó de la siguiente forma: «El silencio del empleador ante la intimación hecha por el trabajador...». Por lo tanto, en el artículo 62 del dictamen de la comisión deben dejarse sin efecto las palabras «...salvo lo dispuesto en el artículo 61 de esta ley...». De esta forma quedaría modificado el citado artículo 62.

**Sr. Presidente (Allende).** — En consideración el artículo 62 del proyecto de ley de contrato de trabajo, con la modificación propuesta por el señor miembro informante de la comisión. Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Allende).** — Queda aprobado el artículo 62 con la modificación propuesta.

**Sr. Pennisi.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

**Sr. Pennisi.** — Señor presidente: en el artículo 269, en donde dice «...durante un mínimo de cinco (5) años...», propongo que se modifique por: «...durante un mínimo de dos (2) años...». Y luego continuaría así: «Tratándose de un trabajador casado y presentándose la situación antes contemplada, igual derecho tendrá la mujer del trabajador cuando la esposa, por su culpa o culpa de ambos estuviere divorciada o separada de hecho al momento de la muerte del

causante, siempre que esta situación se hubiere mantenido durante los cinco años anteriores al fallecimiento». Aclaro que los dos años solamente son para el caso del trabajador soltero.

**Sr. Presidente (Allende).** — En consideración el artículo 269 con la modificación propuesta por el señor miembro informante de la comisión. Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Allende).** — Queda aprobado el artículo 269 con las modificaciones propuestas por el señor miembro informante. ¿Algún señor senador desea modificar alguna otra propuesta de modificación en particular?

**Sr. Grubisich.** — Pido la palabra.

El artículo 135 establece el pago del sueldo anual complementario en dos cuotas. Propongo que se cambie el texto del mismo en el sentido de fijar que el pago se realice en una sola cuota.

La modificación sería la siguiente: «el sueldo anual complementario se abonará el 31 de diciembre de cada año».

Esta proposición tiene relación con la finalidad con la que fue implantado el aguinaldo, el cual estaba puesto al servicio de la posibilidad de que tanto el trabajador como su familia pudiera gozar de las vacaciones o del descanso turístico una vez al año.

La modificación que introdujo el gobierno militar, de abonarlo en forma fraccionada, ha impedido que la causa que determinó su establecimiento en nuestro país se cumpla. Por consiguiente, sostengo la necesidad de que el aguinaldo sea pagado a todos los trabajadores en una sola cuota cada año.

**Sr. Presidente (Allende).** — La Presidencia desea conocer la opinión de la comisión, por cuanto se trata de una observación en particular al artículo 135.

**Sr. Pennisi.** — Sobre este aspecto lamento mucho tener que decirle al señor senador que la comisión no acepta la modificación propuesta, por cuanto la redacción del artículo 135 —tal como la proyecta la comisión— está impuesta por las situaciones muy especiales por las que realmente sigue atravesando el país y que vienen heredadas de todo este período en que hemos soportado de la dictadura militar. Esperamos, tal cual lo ha dicho el general Perón, que cuando esas condiciones se modifiquen, podamos establecer las normas que hasta el año 1955 rigieron en la materia.

**Sr. Presidente (Allende).** — Se va a votar el artículo 135, tal como lo ha propuesto la comisión en su despacho.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Culasso Mattei.** — Pido la palabra.

Respecto del artículo 61, el mismo establece que la intimación hecha por el trabajador debe ser realizada de modo fehaciente. Propongo que

se substituya la expresión: «de modo fehaciente» por «mediante telegrama colacionados».

**Sr. Presidente** (Allende). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

**Sr. Pennisi.** — Creo que al establecerse en ese artículo la expresión «de modo fehaciente», se contempla la posibilidad de la existencia de una serie de medidas que pueden reunir ese carácter, sin necesidad de establecer categóricamente que sea mediante telegrama. No podemos incorporar en un artículo el detalle de las diferentes formas y es por eso que se utiliza la expresión «de modo fehaciente», para darle la posibilidad al trabajador que busque entre ellas la que considere más conveniente.

**Sr. Presidente** (Allende). — ¿El señor Culasso Mattei sostiene su proposición?

**Sr. Culasso Mattei.** — No, señor presidente.

Quisiera preguntar al miembro informante si respecto al artículo 218 podría haber una modificación en cuanto a la inquietud que hice llegar en su momento. Es decir, si se pudiera fijar un tope a las horas suplementarias.

**Sr. Presidente** (Allende). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

**Sr. Pennisi.** — Comprendo las inquietudes del compañero senador y tiene razón en muchos aspectos; pero debo también destacar que sobre el particular el convenio establece que para poder realizar horas suplementarias debe contarse con la autorización sindical.

Comprendo que realmente los trabajadores de otras partes del país realizan horas extras, precisamente, por la situación apremiante en que se encuentra la Argentina a raíz de la dictadura militar, vuelvo a repetirlo. Creo que una vez que se normalicen estas condiciones, cuando el trabajador pueda vivir dignamente con su salario, no va a tener ninguna necesidad de hacer horas extras y no se originarán todos esos hechos tan lamentables que ha mencionado el compañero legislador. Pero hay una situación muy especial: que si nosotros no establecemos que sea con autorización o sin ella, la necesidad va a seguir existiendo y el trabajador va a hacer horas extras. Pero si la ley no contempla y no tiene la autorización, no le van a abonar el recargo correspondiente. Por eso tiene que establecer con o sin autorización, porque si no sería un arma que le daríamos al empleador.

Perdóneme el compañero legislador pero esa es la razón por la que no aceptamos la modificación.

**Sr. Presidente** (Allende). — Si no se hace más uso de la palabra, se van a votar los artículos 61 y 218, tal como han sido propuestos por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Grubisich.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

**Sr. Grubisich.** — Con respecto al capítulo X, el artículo 273 establece que: «Cuando el trabajador reuniese los requisitos exigidos para obtener la jubilación ordinaria, el empleador deberá preavisarlo por los plazos previstos en esta ley e intimarlo a que inicie los trámites pertinentes, extendiéndole los certificados de servicios y demás documentación necesaria a esos fines. A partir de ese momento el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que la caja respectiva otorgue el beneficio, y por un plazo máximo de un (1) año.

»Concedido el beneficio o vencido dicho plazo, el contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación del empleador de indemnizar por antigüedad.»

Considero que esto no es favorable al trabajador porque si no obtiene la jubilación, por lo general debido a la lentitud y dificultad que existe para hacer los trámites —sobre todo en el caso de los obreros que viven en el interior y que no pueden viajar con tanta frecuencia como para hacer esas gestiones en la Capital Federal—, es peligroso que quede extinguido el contrato de trabajo sin obligación del empleador a indemnizar por antigüedad.

Creo que sería más conveniente que si vencido dicho plazo la caja no acordara el beneficio, el contrato de trabajo subsistiera, cuando no hay una causal que se pueda imputar al obrero.

**Sr. Presidente** (Allende). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

**Sr. Pennisi.** — Considero que es correcto porque debemos establecer como norma todo lo que sea beneficioso para el trabajador. En consecuencia, deberíamos incluir una modificación que diga simplemente «este plazo no regirá cuando el otorgamiento del beneficio demande un mayor tiempo de tramitación y no existiera en el caso responsabilidad del trabajador».

**Sr. Grubisich.** — Precisamente, ésa es la proposición.

**Sr. Presidente** (Allende). — Con la modificación introducida por la comisión, se va a votar el artículo 273.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Allende). — Queda aprobado el artículo 273 con la modificación propuesta y aceptada por la comisión.

**Sr. Culasso Mattei.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

**Sr. Culasso Mattei.** — Quisiera que el señor senador me aclarara si cuando el artículo 2º se refiere a la administración pública nacional, incluye también a empresas del Estado, tales como ENTel, Gas del Estado, etcétera. Y con respecto al artículo 137, si cuando se refiere a «institución de ahorro oficial» incluye también a los bancos estatales.

**Sr. Pennisi.** — Perdóneme: no alcanzo a interpretarlo. El primer párrafo del artículo 137 dice

que «Las remuneraciones en dinero debidas al trabajador con motivo de la relación de trabajo, deberán ser pagadas en efectivo, cheque a la orden del trabajador o mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre y orden en institución de ahorro oficial».

**Sr. Culasso Mattei.** — Precisamente, pregunto si eso se refiere también a los bancos estatales.

**Sr. Pennisi.** — Indudablemente.

**Sr. Grubisich.** — Sobre el mismo artículo, en el segundo párrafo, pienso que sería beneficioso establecer que la empresa puede solicitar que se le acuerde idéntica ventaja que al trabajador. Ocurre que hay zonas alejadas en que por razones de seguridad resulta útil a la empresa y conveniente al trabajador que el pago se haga en cheque o mediante depósito, como dice el artículo. Se prohíbe a los empleadores recurrir a la autoridad para que se les conceda la facilidad.

**Sr. Luder.** — El primer párrafo dice que se puede pagar con cheque.

**Sr. Grubisich.** — Sí, siempre que se haga a pedido del trabajador o de la asociación profesional representativa. Según ese texto la empresa no puede optar.

**Sr. Pennisi.** — El primer párrafo es claro al respecto.

**Sr. Grubisich.** — Pero el segundo párrafo del proyecto establece que «A pedido del trabajador o de la asociación profesional de trabajadores representativa, la autoridad de aplicación deberá disponer...» el pago de las remuneraciones en cheque o mediante depósito bancario.

**Sr. Luder.** — Es perfectamente claro. No es optativo para las empresas.

**Sr. Grubisich.** — ¿Es ésa la interpretación, señor miembro informante? Yo solicito que en determinados casos las empresas puedan pagar con cheques.

**Sr. Pennisi.** — El compañero senador me va a perdonar, pero no aceptamos esa modificación por una razón sencilla. Si se admitiera su sugerencia, en muchos casos con el cuento del cheque se pagaría en zonas alejadas un viernes, de manera tal que los trabajadores sólo podrían cobrar el lunes siguiente. Por lo tanto, si la organización sindical o el trabajador lo solicitan, estamos de acuerdo en otorgarlo; de otro modo, no. El artículo queda, pues, como está, sin modificaciones.

**Sr. Presidente (Allende).** — Con el texto propuesto por la comisión, se va a votar el artículo 137.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Allende).** — Corresponde votar el artículo 1º del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Legislación General, con las modificaciones introducidas a los artículos 62, 269 y 273 del régimen de contrato de trabajo, aprobadas por la Cámara.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Allende).** — De acuerdo con la interpretación de la Presidencia, aceptada por el cuerpo, queda aprobado el texto de la ley de contrato de trabajo. A continuación corresponde considerar los artículos 2º al 11 del dictamen de las comisiones, que no se refieren al contrato de trabajo propiamente dicho.

—Sin observación, se vota y aprueba el artículo 2º.

**Sr. Pennisi.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

**Sr. Pennisi.** — Es para solicitar que se agregue el 301 en la enumeración de artículos que se hace en el 3º. Es decir, que el artículo quedaría redactado así: «... 281, 282, 290, 291, 300 y 301».

**Sr. Presidente (Allende).** — Con el texto propuesto por el señor miembro informante, se va a votar el artículo 3º.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 4º a 10.

—El artículo 11 es de forma.

**Sr. Presidente (Allende).** — Queda aprobado el proyecto de ley.

Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

### 3

#### DIETAS DEL EX DIPUTADO NACIONAL MARIO ANSELMO VILLADA

**Sr. Presidente (Allende).** — A pedido del señor senador Pennisi está reservado en Secretaría el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley, en revisión, por el que se acuerda a la señora Luisa Leonor Rosas de Villada el importe de las dietas que le hubieren correspondido al ex diputado nacional Mario Anselmo Villada hasta la terminación de su mandato.

**Sr. Pennisi.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

**Sr. Pennisi.** — Compañero presidente y compañeros legisladores: no escapa a la memoria de los compañeros senadores que no hace mucho tiempo el Congreso de la Nación ha sufrido la pérdida de un compañero como lo era Mario Anselmo Villada.

Como existe una norma parlamentaria para estos casos, solicito que el importe de las remuneraciones que le hubieran correspondido por todo concepto hasta la terminación de su mandato le sea otorgado a su esposa, la compañera Luisa Leonor Rosas de Villada. Y es por este motivo que pido el tratamiento sobre tablas de este asunto.

ciones y fondo de desempleo. No se incluyen los que pudieran resultar por reajuste de remuneraciones o sus accesorios.

#### SUBROGACION

Art. 296. — El privilegio especial se traslada de pleno derecho sobre los importes que substituyan a los bienes sobre los que recaiga, sea por indemnización, precio o cualquier otro concepto que permita la subrogación real.

En cuanto excedan de dichos importes, los créditos a que se refiere el artículo 292 gozarán del privilegio general que resulta del artículo 297 de esta ley, dado el caso de concurso.

#### PRIVILEGIOS GENERALES

Art. 297. — Los créditos por remuneraciones y subsidios familiares debidos al trabajador por seis (6) meses y los provenientes de indemnizaciones por accidente del trabajo, por antigüedad o despido y por falta de preaviso, vacaciones y sueldo anual complementario, los importes por fondo de desempleo y cualquier otro derivado de la relación laboral, gozarán del privilegio general. Se incluyen las costas judiciales en su caso. Serán preferidos a cualquier otro crédito, salvo los alimentarios.

#### DISPOSICIONES COMUNES

Art. 298. — Los privilegios no se extienden a los gastos y costas, salvo lo dispuesto en el artículo 297 de esta ley. Se extienden a los intereses, pero sólo por el plazo de dos (2) años a contar de la fecha de la mora.

### TITULO XV

#### Disposiciones complementarias

##### EXTENSION DEL ARTICULO 198 AL CASO DEL TRABAJADOR

Art. 299. — Lo dispuesto en el artículo 198 de esta ley podrá extenderse excepcionalmente al caso del trabajador despedido, de acuerdo a las circunstancias de cada caso, apreciado con criterio restrictivo.

#### CONDUCTA MALICIOSA Y TEMERARIA

Art. 300. — Cuando se declarara maliciosa o temeraria la conducta asumida por el empleador que perdiere total o parcialmente el juicio, será condenado a pagar un interés de hasta dos veces y media el que cobren los bancos oficiales, para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales, el que será graduado por los jueces, atendiendo a la conducta procesal asumida.

Se considerarán especialmente comprendidos en esta disposición los casos en que se evidenciaren propósitos obstruccionistas o dilatorios en reclamos por accidente de trabajo, atendiendo a las exigencias más o menos perentorias provenientes del estado de la víctima, la omisión de los auxilios indispensables en tales casos, o cuando sin fundamento, y teniendo conciencia de la propia sinrazón, se cuestionase la existencia de la relación laboral, se hiciesen valer actos cometidos en fraude del trabajador, abusando de su necesidad o inexperiencia, o se opusiesen defensas manifiestamente incompatibles o contradictorias de hecho o de derecho.

#### ACTUALIZACION POR DEPRECIACION MONETARIA

Art. 301. — Los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo, demandados judicialmente, serán actualizados teniendo en cuenta la depreciación monetaria que se operara desde que cada suma es debida hasta el momento del efectivo pago. A tal fin, los jueces, de oficio o a petición de parte, aplicarán los índices oficiales de incremento del costo de vida.

Art. 302. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

2

~~Asignación de dietas del ex diputado nacional Mario Anselmo Vinada~~

~~—El texto del proyecto de ley aprobado es el que figura en la página 567.~~

## II

### INSERCCIONES

1

#### INSERCCION SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR FRUGOLI

##### DESEMPLEO

Por Juan Carlos Fernández Rivas

(Para „La Nación„)

Los argentinos, la mayoría de las veces, lamentablemente confundimos el orden prioritario que debemos asignar a nuestros más importantes problemas, a las causas que los originan y a sus efectivas soluciones.

Nos debatimos en discusiones negativas sobre aspectos secundarios, como si una especie de masoquismo nos impusiera ver los árboles en vez del bosque.

Creo que debemos encaminar nuestra acción en una senda constructiva y que para los grandes problemas debemos desechar meras diferencias partidistas y sectarias, que nos consumen inútilmente, encarando con el espíritu de grandeza que nos otorga nuestra calidad de argentinos, la búsqueda de soluciones rá-

pidas y satisfactorias a los grandes males que nos afligen.

Entre ellos, considero entre los de primera prioridad al tremendo flagelo social del desempleo, por sus imprevisibles consecuencias sociales y políticas, y cuya adecuada solución ayudará a lograr el verdadero cambio de estructura que la salud económica del país requiere.

La desocupación no sólo es un desastre familiar; es el germen que engendra la desesperación ante la presencia del hambre, la enfermedad y la muerte.

La indigencia no puede ser soslayada y menos admitida en la Argentina de 1974.

No soy partidario de la exagerada ingerencia estatal, pero sí de la que justamente le incumbe al Estado de acuerdo a su indeclinable responsabilidad de velar por el bienestar general de los habitantes.

Al hombre sin empleo no puede dejárselo desamparado, maldiciendo su propio destino. Debe protegerse en su infortunio, por medio de un seguro de desempleo, permitiéndole llevar una vida decorosa hasta tanto pueda lograr nuevamente ocupación.

El seguro de desempleo no es una innovación, se trata, por el contrario, de un régimen instaurado en los países más adelantados del orbe, y resultaría altamente beneficioso que aprovechando la experiencia extranjera, para evitar posibles abusos, se lo aplicara aquí por sus loables finalidades.

Hace muchos años que por la experiencia adquirida en mi vida industrial escribo y brego sobre este candente tema sin encontrar, lamentablemente, eco en los sectores responsables.

No obstante estos frustrados intentos, vuelvo nuevamente hoy a desarrollar mi pensamiento, con la esperanza de que esta vez sea escuchado, y lo hago basado en las siguientes razones:

1º Muy a menudo, por diversos medios y desaprensivamente, ya que faltan estadísticas fehacientes, se anuncian cifras, casi siempre dispares, sobre el número de desocupados existentes en el país, dando una imagen cuantitativamente equivocada del problema. Es que se ignora a ciencia cierta, no sólo la magnitud, sino la localización geográfica del desempleo, cuyo conocimiento sería de enorme importancia también desde el punto de vista económico.

Sólo son expresiones de impacto momentáneo que tienden a conmocionar políticamente a la opinión pública, pero sin resolver la situación de los hombres afectados.

2º Nadie menciona, sin embargo, el problema cualitativo de una desocupación latente y en agravación. Me refiero concretamente a la concentrada en franjas de edades de la vida humana, que son tabúes para obtener empleo, me refiero a las franjas de los 15 a 21 años y de los 35 a los 60 años.

Trataré de explicar seguidamente el porqué de esta sorprendente e irracional realidad, sustentada en una inadecuada legislación vigente y que muchas veces ha sido denunciada en cartas de lectores.

a) Los jóvenes de 15 a 21 años ven cerradas sus posibilidades de trabajo por disposiciones legales engorrosas cuando no por la proximidad del servicio militar. Ha desaparecido por ello el aprendizaje dentro de las empresas, eliminando el auténtico semillero de conocimiento de oficios y por lo tanto de formación de mano de obra calificada.

Estos hechos que frustran a la juventud en su intento de lograr las bases de un porvenir, inducen a que cerradas todas las puertas opten por una vida

perniciosa. Ellos pueden convertirse en punto de arranque de la delincuencia juvenil.

b) En cuanto a los hombres maduros de 35 a 60 años que han tenido la desgracia de perder un trabajo, hallan coartados los caminos para obtener otro similar, como lo denuncian también cartas de lectores, y ello es debido a que la legislación vigente teóricamente trata de ayudarlos, pero en la práctica los perjudica.

Efectivamente, en esta franja de edad los medios físicos van perdiendo vigor y las enfermedades hallan campo propicio. El pago que los empleadores deben abonar por cada dolencia en el lapso de 3 a 6 meses los previene para ocupar trabajadores de tales edades.

Es por ello que el mayor riesgo empresario de las indemnizaciones por despido, atractivas para algunos en el corto plazo y rémora para la gran mayoría, son también globalmente obstáculos en detrimento de esos hombres.

Son sumas de dinero que la empresa debe desembolsar, y que recibe el trabajador, sin que ambos se beneficien, dado que para la primera implica una carga y para el segundo sólo un puñado de billetes que se esfuman rápidamente si no consigue de inmediato un nuevo empleo. Con ello no se soluciona la desocupación; con ello no se logra empleo del desocupado; con ello no se soluciona la supervivencia hasta obtener un nuevo trabajo.

El futuro de los pueblos que avanzan está íntimamente ligado al desarrollo de su industria. Pero la industria moderna es dinámica y no estática y exige desplazamientos de mano de obra de sectores en retroceso frente a otros en expansión. La legislación actual es el mejor freno a este proceso, pues pretendiendo dar más seguridad a los ocupados da más inseguridad a los desocupados.

Este fenómeno del desempleo, por razones ampliamente conocidas, se acrecienta en el interior del país. Sus pobladores emigraban hacia los conos urbanos, esperanzados en alcanzar la solución a sus tremendos problemas, generando otro problema adicional al constituir o radicarse en las llamadas villas de emergencia que son vergüenza para el país.

La solución que propongo consiste en instaurar un seguro de desempleo, que represente un porcentaje fijo del salario mínimo vital y móvil a fin de asegurar un nivel de ingreso mínimo.

El deberá ser financiado por medio de aportes empresarios a una Caja de Desempleo. Dicho aporte podría ser inicialmente de aproximadamente el 5 % de los salarios pagados al personal empleado. La caja se encargaría con dichos fondos de los pagos por desempleo en el orden nacional, comenzando en una primera etapa por las provincias con promedios de ingreso por debajo de un tope a determinar. Ello permitirá confeccionar y mantener permanentemente actualizado, con sus múltiples ventajas, un realista censo de desempleo.

El incremento de costos empresarios en un 5 % considero que es mínimo —máxime cuando él puede ser neutralizado por una adecuación de la llamada ley de despido, ya que este seguro en gran medida cumple los fines de aquélla— frente a las enormes ventajas que sus distintas implicancias traerán para el país y en especial modo para los problemas sociales, económicos y políticos de las zonas menos desarrolladas.

Estimo que ésta es la base de partida indispensable para cualquier plan económico que quiera tener real contenido social. Con este conocimiento y ese objetivo estoy seguro que las empresas, si el Estado les ofrece condiciones atractivas para ello, aceptarán el desafío

e irán a instalarse a las zonas de bajos ingresos como verdaderas fábricas de trabajo, que es la única y verdadera solución.

Es indispensable recorrer al revés el camino viejo antes mencionado, del interior hacia los conos urbanos. Ello sólo se logrará si se impulsa rápidamente el crecimiento del ingreso medio de las zonas infra-desarrolladas, ya que es un axioma económico que una empresa atrae a otras dos, y éstas, a su vez, a otras cuatro, en una verdadera progresión geométrica.

Complementariamente, para ayudar a combatir el desempleo en el interior, debemos también empezar por construir, en primer término, las viviendas económicas que se proyectan, en las zonas más humildes del país. Así contribuiremos, a la vez que a generar nivel de ingresos y vivienda para los que aún están radicados allí, a servir como imán de atracción en un verdadero plan de retorno al interior a los trabajadores actualmente radicados en las villas de emergencia de Buenos Aires, los que, al retornar a sus lugares de origen, darán una solución adicional al problema de la concentración alrededor del Gran Buenos Aires.

El Registro Nacional de Desempleo será, a la vez, la mejor base para evidenciar la relación existente entre el desempleo y el nivel de educación, lo que nos empujará a abocarnos a la solución de este último. Como también está íntimamente vinculado al nivel de ingreso y al problema educacional, el problema sanitario, también habremos contribuido subsiguientemente a la solución de este último, ya que estos tres problemas están íntimamente interrelacionados.

El tratar de mejorar el nivel educacional de nuestro pueblo y, en especial modo, eliminar el analfabetismo radicado fundamentalmente en las provincias de bajos ingresos, es un imperativo que, aparte de otras razones, nos impone el avance tecnológico moderno. La creciente competencia económica internacional y, subsiguientemente, la soberanía de los países, están íntimamente relacionados al nivel medio educacional de los pueblos.

Estoy seguro, por todo esto y por muchas otras razones, que si los políticos, los sindicalistas y los empresarios se lo proponen realmente, con abstracción de sus intereses sectoriales y con la mira puesta sólo en el interés general del país, se puede hallar en no más de 30 días un sistema seguro de desempleo, adaptado a las características particulares de nuestro país. El, basado en la experiencia internacional en la materia, nos permitirá resolver los vergonzosos problemas humanos que existen en zonas desconocidas para la gran mayoría de los argentinos, en las que los niveles de desocupación, y consiguientemente hambre, desnutrición, mortalidad y analfabetismo, son realmente dramáticos, pues afectan fundamentalmente a la niñez.

Es necesario poner con números este problema ante el país, para que todos abramos bien los ojos y la mente.

El tiene, entre nosotros, solución mucho más sencilla que en otros países hermanos, y ayudará en gran medida al buscado reencuentro entre los argentinos.

#### EN TORNO DEL SEGURO DE DESEMPLEO

Por Raúl Pedro Scalabrini

El ingeniero Juan Carlos Fernández Rivas, en una edición del matutino «La Nación», propuso la creación de un seguro de desempleo para combatir los efectos

de la desocupación entre los trabajadores. En virtud del mismo se llegaría a abonar una renta mensual a los trabajadores sin empleo, durante todo el tiempo del desempleo, hasta el mismo momento en que consiguieron otro trabajo remunerado.

Por este camino se trataría de resolver alguno de los graves problemas derivados de la desocupación, con particular acento en el hambre, desnutrición, mortalidad y analfabetismo registrados en sectores humildes del país por esa razón.

Los pedidos de pensiones por desempleo suministrarían, a la vez, datos exactos sobre el número de desocupados, y, con ello, podría disponerse de herramientas de análisis económico-social muy superiores a las brindadas por los métodos de encuesta, que, como expresamos en otra oportunidad, sólo captan una parte de una realidad social más amplia que se les escapa.

#### Despido arbitrario

No obstante mi coincidencia con lo propuesto, entiendo que no deben considerarse incompatibles las indemnizaciones por despido arbitrario fijadas por nuestras leyes, a partir de la 11.729, con las prestaciones de los seguros de desempleo, y que deberían sumarse, por lo menos durante todo el tiempo necesario hasta que la mayoría de la población acepte el nuevo régimen y se apruebe su correcto funcionamiento.

El camino hacia un régimen integral de seguros nacionales de desempleo quedaría abruptamente cortado si se planteara la alternativa de elegir entre uno y otro régimen en forma absoluta, principalmente porque la rechazarían los trabajadores ocupados y sus organizaciones representativas a raíz del riesgo que significa cambiar algo real —aún incompleto y parcial— por mecanismos deseables pero desconocidos entre nosotros.

Una alternativa —tal vez temporal— podría consistir en considerar las indemnizaciones por despidos como pagos anticipados de las mensualidades de los seguros, y por tanto se le adjudicaría a las cajas la función de compensar a los empleadores por lo adelantado, y a los mismos trabajadores cuando la desocupación se prolongue por plazos tales que dieran derecho a prestaciones adicionales.

#### Gravar la riqueza

En segundo lugar en orden de redacción, pero no en orden de importancia, considero errónea la idea de financiar las Cajas de Desempleo con un aporte aproximado al 5% sobre los salarios abonados por los empleadores, puesto que operaría como un impuesto o un castigo monetario contra quienes contrataran más personas y contribuyan directamente a eliminar el desempleo.

Entiendo que debería gravarse la producción de manera que aporten en un pie de igualdad las empresas que proveen mucho trabajo y las que proveen poco por unidad producida. Así contribuirán en proporción a su plena riqueza las industrias prósperas, la gran industria y las multinacionales, como también aquel sector rural que, con bajos índices de empleo por hectárea, obtiene altos ingresos merced a la extensión de sus propiedades.

Si el gravamen que discutimos fuera proporcional a la producción, o, en otra formulación, proporcional a las deducciones impositivas por amortizaciones u otra señal del uso de capital («Mayoría», 15/12/73),



se desalentarian las importaciones de tecnología y derechos sobre técnicas que ahorran trabajo, social y económicamente indeseables cuando lo que se pretende es mejorar los niveles de empleo (objetivo .a., páginas 13, 40 y 52 del Plan Trienal) y los consumos energéticos que los mismos generan.

Esta política impositiva permitiría, como se ve, alentar el empleo productivo y el ahorro de divisas para invertir las con mejor provecho social. Entonces parece constituir un método mejor para armonizar máxima justicia social con máximo desarrollo económico que el gravamen al salario.

2

### INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PERETTE

#### PROYECTOS DE LEGISLADORES SOCIALISTAS

##### *En materia laboral*

Jornada de 8 horas. (Alfredo L. Palacios, 1906; Enrique del Valle Iberlucea, 1913, 1915, 1917; Enrique Dickmann, 1914, 1916, 1918, 1920, 1924, 1927; Adolfo Dickmann, 1928.)

Sábado inglés. (Enrique Dickman, 1914, 1916, 1918, 1920, 1924; Francisco Pérez Leirós, 1932.)

Ley de la silla. (Francisco Pérez Leirós, 1933.)

Prohibición del trabajo nocturno. (Angel M. Giménez, 1914, 1916.)

Cierre del comercio a las 20 horas. (Francisco Cúneo, 1917; Antonio de Tomaso, 1920; Adolfo Dickmann, 1928; Francisco Pérez Leirós, 1932.)

Asociaciones de trabajadores. (Juan B. Justo, 1912, 1918; Agustín S. Muzio, 1920, 1924; Adolfo Dickmann, 1928; Francisco Pérez Leirós, 1932, 1935, 1938, 1942; Alfredo L. Palacios, 1940.)

Reglamentación del trabajo a domicilio. (Enrique del Valle Iberlucea, 1913, 1915.)

Reforma a la ley de trabajo a domicilio. (Agustín S. Muzio, 1922, 1924, 1926.)

Semana de 40 horas de trabajo. (Enrique Dickmann, 1932, 1934, 1936, 1938.)

Pago de salarios en moneda nacional. (Enrique Dickmann, 1914, 1920.)

Sanción contra conchabos ilícitos. (Juan B. Justo, 1914; Alfredo Spinetto, 1923; Juan Antonio Solari, 1932.)

Descanso dominical. (Alfredo L. Palacios, 1904.)

Modificación de la ley de descanso dominical. (Alfredo L. Palacios, 1913.)

Indemnización por accidentes de trabajo. (Alfredo L. Palacios, 1907, 1912, 1914.)

Modificación a la ley de accidentes de trabajo. (Nicolás Repetto, 1928; Silvio L. Ruggieri, 1932, 1934, 1936, 1938, 1939, 1940, 1942; Alfredo L. Palacios, 1939.)

Procedimientos judiciales en asuntos relativos a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. (Silvio L. Ruggieri, 1932.)

Prohibiendo a empresas obligar a sus empleados y obreros a constituir asociaciones y firmar petitorios. (Francisco Cúneo, 1915.)

Servicio de inspección y vigilancia sobre aplicación de la ley de descanso dominical y de la reglamentación del trabajo de mujeres y niños. (Alfredo L. Palacios, 1912.)

Reglamentación del trabajo de los obreros. (Alfredo L. Palacios, 1915.)

Contrato colectivo del trabajo. (Enrique del Valle Iberlucea, 1919.)

Creación de los consejos judiciales del trabajo. (Enrique del Valle Iberlucea, 1919.)

Creación del consejo económico del trabajo. (Enrique del Valle Iberlucea, 1920.)

Vacaciones pagas para empleados y obreros. (Enrique Dickmann, 1927, 1932; Adolfo Dickmann, 1929.)

Aumento de sueldos y salarios con arreglo al costo de la vida. (Enrique Dickmann, 1942.)

Ajuste de la legislación del trabajo a las disposiciones de las convenciones de Washington y Génova. (Alfredo L. Palacios, 1934.)

Prohibición de despedir empleados por causa de matrimonio. (Alfredo L. Palacios, 1938.)

Prohibición del uso de pinturas a base de plomo. (Nicolás Repetto, 1913, 1915, 1918; Francisco Pérez Leirós, 1927, 1932; Alfredo L. Palacios, 1939, 1941.)

Sobre impedimento de obtener trabajo por razones de edad. (Francisco Pérez Leirós, 1942.)

Cumplimiento de leyes y reglamentación del trabajo. (Francisco Pérez Leirós, 1942.)

Modificación a la ley 1.544. (Marcelino Buyán, 1932, 1934.)

Obligación de las empresas particulares que trabajan para el Estado de solicitar obreros al Registro Nacional de Colocaciones. (Alejandro Castiñeiras, 1934.)

Fondo de garantía para el pago de sueldos. (Arturo da Rocha, 1933.)

Creación de la Comisión Nacional de Salarios. (Rómulo Bogliolo, 1942.)

Reglamentación higiénica del trabajo en graneros situados en estaciones de ferrocarril y puertos de embarque. (Nicolás Repetto, 1928.)

Creación de un tribunal del trabajo. (Joaquín Coca, 1925, 1927, 1934.)

Creando la Inspección General de las Leyes Reglamentarias del Trabajo. (Joaquín Coca, 1927, 1934.)

Reforma de la Constitución Nacional (substitución del artículo 15.) (Joaquín Coca, 1927.)

Higiene y seguridad en los lugares de trabajo. (Francisco Cúneo, 1917; Joaquín Coca, 1927.)

Publicación de avisos solicitando empleados y obreros en casos de conflictos gremiales. (Luis Ramiconi, 1935.)

Prohibiendo fabricar, importar y vender cerillas de fósforo blanco (represión del fosforismo). (Enrique del Valle Iberlucea, 1915, 1917, 1919.)

Conservación del puesto a los que prestan servicio militar. (Luis Ramiconi, 1934.)

Ley general del salario mínimo. (Américo Ghioldi, 1938, 1940.)

Creación del Registro Nacional de Proveedurías. (Juan Antonio Solari, 1934, 1936, 1938, 1940, 1942.)

Creación de una oficina del Departamento Nacional del Trabajo y agencia gratuita de colocaciones. (Juan Antonio Solari, 1932, 1940, 1942.)

Inclusión del personal de la imprenta del Congreso Nacional en el seguro colectivo del personal de la Cámara de Diputados. (Juan Antonio Solari, 1937.)



Reconocimiento de servicios del personal de ómnibus y colectivos anteriores a la ley 12.311. (Juan Antonio Solari, 1938, 1940, 1942.)

Organización del Departamento Nacional del Trabajo. (Carlos Moret, 1934; Juan Antonio Solari, 1939, 1941.)

Supresión de la propina. (Juan Antonio Solari, 1939, 1941.)

Creación del Registro Nacional de Colocaciones. (Carlos Moret, 1934; Juan Antonio Solari, 1940, 1942.)

Reglamentación del trabajo a domicilio. (Juan Antonio Solari, 1939, 1941.)

Alojamiento higiénico de los asalariados. (Augusto Bunge, 1916.)

Higiene y seguridad en los lugares de trabajo. (Carlos Moret, 1932, 1934.)

Supresión de las agencias comerciales de colocaciones. (Carlos Moret, 1932.)

Modificación de la ley de descanso dominical. (Augusto Bunge, 1918, 1920, 1923, 1926.)

Salario mínimo de \$ 6 diarios. (Augusto Bunge, 1920.)

Modificación de la ley de accidentes de trabajo. (Augusto Bunge, 1916, 1918, 1920, 1923, 1926, 1927.)

#### *Bancarios*

Estabilidad y escalafón del personal bancario. (Juan Antonio Solari, 1935, 1937.)

#### *Choferes particulares y profesionales*

Declarando a los choferes particulares no comprendidos en el servicio doméstico. (Silvio L. Ruggieri, 1939, 1941.)

Incluyendo los choferes particulares en los beneficios del descanso dominical. (Adolfo Dickmann, 1933.)

#### *Despachantes de aduana*

Régimen legal de los despachantes de aduana. (Silvio L. Ruggieri, 1939.)

#### *Empleados de servicios públicos*

Salario mínimo. (Enrique Dickmann, 1923, 1926, 1942.)

#### *Ferrovianos*

Jornada máxima de 8 horas. (Antonio Zaccagnini, 1914, 1916.)

Cómputo de servicios para la jubilación de ferroviarios. (Antonio Zaccagnini, 1915.)

Indemnización a obreros y empleados ferroviarios comprendidos en los beneficios y obligaciones de la ley 9.653. (Antonio Zaccagnini, 1916.)

Derogación del artículo 11 de la ley 9.653. (Antonio Zaccagnini, 1916.)

Inclusión del personal de diversas entidades ferroviarias en el régimen de la ley 11.308. (Marcelino Ganza, 1932, 1935.)

Modificación a la ley de jubilaciones ferroviarias. (Pedro Revol, 1924.)

Modificación a la ley 12.154, que reformó la ley de jubilaciones ferroviarias. (Marcelino Ganza, 1935.)

Nombramiento de una comisión mixta para estudiar el régimen de escalafón del personal ferroviario. (Marcelino Ganza, 1934; Manuel Palacín, 1942; Jerónimo Della Latta, 1936.)

Modificaciones a la ley de jubilaciones ferroviarias. (Marcelino Buyán, 1935; Manuel Palacín, 1942.)

Comodidades para el personal de los trenes de pasajeros. (Marcelino Buyán, 1936.)

Jornada de trabajo de obreros y empleados de ferrocarriles nacionales. (Marcelino Buyán, 1936.)

Régimen para traslado o concentración de oficinas y talleres de empresas ferroviarias. (Luis Ramiconi, 1936.)

Escalafón del personal administrativo. (Américo Ghioldi, 1938, 1940.)

Jornada de trabajo en los ferrocarriles nacionales. (Américo Ghioldi, 1938, 1940, 1942.)

Instalación de cadenas de seguridad en las locomotoras. (Serapio Molina, 1934.)

Indemnización al personal ferroviario por traslación. (Juan Antonio Solari, 1939, 1941.)

#### *Marítimos y portuarios*

Anteproyecto de ley de jubilaciones y pensiones. (Joaquín Coca, 1937.)

Reglamentación del trabajo del personal marítimo. (Antonio Zaccagnini, 1917; Agustín S. Muzio, 1924.)

Registro de serenitos del puerto de la capital. (José Palmeiro, 1932, 1934; Jerónimo Della Latta, 1936; Juan Antonio Solari, 1938.)

Reglamentación del trabajo portuario. (José Palmeiro, 1932, 1934; Juan Antonio Solari, 1938.)

Reglamentación del trabajo del personal de empresas de transporte marítimo y fluvial de matrícula nacional. (José Palmeiro, 1932, 1934; Juan Antonio Solari, 1938.)

#### *Mujeres y menores*

Reglamentación del trabajo de menores. (Nicolás Repetto, 1918.)

Reglamentación del trabajo de mujeres y niños. (Alfredo L. Palacios, 1906.)

Reformas a la ley 11.317 del trabajo de mujeres y niños. (Carlos Moret, 1932, 1934; Américo Ghioldi, 1936, 1938, 1940.)

Régimen de trabajo de las mujeres, niños y jóvenes. (Augusto Bunge, 1916, 1918, 1920.)

#### *Obreros del azúcar*

Reglamentación del trabajo de la industria azucarera. (Mario Bravo, 1913, 1915, 1918.)

#### *Obreros del tabaco y de la yerba*

Reglamentación del trabajo. (Juan Antonio Solari, 1940, 1942.)

#### *Obreros de la carne*

Régimen legal. (Juan Antonio Solari, 1939, 1941.)

#### *Obreros de la construcción*

Reglamentación del trabajo. (Juan Antonio Solari, 1940.)

#### *Obreros mineros*

Régimen del pirquino. (Alfredo L. Palacios, 1941.)

#### *Obreros y empleados de empresas cooperativas*

Inclusión de empleados de empresas cooperativas en el régimen de jubilaciones bancarias. (Adolfo Dickmann, 1934.)

*Obreros de la industria forestal y agrícola*

Inclusión en los beneficios de la ley de accidentes del trabajo. (José E. Pflieger, 1936.)

*Obreros y empleados del Estado y personal de la administración pública en general*

Salario mínimo. (Enrique Dickmann, 1942; Adolfo Dickmann, 1928, 1935; Marcelino Ganza, 1934.)

Jornada de 8 horas. (Nicolás Repetto, 1913, 1915, 1917.)

Salario mínimo y aumento de salarios y sueldos. (Adolfo Dickmann, 1930.)

Modificación del artículo 3º de la ley 12.715 sobre créditos al personal del Estado. (Carlos Sánchez Viamonte, 1942.)

Mejoras en los sueldos del personal subalterno de la prefectura marítima. (Manuel V. Besasso, 1936.)

Prohibición de efectuar descuentos e imponer multas al personal del Estado. (Augusto Bunge, 1916.)

Estabilidad y escalafón de los empleados y obreros del Estado. (Juan Antonio Solari, 1933, 1935, 1937, 1939, 1941.)

Rebaja de pasajes terrestres y fluviales al personal de la administración nacional. (Juan Antonio Solari, 1939, 1941.)

*Obreros y empleados del comercio y de la industria*

Modificación del artículo 157 del Código de Comercio (prohibición de despido sin causa justificada). (Alfredo L. Palacios, 1913, 1915.)

Régimen de trabajo de los empleados de comercio. (Alfredo L. Palacios, 1913.)

Indemnización por despido y falta de preaviso. (Adolfo Dickmann, 1929, 1932.)

Reformas a los artículos 155, 156 y 157 del Código de Comercio. (Héctor González Iramain, 1926.)

Caja Nacional de Retiros para Empleados y Obreros del Comercio, la Industria y las Faenas Rurales. (Manuel Palacín, 1938, 1939.)

Salario mínimo para industria y comercio. (Enrique Del Valle Iberlucea, 1919.)

Creación de la Caja Nacional de Previsión Social para Empleados y Obreros del Comercio. (Juan Antonio Solari, 1938, 1940.)

Creación de la Caja Nacional de Previsión para Obreros de la Industria. (Juan Antonio Solari, 1941.)

*Periodistas*

Creación de la Caja de Jubilaciones para Periodistas. (Francisco Pérez Leirós, 1934.)

Ampliación del plazo del artículo 14 de la ley de jubilaciones de periodistas para acreditar la prestación de servicios. (Francisco Pérez Leirós, 1942.)

Contrato colectivo para el trabajo periodístico. (Juan Antonio Solari, 1941.)

*Personal de espectáculos públicos*

Régimen legal sobre la prestación de servicios. (Carlos Moret, 1932, 1934; Américo Ghioldi, 1936, 1938.)

*Servicio doméstico*

Reglamentación del servicio doméstico. (Agustín S. Muzio, 1926.)

Prohibición a los menores de 15 años, de trabajar en el servicio doméstico. (Bruno J. Pietranera, 1933.)

Reglamentación del servicio doméstico. (Juan Antonio Solari, 1938, 1940, 1942.)

*Tranviarios*

Jubilación. (Nicolás Repetto, 1915.)

Reglamentación del trabajo. (Nicolás Repetto, 1915.)

*Trabajadores del campo*

Salario mínimo. (Enrique Del Valle Iberlucea, 1919.)

Alojamiento higiénico a trabajadores agrícolas y ganaderos. (Demetrio Buira, 1932, 1934.)

Peso máximo de las bolsas de maíz destinadas a recolección. (Juan F. Remedi, 1926.)

*Viajantes de comercio*

Régimen legal. (Silvio L. Ruggieri, 1938.)

Concepto de la profesión de viajante de comercio. (Joaquín Coca, 1935.)

Reglamentando la profesión de viajante, corredor o representante de comercio. (Carlos Moret, 1934; Joaquín Coca, 1936.)